ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 072

SUMARIO:

30 DE JUNIO DE 2008

CAPÍTULOS	TEMA
I	CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
II	INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
III	LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
IV	HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
V	CONOCIMIENTO DEL INFORME DE MAYORÍA PRESENTADO POR LA MESA CONSTITUYENTE 3, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES DEL ESTADO, PARA EL PRIMER DEBATE DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES REFERENTES A: ORGANIZACIÓN DEL PODER, EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN LEGISLATIVA Y CONSEJO DE ESTADO. (LECTURA DE LOS INFORMES).
VI	CONOCIMIENTO DEL INFORME DE MAYORÍA PRESENTADO POR LA MESA CONSTITUYENTE 3, ESTRUCTURA E INSTITUCIONES DEL ESTADO, PARA EL PRIMER DEBATE DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES REFERENTES A: ORGANIZACIÓN DEL PODER, EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORTE CONSTITUCIONAL, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTADO DE EXCEPCIÓN, INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN PÚBLICA (FUERZAS ARMADAS Y POLICIA CIVIL NACIONAL) Y CONSEJOS NACIONALES PARA LA IGUALDAD.
VII	CLAUSURA DE LA SESIÓN.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 072

ÍNDICE:

CAPÍTULOS	TEMA	PÁGINAS
I	Constatación del quórum.----------	1
II	Instalación de la sesión.----------	1
III	Lectura del Orden del Día.----------	1
	Intervención del asambleísta:	
	Lucio-Paredes Pablo ----------	3
IV	Himno Nacional de la República del Ecuador.-	5
V	Conocimiento del Informe de Mayoría presentado por la Mesa Constituyente 3, Estructura e Instituciones del Estado, para el primer debate de los textos constitucionales referentes a: Organización del Poder, cn la parte correspondiente a Función Legislativa y Consejo de Estado. (Lectura de los informes)--	5
	Intervenciones de los asambleístas:	
	Darquea Gustavo ----------	25,90
	Roldós León ----------	29
	Logroño Julio ----------	32
	Montaño Mae ----------	36
	Esteves Rafael ----------	39
	Ávila Abel ----------	43
	Viteri Leonardo ----------	47
	Andrade Trajano ----------	48
	Burbano Fernando ----------	53
	Taiano Vicente ----------	56
	Mendoza Tito Nilton ----------	61
	Alcívar Félix ----------	65
	Guamangate Gilberto ----------	69

Asume la Dirección de la sesión la asambleísta Aminta Buenaño, Primera Vicepre-

sidenta de la Asamblea Constituyente.--------- 72

Salazar Fernando ---------- 72

Reasume la Dirección de la sesión el asambleista Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Constituyente. ---------- 75

Chávez Hólger ---------- 76
Gracia César ---------- 79
Romo María Paula ---------- 83
Alarcón Fernando ---------- 87
Paredes Sara ---------- 91
Chuji Mónica ---------- 93
Rohón César ---------- 94
Hernández Luis ---------- 96
Pavón Andrés ---------- 98
Zambrano Ricardo ---------- 101
Rosado Gissel ---------- 105
Gómez Héctor ---------- 108

El señor Presidente declara en receso la sesión. ---------- 110

El señor Presidente reinstala la sesión.--------- 110

VI Conocimiento del Informe de Mayoría presentado por la Mesa Constituyente 3, Estructura e Instituciones del Estado, para el primer debate de los textos constitucionales referentes a: Organización del Poder, en la parte correspondiente a: Administración Pública, Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, estado de excepción, instituciones de protección pública (Fuerzas Armadas y Policía Civil Nacional) y Consejos Nacionales para la Igualdad. (Lectura de los informes)---------- 111

Intervenciones de los asambleístas:

Ávila Germánico ---------- 134
Vargas Wladimir ---------- 137,153
Esteves Rafael ---------- 141
Acosta Diana ---------- 145

Arboleda Amanda ---------- 150
Pavón Andrés ---------- 155
Gutiérrez Gilmar ---------- 156
Patricio Pazmiño ---------- 161
Rosado Gissel ---------- 163
Borja Diego ---------- 164
Roldós León ---------- 168
Taiano Vicente ---------- 170

El señor Presidente declara en receso a la sesión. ---------- 174

El señor Presidente reinstala la sesión. ------- 175

Bohórquez Ximena ---------- 175
Grefa César ---------- 177
Terán Héctor ---------- 180
Lucio-Paredes Pablo ---------- 184
Logroño Julio ---------- 186
Hurtado Lenin ---------- 191
Mendoza Tito Nilton ---------- 195,200
Vega Fernando ---------- 198,201,215
Ayala Catalina ---------- 202
Lupera Fausto ---------- 206,210,212
Calle María Augusta ---------- 207
Darquea Gustavo ---------- 211
Hernández Luis ---------- 216
Pilamunga Carlos ---------- 219
Alcívar Jaime Eduardo ---------- 221

VII Clausura de la sesión. ---------- 224

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 072

En el Centro Cívico "Ciudad Alfaro", ubicado en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, a las nueve horas cuarenta y un minutos del día treinta de junio del año dos mil ocho, se instala la sesión de la Asamblea Constituyente, dirigida por su Presidente, asambleista Fernando Cordero Cueva.----------

En la Secretaría actúa el doctor Francisco Vergara Ortiz, Secretario de la Asamblea Constituyente.----------

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Se pide a los señores asambleistas presentes, que inserten sus tarjetas electrónicas en sus curules. Se verificará la presencia de puntualidad de los señores asambleístas a las nueve y treinta. Siendo las nueve horas treinta, solicitamos a los señores asambleístas que ingresen sus tarjetas electrónicas en sus curules. Señor operador, verifique la asistencia de los señores asambleístas. Le solicito que entregue a Secretaría una impresión de los asambleístas presentes. Gracias. ----------

II

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días, señores asambleistas. Instalo la sesión. Tenemos ya sesenta y seis personas en la sala. Registre, señor Secretario, con quiénes iniciamos la sesión y proceda a informarle al Pleno sobre el Orden del Dia. ----------

III

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señor Presidente. En este momento. Señor operador, verifique la asistencia de los señores

asambleístas. Señores asambleístas, les solicitamos que verifiquen que sus tarjetas estén debidamente insertas en sus curules. Señor operador, hace llegar a la Secretaria la impresión de la asistencia. Gracias. "Por disposición del señor Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Constituyente y de conformidad con el artículo 7, numeral 6 y artículo 25 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión 72 del Pleno a realizarse el lunes 30 de junio del 2008 a las 9H30 en la sala de sesiones del Centro Cívico "Ciudad Alfaro", ubicada en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Dia: 1. Himno Nacional de la República del Ecuador; 2. Conocimiento del informe de mayoría presentado por la Mesa Constituyente 3, Estructura e Instituciones del Estado, para el primer debate de los textos constitucionales referentes a: Organización del Poder, en la parte correspondiente a Función Legislativa y Consejo de Estado; y, 3. Conocimiento del Informe de Mayoria presentado por la Mesa Constituyente 3, Estructura e Instituciones del Estado, para el primer debate de los textos constitucionales referentes a: Organización del Poder, en la parte correspondiente a Administración Pública, Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, estado de excepción, instituciones de protección pública, Fuerzas Armadas y Policía Civil Nacional y Consejos Nacionales para la Igualdad". Hasta ahí el Orden del Día propuesto, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Informe a la sala si es que hay alguna solicitud de cambio del Orden del Día. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Hasta la Secretaria ha llegado una solicitud que dice lo siguiente. "Arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea. Presente. De mis consideraciones: Por medio de la presente y

adjuntando las firmas respectivas solicito un cambio en el Orden del Día del lunes 30 de junio, para que los temas se presenten de la manera planteada a continuación, que en sí misma ya es excesiva, en lugar de lo presentado oficialmente. Punto 2. Análisis únicamente de los artículos de la Función Legislativa en el lugar de Función Legislativa y Consejo de Estado; y, en el punto 3, análisis de los artículos de Consejo de Estado, Administración Pública y Corte Constitucional, en lugar de Administración Pública, Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, estado de excepción, instituciones de protección pública y Consejos Nacionales para la Igualdad. Atentamente, Pablo Lucio-Paredes. Asambleísta". Se encuentran las firmas correspondientes, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Pablo Lucio-Paredes, tiene tres minutos para argumentar su solicitud. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LUCIO-PAREDES PABLO. Gracias, señor Presidente. Gracias, Leonardo Viteri, Vicepresidente. Lo que estoy pidiendo es algo muy sencillo, que el punto número dos, en lugar de tratar Función Legislativa y Consejo de Estado, tratemos únicamente Función Legislativa, que en sí mismo ya es importante y largos, son cerca de treinta artículos. Y en la siguiente sesión, en lugar de tratar siete u ocho puntos que abarcan alrededor de cuarenta y pico de artículos, nos centremos, que ya es excesivo, pero nos centremos únicamente en Consejo de Estado, Corte Constitucional y Administración Pública, que son alrededor de treinta artículos en lugar de cuarenta y cinco. Me parece que ya es excesivo pero tratando de ser razonable, propongo eso. ¿Por qué lo propongo? Entre otras cosas porque en la reunión que tuvimos de los jefes de bloque, que ojo, me ha sorprendido mucho lo que usted me dijo, señor Presidente el sábado y que luego lo repitió en

el programa de Carlos Vera, resulta que esa reunión no era de jefes de bloque convocada oficialmente por usted, sino que ha sido una reunión de jefes de bloque convocada por Galo Borja, Jefe de Bloque de Alianza País, cuando yo pensé y creo que todos los presentes, el doctor Esteves, León, Ximena, Mae, estaban convencidos que asistimos a una reunión oficial, con, sino no hubiéramos ido, oficial con el Presidente o cuasi Presidente en ese momento de la Asamblea y resulta que ha sido una reunión informal convocada por el Jefe de Bloque de Alianza País. Francamente, estoy muy sorprendido con eso. Pero bueno, en esa reunión se quedó en varias cosas, entre otras cosas, con León, efectivamente, propusimos que se acorten los tiempos y lo hicimos no caído del cielo, lo hicimos con buena voluntad, señor Presidente y sacrificando el tiempo de la gente, no como usted dijo ayer en el programa de Carlos Vera, que bueno, usted lo acogió porque nosotros lo propusimos, así, caído del aire, a usted no le quedó más que ingenuamente aceptar lo que nosotros decíamos, esto es algo que se ha venido conversando, fue un sacrificio y fue un esfuerzo de todos y de buena voluntad en esa dirección. Bueno, en esta reunión, en el espíritu de esa reunión dijimos que habían varias cosas que hacer y entre esas cosas, presentar paquetes que no sean paquetes demasiado grandes, es en función de esa reunión y de lo lógico y del sentido común que estoy proponiendo este cambio en el Orden del Día que ojalá sea aceptado. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, pídale al operador que active el sistema para tomar votación a ver si el Pleno acepta la solicitud. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren

insertas en sus curules. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas para que puedan hacer uso del derecho al voto. Ochenta y un asambleístas presentes, ochenta y dos asambleístas presentes, continúe, señor operador. Los asambleístas que se encuentren de acuerdo con la moción presentada por el asambleísta Pablo Lucio-Paredes, votan afirmativamente, caso contrario pueden votar negativo, en blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Señor operador. Estamos votando, señores asambleístas. Señor operador, cierre la votación y presente resultados. Los resultados son los siguientes: diecinueve votos afirmativos, cincuenta y ocho negativos, un blanco, cuatro abstenciones. Presente los cuadros, por favor. Señor operador, presente los cuadros, por favor. Gracias, señor operador, podemos continuar, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto del Orden del Día. ----------

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. "1. Himno Nacional de la República del Ecuador". ----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Segundo punto del Orden del Día. ----------

V

EL SEÑOR SECRETARIO. "2. Conocimiento del Informe de Mayoría presentado por la Mesa Constituyente 3, Estructura e Instituciones del

Estado, para el primer debate de los textos constitucionales referentes a: Organización del Poder, en la parte correspondiente a Función Legislativa y Consejo de Estado". Hasta ahí el segundo punto, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Proceda a leer el informe de mayoria. ---------

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. "Mesa 3. Informe de mayoria. Estructura e Instituciones del Estado. Parte III. La organización del poder. Capitulo 2. Función Legislativa. 1. Diagnóstico. 1.1 Deslegitimación de la Función Legislativa. El Congreso y los partidos políticos, son las instituciones que, en los últimos tiempos, mayor rechazo han recibido por parte de la ciudadanía porque no han logrado consolidar la confianza y credibilidad institucional. La corrupción ha profundizado el descrédito del Parlamento. A esto se ha sumado la compra de conciencias evidenciada en la designación de sus autoridades, en la aprobación de leyes o en el ejercicio del control político; la baja calidad de su producción legislativa, orientada a satisfacer intereses de grupos hegemónicos; la labor de fiscalización utilizada como un mecanismo de presión para obtener prebendas personales. Las pugnas internas originadas al momento de la designación de sus autoridades intentó ser superada, mediante un mecanismo de designación entre bloques mayoritarios, pero ni aún esta fórmula no terminó con los enfrentamientos partidarios y la disputa por prebendas. Por su parte, los electores no se han sentido identificados con la gran mayoria de sus supuestos representantes, debido principalmente a la forma mañosa y arbitraria de su selección por parte de los caudillos políticos. Todo esto ha generado una imagen profundamente negativa de la ciudadanía sobre el Congreso. 1.2. Pugna permanente de poderes entre Ejecutivo-Legislativo. Sectores del

Congreso en su actitud de obtener ventajas personales y corporativas han utilizado en muchas ocasiones la fiscalización y el juicio político contra Presidentes, Ministros y Magistrados de la Corte como herramienta de chantaje a las otras funciones del Estado. Era frecuente que un Ejecutivo carente de mayoría en el Congreso, en su afán de lograr la aprobación de leyes de acuerdo a sus intereses, obtener autoridades de control afines a su entorno político, así como reestructurar a su conveniencia a los organismos de otras instituciones del Estado, procedía a conformar mayorías dóciles con un alto costo político, económico y moral. Todas estas situaciones generaban un choque de intereses contrapuestos, con graves consecuencias para la estabilidad democrática y la gobernabilidad, donde estaba totalmente ausente el diálogo para articular un proyecto de país. 1.3. Progresiva pérdida de atribuciones de la Función Legislativa. El Congreso presionado por la ciudadanía limitó sus atribuciones, originalmente determinadas en la Constitución de 1978, despojándose de algunas de ellas, como la del control político a la Corte Suprema (1997), sin embargo siguió interviniendo en su designación, acudiendo a la figura de la interpretación de la Constitución y siempre usando la frase "por última vez". Así mismo, en el año de 1995, los diputados perdieron la facultad de manejar fondos del Presupuesto del Estado, debido al clientelismo político y la corrupción que se originó al respecto y en la codificación de la Constitución de 1998 se eliminó la facultad de destituir a los Ministros luego del juicio político y censura. 1.4. Intromisión del Congreso en la Función Judicial. Bajo el criterio de "hacer posible la aplicación de los principios aprobados en la consulta popular del 25 de mayo de 1997", en la que se determinó el principio de cooptación para la integración de la Corte Suprema de Justicia, antes de la instalación de la Asamblea Nacional de 1997, el Congreso expidió una reforma constitucional que declaró terminado el período de los

magistrados en funciones de la Corte Suprema de Justicia y, en base de un procedimiento creado y manejado por ellos mismos, procedió a designar a una nueva Corte, bajo el control de la partidocracia. En el mes de diciembre del 2004, el Congreso Nacional con el apoyo del entonces presidente Lucio Gutiérrez, teniendo como antecedente la transitoria vigésima quinta de la codificación de la Constitución de 1998, consideró que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encontraban en funciones prorrogadas y utilizando una declaratoria de inconstitucionalidad del año 1999, resolvió declarar cesantes en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y procedió a designar inconstitucionalmente a sus remplazos, además, dispuso la reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional. Estos hechos colmaron la paciencia ciudadana y condujeron en abril del 2005, como consecuencia de la llamada "rebelión de los forajidos", a la destitución de Gutiérrez, en medio de un descrédito nunca visto del Congreso y una crisis general del sistema político ecuatoriano. 2. Fundamentación. La Función Legislativa es la máxima expresión de la representación política de la sociedad, por tanto la recuperación de su imagen va a depender fundamentalmente de un cambio profundo en las actitudes y comportamientos de las organizaciones políticas y sus dirigentes, asegurando mecanismos democráticos y en base a méritos de selección de sus candidatos y mejorando la transparencia de los procesos electorales, a fin de que los ciudadanos estén en condiciones de elegir a quien les represente realmente sus intereses. La estructura de la Función Legislativa define la forma en que los ciudadanos van a estar representados, sus atribuciones, los deberes y prohibiciones de los asambleístas, la forma en que ejerce el control político y el proceso de formación y sanción de las leyes. Los principales aspectos incorporados se detallan a continuación. 2.1. Consideramos conveniente el cambio de

nombre del Congreso Nacional por Asamblea Nacional, a fin de proyectar una nueva imagen de la Función Legislativa, sustentada en el nuevo modelo de Estado que nos encontramos construyendo. Es importante tener en cuenta que el nombre de "Asamblea" se encuentra ya posesionada en la ciudadanía como alternativa de cambios y espacio de participación. 2.2. Proponemos que se mantenga el sistema unicameral, ya que éste permite mayor agilidad en el proceso de formación de leyes, más aún cuando la nueva Función Legislativa se verá abocada a una ardua tarea para transformar el marco jurídico vigente, luego de esta Constituyente. Además la inexistencia de un segundo cuerpo genera más sentido de responsabilidad en el cuerpo único y propende a la economía de recursos económicos. 2.3. Estamos proponiendo una nueva integración de representación política, de modo que además de los asambleístas provinciales, existan asambleístas nacionales, asambleístas por circunscripciones territoriales dentro y fuera del país y asambleístas por las futuras regiones que se creen, dejando a la ley la fijación de su número, ya que esto va a ir variando en el futuro. La presencia de asambleístas nacionales a ser elegidos por todo el país, fortalece la imagen de los partidos y movimientos nacionales y permitirá la promoción de nuevos líderes a nivel nacional. La incorporación de asambleístas por los emigrantes, va a permitir que su valioso aporte evidenciado en esta Asamblea pueda mantenerse. 2.4. Consideramos que la sede de la Función Legislativa debe mantenerse en la capital de la República, como un referente histórico de nuestra independencia y nacionalidad, posibilitando además una relación cercana y oportuna con la Función Ejecutiva y otras instituciones del Estado. 2.5 Se elimina la facultad de designar a los funcionarios de los organismos de control, al Procurador General del Estado y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Se mantiene la facultad de enjuiciamiento político y destitución. 2.6 Se otorga a la Asamblea

Nacional la facultad de proceder a la destitución del Presidente de la República en casos taxativamente determinados, exigiéndose una mayoría calificada para aprobar la resolución. Esta atribución podrá ser ejercida por una sola vez durante su período y conlleva la disolución simultánea de la Asamblea y la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas por el tiempo que falte para cumplir el período. Establece un sistema de contrapesos a la misma facultad otorgada al Presidente de la República y propende a establecer un sistema de corresponsabilidad en las relaciones Ejecutivo-Legislativo. 3. Propuesta de articulado. Parte III. De la Organización del Poder. Capítulo 2. De la Función Legislativa. Sección primera. De la Asamblea Nacional. Artículo (1). La Función Legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional. Está integrada por asambleistas elegidos para un período de cuatro años. La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en la ciudad de Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Artículo (2). La Asamblea Nacional está integrada por asambleístas nacionales, asambleístas por regiones, provincias y/o circunscripciones electorales, dentro y fuera del país, de acuerdo al territorio y la población, según lo establecido en la Constitución y la ley. Para ser asambleista se requerirá ser ecuatoriano, tener al menos dieciocho años al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. Artículo (3). La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 1. Posesionar al Presidente/a y Vicepresidente/a de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral, conocer sus renuncias o destituirlos. 2. Declarar la incapacidad física o mental del Presidente/a de la República y cesarle en sus funciones de acuerdo a lo previsto en la Constitución. 3. Elegir al Vicepresidente/a de la terna propuesta por el Presidente/a de la República, en caso de falta definitiva. 4. Conocer los informes anuales que debe presentar el

Presidente/a de la República y pronunciarse al respecto. 5. Reformar la Constitución. 6. Expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 7. Crear, modificar, ceder o suprimir, mediante ley impuestos, tasas y otros ingresos tributarios, con excepción de las atribuciones que la Constitución confiere a los organismos del régimen autónomo y descentralizado. 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales, en los casos que corresponda. 9. Fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva y solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que considere necesarias. 10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del Presidente/a o Vicepresidente/a de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. 11. Posesionar al Procurador General del Estado, al Contralor General del Estado, al Ministro Fiscal General, al Defensor del Pueblo, a los Superintendentes y a los vocales del Consejo Nacional Electoral. 12. Aprobar el Presupuesto General del Estado y vigilar su ejecución. 13. Fijar el límite de endeudamiento público, de acuerdo con la ley. 14. Conceder amnistías generales por delitos políticos e indultos por delitos comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. En ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos humanitarios. No se concederá el indulto por delitos cometidos contra la administración pública ni por delitos mencionados en el artículo ... numeral ... de esta Constitución. 15. Las demás que consten en la Constitución y la ley. Parágrafo 1. De la organización y funcionamiento. Artículo (4). La Asamblea Nacional elegirá a un Presidente y a dos Vicepresidentes de entre sus miembros, para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos de acuerdo al procedimiento establecido en la ley y los reglamentos. Los Vicepresidentes remplazarán, en su orden, al Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva, y la Asamblea Nacional llenará las

vacantes cuando sea del caso y por el tiempo que faltare. La Asamblea Nacional elegirá de fuera de su seno un secretario y un prosecretario. Artículo (5). El Consejo de Administración Legislativa es el máximo órgano de administración y está integrado por el Presidente, dos Vicepresidentes y por cuatro vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre los asambleístas nacionales pertenecientes a diferentes bancadas. Artículo (6). La Asamblea Nacional se instalara en Quito, sin necesidad de convocatoria, treinta días posteriores de la proclamación oficial de los resultados electorales. El pleno sesionara de forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año, de quince días cada uno. Artículo (7). Durante el tiempo de receso el Presidente de la Asamblea Nacional por sí o a petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea, o a solicitud del Presidente de la República, convocara a periodos extraordinarios de sesiones, para conocer exclusivamente los asuntos específicos señalados en la convocatoria. Artículo (8). Los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de asambleístas que representen por lo menos el diez por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional, podrán formar una bancada legislativa. Los partidos o movimientos que no lleguen a tal porcentaje podrán unirse con otros para formarla. Artículo (9). Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrara comisiones especializadas permanentes, en las que participaran todos sus miembros. La ley determinara el número, conformación y competencias de cada una de ellas. Artículo (10). A fin de establecer una adecuada relación con la sociedad y garantizar el acceso a una información veraz y oportuna, la Asamblea Nacional creará el sistema de participación y el de comunicación social, de acuerdo a la Constitución y la ley. Artículo (11). Para el cumplimiento de sus labores, la Asamblea Nacional se regirá por la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento Interno Para la reforma o

codificación de esta ley se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea; una vez aprobada se enviara al Registro Oficial para su publicación. Parágrafo 2: De los Asambleístas. Articulo (12). Los Asambleístas son dignatarios que ejercen una función pública al servicio del país; actuaran con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad, de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y están obligados a rendir cuentas de su gestión a sus mandantes, de conformidad con la ley. Artículo (13). Los Asambleístas mientras actúen como tales, no podrán: 1. Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueren incompatibles con su cargo de asambleista, excepto la cátedra universitaria, siempre que su horario lo permita. 2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, con la excepción de la Comisión de Administración Legislativa. 3. Gestionar nombramientos de cargos públicos. 4. Percibir dietas ni otros ingresos de fondos públicos que no sean los de Asambleístas. 5. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. 6. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado. 7. Celebrar contratos con entidades del sector público. Quienes incumplan estas prohibiciones perderán la calidad de Asambleístas. Artículo (14). Los y las Asambleístas gozan de fuero de Corte Suprema de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Para iniciar causa penal en contra de un Asambleista se requiere autorización previa de la Asamblea. Si la solicitud en que el juez competente hubiera pedido autorización para el enjuiciamiento no fuere contestada en el plazo de 30 días, se la entenderá concedida. Durante los recesos se suspenderá

el decurso del plazo mencionado. Solo se le podrá privar de la libertad en caso de delito flagrante, llamamiento a juicio por delito reprimido con reclusión, o sentencia en firme con pena privativa de libertad. En los casos que no se encuentran relacionados con el ejercicio de sus funciones no se requerirá autorización de la Asamblea Nacional para iniciar causa penal en su contra. Causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán tramitándose ante el juez que avocó conocimiento de la causa. Sección Segunda. Del control político y del control de la acción del Gobierno. Articulo (15). La Asamblea Nacional tiene la facultad de proceder a la destitución del Presidente/a de la República, en los siguientes casos: 1. Por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado; 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilicito; 3. Por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Para proceder a la destitución se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo y conlleva la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas. En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Para estas elecciones se aplicará lo dispuesto en la Constitución y la ley. Artículo (16). La Asamblea Nacional tiene la facultad de proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, del Vicepresidente/a de la República, los Ministros/as de Estado, del Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes, miembros del Consejo Nacional Electoral, vocales del Tribunal Contencioso Electoral y

las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado, por incumplir las funciones asignadas por la Constitución y la ley. Para proceder a la censura y destitución se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de los miembros de la Función Electoral, que se requerirá de las dos terceras partes. La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros de Estado, cuya permanencia en el cargo corresponded decidir al Presidente/a de la República. Si de la censura se derivaren indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase al conocimiento del juez competente. Sección Tercera. De la formación y sanción de las leyes. Artículo (17). La Asamblea Nacional, de conformidad con las disposiciones de esta sección, aprobara como leyes las normas generalmente obligatorias de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones previstos legal o reglamentariamente. Artículo (18). Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes: 1. Normar el ejercicio de libertades y derechos humanos, garantizados en la Constitución. 2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 3. Crear, modificar o suprimir tributos, con excepción de las atribuciones que la Constitución confiere a los organismos del régimen autónomo y descentralizado. 4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los organismos del régimen autónomo y descentralizado. 5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a parroquias. 6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación, la facultad de expedir normas de carácter general, en las materias propias de su competencia, sin que éstas puedan alterar o innovar las disposiciones legales. 7. Los demás casos en que la

Constitución determine. Parágrafo 1. De las Clases de Leyes. Articulo (19). Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas: 1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Las demás serán leyes ordinarias. Una ley ordinaria no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a titulo de ley especial. Parágrafo 2: De la Iniciativa Legislativa. Articulo (20). La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 1. A los y las asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento (5%) de los asambleístas; 2. Al Presidente/a de la República; 3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia; 4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo, en las materias que les corresponda de acuerdo a sus atribuciones; 5. A los ciudadanos que estén en goce de los derechos politicos y a las organizaciones sociales, que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto dos por ciento (0.2%) del padrón electoral nacional. Quienes presenten un proyecto de ley de conformidad con estas disposiciones, podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados, de conformidad con la ley. Artículo (21). Solamente el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división politico-administrativa del país. Artículo (22). Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados al Presidente de la

Asamblea Nacional con la correspondiente exposición de motivos, el articulado que se propone y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogan o se reforman, si fuera del caso. Si el proyecto no reuniere estos requisitos no será tramitado. Parágrafo 3. Del Trámite Ordinario. Artículo (23). El proyecto de ley será sometido a dos debates, de conformidad con lo establecido en la ley y en el reglamento. El Presidente de la Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establezca la ley, ordenará que se lo distribuya a los asambleistas y se difunda públicamente su extracto. Enviará el proyecto a la comisión que corresponda, la cual iniciara su respectivo conocimiento y tramite de acuerdo a la ley. Ante la comisión podrán acudir los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición, participación que será regulada por la ley. Artículo (24). Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviara al Presidente de la República para que lo sancione u objete fundamentadamente. Sancionado el proyecto de Ley o no habiendo objeciones dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que el Presidente de la República lo recibió, se promulgara en el Registro Oficial. Artículo (25). Si el Presidente de la República objetare totalmente el proyecto de Ley por inconveniencia, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año, contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviara inmediatamente al Registro Oficial para su promulgación. Artículo (26). Si la objeción por inconveniencia fuere parcial, el Presidente de la República presentara un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto; igual obligación cumplirá la Asamblea Nacional al momento de aprobar las modificaciones sugeridas. La Asamblea deberá examinarla dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la

fecha de entrega de la objeción presidencial, y podrá, en un solo debate, allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. Podrá también ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. En cualquiera de los dos casos, la Asamblea enviara la ley al Registro Oficial para su publicación. Si la Asamblea no considerare la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a ésta y el Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley en el Registro Oficial. Si la objeción fuere a la vez por inconveniencia y por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad. Artículo (27). Si la objeción del Presidente de la República se fundamentare en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá el dictamen concurrente de la Corte Constitucional, que deberá emitirlo dentro del plazo de treinta días. Si el dictamen confirmare la inconstitucionalidad total del proyecto, éste será archivado. Si confirmare la inconstitucionalidad parcial, la Asamblea Nacional deberá realizar las enmiendas necesarias para que el proyecto pase luego a la sanción del Presidente de la República. Si la Corte Constitucional dictaminare que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional ordenara su promulgación. Parágrafo 4: De los trámites Especiales. Artículo (28). El Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. En este caso, la Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de treinta días, contados a partir de su recepción. Mientras se discute un proyecto calificado de urgente, el Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Artículo (29). Si la Asamblea no aprobare, modificare o negare el

proyecto calificado de urgente en materia económica, en el plazo señalado en el artículo anterior, el Presidente de la República lo promulgara como Decreto-Ley en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarlo o derogarlo, siguiendo el trámite ordinario previsto en la Constitución. Parte III. La Organización del Poder. Capítulo 8. Consejo de Estado. Fundamentación. El Consejo de Estado reaparece en la Constitución, pero con caracteristicas muy especiales y diferentes a los otros Consejos de Estado que existieron a lo largo de la historia constitucional del Ecuador, asi también muy diferente a los que existen en otros paises. El nuevo Estado que emergerá de esta Constituyente contará con cinco funciones, dotadas de total independencia y autonomía, pero que necesitan de una instancia institucionalizada de diálogo y articulación, para tratar en lo posible de evitar que los conflictos que se puedan suscitar entre ellas, no lleguen a una situación de gravedad, que altere la estabilidad democrática y la gobernabilidad. De esta manera el Consejo de Estado tendrá entre sus competencias propender las relaciones armónicas entre las funciones del Estado, establecer objetivos nacionales a partir de la formulación de políticas comunes y consensuadas. Es un organismo de consulta en el tema de la defensa de la soberanía nacional, aspecto importante, ya que la defensa de la Nación involucra a todo el Estado y debe existir una corresponsabilidad de todas las funciones. El Consejo de Estado tendrá además iniciativa para plantear reformas a la Constitución y a las leyes. El organismo estará integrado por los titulares de todas las funciones y estará presidido por el Jefe de Estado. Propuesta de articulado. Parte III. De la organización del poder. Capítulo 8. Del Consejo de Estado. Artículo 1. Crease el Consejo de Estado, como órgano superior de consulta y articulación, para el dialogo, la cooperación y la corresponsabilidad entre las funciones del Estado, a fin de garantizar la gobernabilidad, la

estabilidad democrática y el cumplimiento de los objetivos nacionales. Es además, el órgano superior de consulta y asesoramiento del Estado en los asuntos relacionados con la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública. Artículo 2. Está integrado por los titulares de las Funciones Ejecutiva, Judicial, Legislativa, Electoral y de Transparencia y Control Social; lo preside el Jefe de Estado, quien lo convocara al menos trimestralmente. Artículo 3. El Consejo de Estado ejerce las siguientes atribuciones: 1. Promover y fortalecer la armonía y cooperación entre las Funciones del Estado; 2. Coordinar conjuntamente los planes, programas y proyectos de las funciones del Estado a fin de formular políticas comunes y consensuadas, las cuales se constituirán en objetivos nacionales; 3. Absolver consultas y asesorar en los temas relacionados con la defensa de la soberanía nacional; 4. Presentar ante la Asamblea Nacional propuestas de reformas constitucionales o de leyes que permitan la gobernabilidad y estabilidad democrática; 5. Conocer y resolver los conflictos que se susciten entre las funciones del Estado y proponer soluciones consensuadas para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad democrática; 6. Las demás que le confiera la Constitución y la ley". Hasta ahí el Informe de la Mayoría y el articulado correspondiente a este punto. Señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, hace pocos momentos se nos entregó un documento que ya está copiado y repartido a ustedes, firmado por los asambleístas Sara Paredes, Fernando Alarcón, Leonardo Viteri, Julio Logroño, integrantes de la Mesa. Si bien he verificado con los señores de la Mesa, tanto Presidente como Secretario a través de la Presidencia, no fue conocido por los integrantes de la Mesa, considero que es pertinente y le pido que el Pleno acepte así, que sea leído este informe y que sea conocido por todos ustedes. Señor Secretario,

proceda. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Informe de minoría. Función Legislativa...-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, solamente para que nos ayude en los futuros casos. Los informes deberían venir conjuntamente con el de mayoría para que tengan el mismo procedimiento y el mismo tiempo de lectura previo de parte de los asambleístas. Pero con excepción continúe. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Sara Paredes de Villagómez, Fernando Alarcón Estupiñán, Julio Logroño Vivar y Leonardo Viteri Velasco, asambleístas integrantes de la Mesa No. 3, conforme lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de las Mesas Constituyentes en su artículo 20, que prescribe la forma como se presentará ante la Mesa, un Informe de Minoría, indicamos lo siguiente: I. El objeto. Las observaciones que en este documento se realizan tienen relación con los textos constitucionales presentados por la Mesa Constituyente 3, sobre Función Legislativa, articulado con el que en algunos de sus textos hemos venido manifestado nuestra abierta oposición, motivada en circunstancias de estricto derecho, ya que esta Asamblea Constituyente de Plenos Poderes, no puede inventar instituciones o formas de legislar que no tengan sustento en la doctrina, la costumbre, la ley y la jurisprudencia, que a nivel Parlamentario se utiliza de conformidad a los avances que el mundo y las culturas de derecho. II. Antecedentes. El debate acerca de la Función Legislativa en la Mesa Constituyente N° 3, se inició el 3 de mayo del 2008 y se desarrolló en un total de 14 sesiones de Mesa entre el primero y segundo debate. Desde el inicio de la discusión de los textos constitucionales, se fueron postergando los primeros cinco artículos de la propuesta presentada en Mesa que

hacían referencia al nombre, sede, forma de integración, entre otros que se los fue dejando de lado hasta el final del tratamiento de este tema. El 18 de junio de 2008, a las quince horas fuimos convocados para el tratamiento en segundo debate de los textos constitucionales de la Función Legislativa, cabe destacar que el mismo día se nos convocó por Secretaria de la Asamblea Constituyente a la sesión 64 del Pleno, pese a esto, asistimos a la hora indicada en la convocatoria de Secretaría de Mesa 3, pero no habia ninguna actividad por lo que decidimos retornar al Pleno. Luego, siendo aproximadamente las quince horas treinta del mismo dia, ilegalmente deciden reunirse un grupo de asambleistas y aprobar artículos referentes de la Función Legislativa y haciendo omiso a la voluntad de más de ochenta asambleistas que firmaron a favor de que Manabi sea la sede de esta Función del Estado, no la incluyeron en el texto constitucional que hace mención a la sede legislativa. Cabe destacar que al interior Mesa 3 existieron nueve asambleístas que firmaron por el apoyo a esta propuesta de Manabi, que al momento de la votación varios de ellos se manifestaron en contra de la misma. III. Análisis y razonamiento. Denominar como Asamblea Nacional a la Función Legislativa es cortar la esencia y el carácter de su destino, ya que no solo en Ecuador sino en más de 90% de países del mundo, entre las funciones del Estado se encuentra: la Ejecutiva, representada por el Presidente de la República o su Premier; Función Legislativa, presentada por el Congreso Nacional, ya sea ésta uni o bicameral; por último, la Función Judicial denominada en el Ecuador como jurisdiccional, por lo que en la existencia de un Derecho Internacional constituido debe respetarse las instituciones que cobran vigencia a partir del triunfo de la Revolución Francesa, momento en el que nace el verdadero Estado democrático que suprimió para siempre todo poder absolutista y tirano. Por las razones expuestas nos mantenemos en la idea de que no cabe la actual denominación que se pretende dar al

órgano que promulga y sistematiza las leyes, la Función Legislativa reemplazado por Asamblea, su especificidad de Congreso Nacional. Sobre este contenido, indicamos que el nombre de Congreso Nacional debe conservarse, toda vez que creemos que es un error denominar a esta alta Función del Estado como Asamblea Nacional, porque este último nombre nace de la histórica Revolución Francesa, cuando reunidos los patriotas en Asamblea Nacional solicitan la redacción de su primera Carta Constitucional, declarándose en contra del poder absolutista y monárquico de Luis XIV. Por ello, el 9 de junio de 1789, se organiza el pueblo para redactar su primera Carta Magna o primera Constitución Política. De este hito, surge en el mundo el nombre de Asamblea Nacional Constituyente como organismo cuya única función es la de redactar una Ley Suprema, llamada Constitución, la misma que no puede redactar ninguna otra ley y, por lo tanto, no asume este trabajo la Función Legislativa, materia que es excluyente del Congreso Nacional, de ahí la denominación de Asamblea Constituyente por ser un organismo dedicado a estructurar una Constitución y no otra ley de ninguna clase. Una Asamblea Nacional tiene vida momentánea y mientras dure el proceso constructivo de este máximo texto, mientras tanto un Estado jurídicamente organizado tiene la permanencia de Congreso Nacional como Función Legislativa encargada de normar toda regulación legal que organice política y jurídicamente a un Estado. Esta diferencia entre Asamblea y Congreso Nacional, nos lleva a rechazar el articulado propuesto por mayoría de la Mesa Constituyente 3, ya que basados en el Derecho Constitucional que rige al mundo, en Ciudad Alfaro no podemos contravenir estos principios internacionales, tampoco inventar instituciones que no caben en ninguna doctrina jurídica. En el inciso segundo, también la Mesa tuvo conocimiento de que se consignaron más de ochenta firmas aceptando que la sede del Congreso Nacional, Asamblea Nacional sea en Manabí, hechos que

pasaron por alto los principales de la Mesa 3, desconociendo también la insistencia por nuestra parte para que sea analizada y aprobada la propuesta de esta provincia. En general, el articulado tiene normas dispersas respecto a las atribuciones del Congreso, por lo que hemos recogido en el artículo 3, las atribuciones que constan en el artículo 18, así en desorden, algunas se repiten e impiden su sistematización. En el numeral 7, del artículo 3, se considera como ingreso lo que es tributo, impuesto o tasa, sin considerar que las mismas leyes tributarias tanto como la doctrina, definen como cargas, creemos que el numeral 9 de la propuesta no debe constar en la forma como se redacta, porque se presta a injerencias y a persecuciones de índole política que emitan una Santa Inquisición. Respecto al numeral 13 del aludido artículo, no cabe que el Congreso invada la esfera del endeudamiento público limitando el monto de su endeudamiento. En todo caso, su función es legislar y no actuar como órgano rector del Presupuesto General del Estado. Este tipo de injerencias de una función con la otra, de una institución con la otra, caotizan el orden público y atropellan las autonomías en el sector público, circunstancia que esta Constitución tiende a abolir definitivamente. En el artículo 13, numeral 2 se habla de la Comisión de Administración Legislativa, expresión que no cabe si se considera que en el artículo 5 de la propuesta, se determina como Consejo de Administración Legislativa. En la sección tercera, del subtítulo que aparece centrado, habla "De la formación" y la palabra legal correcta es "formulación", de tal manera que debe leerse "De la formulación y sanción de las leyes". Una observación que también debemos hacerla, es que el artículo 18 contraviene el texto del artículo 17. Por lo demás, todos los anteriores informes hacen relación a nuestras inconformidades en los diversos artículos, circunstancias en las que venimos siendo repetitivos. Con estas observaciones entregamos la propuesta de texto constitucional relativo a la Función Legislativa".

Hasta ahí el Informe de Minoría. Se adjunta el texto del articulado con los cambios al que hace referencia el informe." Hasta ahí, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gustavo Darquea. ----------

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros asambleístas: La Función Legislativa constituye, indudablemente, la máxima expresión de la representación política de la sociedad y es responsable de legislar y fiscalizar. Lamentablemente, el desempeño que ha tenido en los últimos treinta años de democracia ha estado muy por debajo de las expectativas del pueblo ecuatoriano. El Congreso Nacional junto con los partidos políticos han sido las instituciones con más baja credibilidad de nuestra sociedad. El Congreso en lugar de ser el espacio, como debería ser, del gran debate de los problemas nacionales para construir un proyecto común de país como analizábamos en el diagnóstico en nuestra Mesa, ha sido el espacio de los grandes enfrentamientos y curiosamente entre las propias facciones de las élites que han detentado el poder en nuestro país, entre grupos de intereses corporativos que pugnaban por cuotas de poder para satisfacer ambiciones personales o consolidar caciquismos locales. Los partidos de la derecha y al servicio de los grupos oligárquicos que históricamente han constituido la mayoría, sirvieron al Congreso, convirtieron al Congreso en un instrumento de chantaje a la Función Ejecutiva y en un mecanismo de dominación sobre la función judicial sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y los organismos de control a través de prácticas vergonzosas de reparto, de lo que un tristemente célebre diputado calificó como de troncha política. Congresos de esa naturaleza, señor Presidente y compañeros asambleístas, era lógico que rápidamente

pierdan credibilidad ante los ojos del pueblo ya que no eran capaces de atender sus demandas y resolver los graves problemas de injusticia, de pobreza y de inequidad en nuestra sociedad. Sin duda alguna, como lo mencionamos en el diagnóstico que acaba de ser presentado, todo este manejo perverso comandado por la partidocracia, tiene un punto culminante en abril del año dos mil cinco, cuando en medio de un descrédito nunca visto del Congreso y de las instituciones políticas en su conjunto, y como consecuencia de la "rebelión de los forajidos" y al grito de "que se vayan todos" se produce al destitución del ex presidente Lucio Gutiérrez. Sin embargo y, lamentablemente, no se fueron todos, se quedó el viejo Congreso con su partidocracia e incluso ahora pretenden intimidarnos y darnos lecciones de moral en esta Asamblea. En el diagnóstico presentado, señor Presidente, hemos tratado de hacer una apretada síntesis de los principales problemas de la Función Legislativa, identificando al menos cuatro de ellos: Su deslegitimación, la pugna permanente de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, la progresiva pérdida de atribuciones y la intromisión en la Función Judicial y otras funciones del Estado. Encontrar soluciones a complejos problemas desde el simple diseño institucional no tiene mayor significación, por cuanto el cambio fundamental que debe darse en la Función Legislativa va a depender de un cambio profundo en las actitudes y comportamientos de las organizaciones politicas y de sus dirigentes y del avance del proceso de toma de conciencia de los ciudadanos respecto de la necesidad de transformación política que ya se ha hecho evidente en estos dos últimos años. Sin embargo, la Mesa tres ha considerado pertinente plantear los siguientes cambios en la Función Legislativa: El cambio de nombre del Congreso Nacional por el de Asamblea Nacional, dado el descrédito que ha tenido esta Función y el nombre como tal, de Congreso, que lamentablemente, trae ingratas recordaciones a nuestro pueblo. Esta nueva imagen va a estar

sustentada en el nuevo modelo de Estado que estamos construyendo acá, en esta Asamblea; por tanto, no es solamente un cambio de nombre, es un cambio de nombre que va a estar sustentado en toda esta nueva institucionalidad, en toda esta nueva Constitución. Además, el nombre de Asamblea ya, como tal, está posicionada en la ciudadanía, en los ecuatorianos como un espacio de apertura de participación en base al trabajo que ha estado desarrollando esta Asamblea Constituyente. Estamos planteando además, una nueva integración de la representación política de la Asamblea en base a representantes nacionales elegidos por toda la ciudadanía, en base a representantes provinciales, representantes por regiones y por circunscripciones electorales de dentro y fuera del país, incorporando por primera vez en la historia política y en la Constitución de nuestro país a los compañeros migrantes con su derecho a tener una representación política en la Función Legislativa. Además, hemos eliminado la designación de un número específico de asambleístas o de un sistema de representación porque esto puede variar y de hecho va a variar con los años y con el tiempo. Esto va a permitir que la ley defina las circunscripciones electorales de acuerdo a las condiciones en que se vayan dando el proceso de integración de regiones, de acuerdo a la realidad de provincias que hoy, como Guayas, como Manabí, como Pichincha están subrepresentadas en la Función Legislativa. Y, además, el crear circunscripciones electorales en el exterior de acuerdo a la realidad de los compañeros ecuatorianos migrantes. Por otra parte, se elimina la facultad de nombrar a funcionarios de los organismos de control, del Procurador General del Estado, de los miembros de la Función Electoral; justamente, para evitar esta historia terrible que nuestro Congreso ha utilizado como herramienta de presión, de chantaje y de preservar intereses de grupos. Se otorga la facultad de proceder a la destitución del Presidente de la República por la comisión

de delitos contra la seguridad del Estado, por concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y por acciones inconstitucionales previo dictamen de la Corte Constitucional con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por una sola vez durante los tres primeros años de su ejercicio, lo cual debe conllevar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO. Esto establece un sistema de contrapesos, dándole igual facultad que le estamos dando al Ejecutivo, le estamos dando al Legislativo, señor Presidente. Consideramos que además debe mantenerse el sistema unicameral para darle mayor agilidad a la ardua tarea para transformar el marco jurídico vigente y darle mayor responsabilidad a un solo cuerpo con menos posibilidad de enfrentamientos. Finalmente, señor Presidente, en el Consejo de Estado estamos proponiendo, justamente, una institucionalidad que permita el diálogo y la colaboración entre las nuevas cinco funciones del Estado que va a tener este nuevo Estado que estamos construyendo. Nos parece fundamental a fin de lograr la gobernabilidad y lograr la colaboración y construir proyectos realmente de sentido nacional. Compañeras y compañeros asambleístas, estamos ante un reto histórico formidable comparado solamente con la Asamblea Constituyente de mil novecientos siete, fruto de la revolución liberal...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó el tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO. ...moldear esta nueva institucionalidad de nuestra patria, señor Presidente, para que esta

revolución ciudadana, iniciada en enero de dos mil siete pueda cristalizarse en un Estado de justicia, de inclusión, de solidaridad con los más pobres, de equidad, de absoluto respeto a los derechos humanos y de una verdadera representación política, a fin de que todos los sectores de nuestra sociedad se sientan realmente partícipes en la construcción de la nueva democracia. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Mae Montaño, le llamaré luego cuando regrese. El asambleísta León Roldós. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros asambleístas: Con gran respeto, este capítulo de la Función Legislativa no intenta fortalecer una Función Legislativa, sino minimizarlas. No estamos ni siquiera ante un presidencialismo fuerte, estamos ya ante una cuasi monarquía de plenos poderes, y perdóneme que sea tan severo para juzgar la propuesta que se está haciendo, una cuasi monarquía de plenos poderes. ¿Y esto por qué? Porque se establece una Asamblea Nacional en que ni siquiera se dice cómo se integra constitucionalmente. Se dice que tendrá representaciones nacionales, regiones, provincias y circunscripciones electorales. Perdóneme, la integración de un Congreso o Asamblea Nacional de la Función Legislativa, tiene que estar precisa en el texto constitucional, no cabe dejar a leyes secundarias cómo se integra una Asamblea Nacional. Leyes secundarias que además, como consecuencia de aquello, son leyes de colegislatura que el Presidente puede vetarlas y si las veta, solamente con dos tercios del Congreso puede insistirse. Esto es, aquí tiene que estar cómo se integra, cuántos nacionales, cuántos regionales, cuántos provinciales y si las regiones implican provincias, ¿con qué concepto? aquí en el texto constitucional. No puede quedar nunca para una ley secundaria. Luego de eso, las

competencias en la Asamblea Nacional, algunas pasan a ser de protocolo, de protocolo; así de claro, Posesionar al Procurador, al Contralor General del Estado, al Ministro Fiscal, al Defensor del Pueblo, a los Superintendentes, a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Yo estoy de acuerdo como al principio, que tiene que haber un concurso, pero alguien tiene que calificar el concurso. Aquí lo designa una comisión con una integración delegada, el nombramiento lo firma el Presidente de la República y el acto social, la copa de champagne en la Asamblea Nacional, por favor. Tiene la Asamblea la competencia de calificar el procedimiento que se ha cumplido, si no tiene esa competencia que se vayan a tomar la copa de champagne a cualquiera otra parte, pero no puede ser, solo para el acto de posesión ritual la Asamblea Nacional. Estamos hablando, más adelante, sobre la posibilidad de enjuiciar a los asambleistas. Se repite la frase de la inmunidad y no responsabilidad para opiniones y votos, pero más adelante, dice: "En los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones, no se requerirá autorización de la Asamblea Nacional para causas penales en contra de los asambleistas. Perdóneme. Si mañana se acusa como se lo ha hecho con el diario La Hora, que estamos ante un delito contra la seguridad nacional, se acabó la inmunidad parlamentaria. ¿De qué estamos hablando? Tiene que haber inmunidad parlamentaria, siempre tiene que ser la Asamblea Nacional la que califique si procede o no el enjuiciamiento. Otra cosa es un accidente de tránsito u otra circunstancia en que inclusive cabe, si, cabe privar de libertad, pero el enjuiciamiento solo puede ser autorizado por la Asamblea Nacional. No puede haber este ataque a la inmunidad; para hablar hay inmunidad, pero, por favor, es un delito que se llama injuria, sea solo para injuria hay "inmunidad". No señores, no compañeras y compañeros. Tiene que haber inmunidad para todas las infracciones y, por lo tanto, esa inmunidad tiene un complemento que

es la autorización especial, pero la autorización le corresponde a la Asamblea Nacional, no le corresponde a ningún juez la decisión única en el tema. Yo, inclusive, ustedes recordarán, he dicho que debería probarse una frase del legislador o el asambleísta, debería probarse en ciento ochenta días, debería iniciarse una investigación, porque no cabe tampoco el libertinaje para hablar, pero tampoco el otro extremo que se está aquí colocando. Luego se dice, la fiscalización. Perdóneme, la Función Ejecutiva no es fiscalizable con esta norma. Mientras siempre el Presidente habló de que vamos a retornar al juicio político contra el Ministro de Estado que pueden ser destituidos, hoy día se consagra lo contrario, se mantiene la burla de que el juicio político contra el Ministro de Estado no tiene ninguna consecuencia, y en el caso del Presidente, no solo eso, sino que para separar al Presidente se requiere; fíjense esto, delito contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, hasta aquí lindo, pero primero tiene que haber sentencia condenatoria. ¿Y qué significa un juicio de esa naturaleza? Significa año y medio de juicio y significa solamente una agitación política, no tiene otra consecuencia. Y luego, cuando es de violación de la Constitución, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o sea que, realmente va a decidir es la Corte Constitucional. Pero además de eso, solo los tres primeros años. En cambio, al Presidente de la República, se le da potestad de disolver la Asamblea porque no cumple o porque traba el Plan Nacional de Desarrollo. ¿De qué estamos hablando? En el uno, apertura total para disolver la Asamblea, y aquí no se me venga a decir que vamos a elecciones anticipadas, perdónenme, elecciones anticipadas significa ruptura de un proceso. Yo estoy de acuerdo que haya elecciones anticipadas para legisladores, pero el Presidente tiene que ser sometido a ratificación, no es que cada vez que hay una ruptura, nuevo periodo presidencial. ¿De qué estamos hablando, por favor? Estamos hablando

de reelecciones indefinidas, de qué estamos hablando. Y por último, se le da fuerza a un Consejo de Estado que no es otra cosa. Dicc que no se parece a ningún otro. Claro que no se parece a ningún otro, porque esta es un reunión que el Presidente convoca cuando quiera, por lo menos una vez trimestral para conversar y, además de eso, le da la potestad de resolver los conflictos entre las funciones del Estado, con lo cual es un grupo de bolsillo de la Presidencia de la República, con todo respeto. La democracia es equilibrio de poderes y yo reclamo estos equilibrios de poderes. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Julio Logroño.----------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Muchas gracias, señor Presidente. Merece algunas observaciones el proyecto de ley por inconsistencias en la forma de la conformación y por las limitaciones excesivas que se hace al Parlamento ecuatoriano para la fiscalización y para la legislación como bien ha señalado el asambleísta Roldós. Lo más preocupante es la falta de delimitación de quienes conformarán el nuevo Parlamento ecuatoriano al simplemente enunciarse que serán asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas regionales y para colmo se pone las conjunciones y/o de la circunscripción territorial, lo cual deja abierta la puerta para que una ley inferior que puede ser la Ley de Elecciones modifique la representación popular a discreción, a buena fe o a mala fe y podamos tener una conformación distinta de Parlamento cada cuatro años o cada que se le ocurra. Esta representación popular tan importante dentro del Parlamento debe estar específicamente delineada y conformada, consagrada como norma constitucional. No puede esta forma impropia de delimitación de una institución y tan gravemente de un Poder del Estado o de una función del Estado, ser tan ambigua y subjetiva dejando a la legislación inferior

la conformación y la representación de la primera Función del Estado que es el Parlamento del Ecuador. En el artículo tres debería eliminarse el numeral siete que habla sobre los impuestos, las tasas y las contribuciones que serán creadas mediante ley, pues esto es lógico y es repetitivo si nosotros damos lectura al artículo dieciocho numeral tres, que se habla de que los impuestos, tasas serán creadas exclusivamente por ley, debería eliminarse por incongruente. Es verdad que la inmunidad ha sido siempre una causa de impunidad para aquellos malos legisladores que han pretendido hacer de ésta un escudo para difamar o un escudo para someter sus actuaciones a ciertos actos reñidos con la ley y tipificados y sancionados como delitos. Pero tampoco se puede desnudar a un Legislador y dejarlo para ser acribillado por sus actuaciones cuando tenga que ejercer su legítimo derecho a fiscalizar o cuando tenga que entrar en un proceso de contradicción u oposición para que éste sea blanco de represalias políticas o de persecuciones políticas. En el artículo catorce numeral, cuatro, cuarto párrafo, debería eliminarse el auto de llamamiento a juicio como una causa o como una causal para que pueda ser apresado un Legislador. Porque, señor Presidente, hay que considerar que el auto de llamamiento a juicio, si bien es una etapa procesal, está atentando contra el principio universal de la inocencia del procesado. Únicamente debería ser la causal para ser privado de la libertad para un Legislador, el tener sentencia condenatoria en firme. Este auto de llamamiento a juicio en muchas ocasiones termina con sentencias absolutorias, señor Presidente, y no podemos permitir que sea encarcelado un Legislador para luego ser declarado inocente. En el artículo quince, cuarto párrafo, se prevé la destitución del Presidente o Vicepresidente de la República, pero esta destitución solamente puede ser ejercida por una sola vez. Esto es absurdo si consideramos que las causales de destitución del Presidente o Vicepresidente de la República pueden ser inmersas, una,

dos, cuatro o diez veces por un mandatario o en caso de sucesión presidencial por el Presidente que lo suceda. Si es que solamente se le limita al ejercicio de una sola vez durante los primeros tres años, estaríamos con la norma constitucional estableciendo que el Presidente o Vicepresidente que vuelva a incurrir en una causal de destitución no pueda ser sancionado por el Poder Legislativo. Se está limitando el poder de fiscalización de la Asamblea o Parlamento, como se lo quiera llamar, al mínimo, señor Presidente. Esta limitación del poder de fiscalización es limitar al cincuenta por ciento las facultades y atribuciones del Congreso o del Parlamento, que son legislar y fiscalizar. Cuando sea disuelto el Parlamento se convocarán a elecciones generales, dice la norma que aprobamos en días anteriores, y en este caso, cuando el Congreso, Parlamento o Asamblea, como se lo quiera llamar, destituya por una de las causales al Presidente de la República, dice la norma que estamos sujeta a aprobación, que conllevará a elecciones de los legisladores. Debería, señor Presidente, convocar a elecciones generales cuando proceda una causal de destitución y una desestabilización política para empezar con un nuevo proceso democrático. En el artículo dieciséis de la normativa propuesta, se establece el enjuiciamiento político, pero se elimina al Presidente de la República como sujeto de este enjuiciamiento. ¿Cómo podemos sancionar al Presidente de la República con la destitución establecida en el artículo quince de este mismo articulado si ya no existe el enjuiciamiento político para el Presidente? Las causales de destitución son el efecto final, pero el medio para ejecutar estas sanciones o estas causales es el enjuiciamiento político. No existe otra forma de que un Presidente sea destituido sino mediante el juicio político y debe ser incluido el Primer Mandatario dentro del artículo dieciséis. De la misma forma, no podemos dejar en una simple sanción moral el enjuiciamiento político para los ministros de Estado y dejarlo a libre criterio del

Presidente su sostenimiento o no dentro del Poder Ejecutivo. Debe la sanción imponer la consecuente destitución del funcionario que ha sido declarado culpable, así como se está imponiendo la sanción de destitución para los otros representantes de los organismos del Estado como el Procurador, el Ministro fiscal, etcétera, que si contemplan la destitución inmediata. En el artículo dieciocho se establece que se hará mediante una ley. En derecho público, señor Presidente, debemos recordar que solamente se hace lo que está permitido por la ley y en este caso con más razón todavía, solo lo que está permitido por la Norma Suprema que es la Constitución Política de la República, entonces no podemos enumerar ciertas cosas que se hacen mediante ley y dejar de fuera otras que no se quedan enunciadas en este artículo dieciocho, pues, aquí no se está hablando sobre el tema civil, no se está hablando sobre el tema laboral, sobre el tema contencioso, sino, únicamente las cuatro o seis cosas que ahí se establece. Este artículo dieciocho debería englobar todo lo que se hace mediante este acto legislativo que es la ley o no englobar nada y dejarlo insubsistente, porque ya se establece en otros articulados posteriores, qué es una ley, y para qué sirve una ley ordinaria o ley orgánica como consta en el mismo articulado propuesto. Pero lo más preocupante que me parece del artículo, señor Presidente, y espero que sea acogida esta observación que la voy a hacer. Es que la iniciativa para crear, extinguir o modificar tributos, exclusivamente se la otorga al Presidente de la República y no al Poder Legislativo; es decir, que en materia tributaria la única persona que puede proponer la inclusión de normas legales o la reformatoria de estas normas es el Primer Mandatario. Pero qué pasa cuando los representantes de la ciudadanía que son los asambleístas o los parlamentarios no pueden proponer una derogatoria o una inclusión de normas tributarias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. Debería incluirse esta iniciativa, también para el Poder Legislativo y, sobre todo, quitar de esta propuesta constitucional el efecto de la objeción total del Presidente de la República en la conformación de una ley, pues no es posible que el Presidente cuando objete una ley pueda paralizar por un año, únicamente por calificar al proyecto de ley de inconveniente. Esto, señor Presidente, es decir bienvenidos a un sistema monárquico, dictatorial y no presidencialista. Es disminuir al máximo al Poder Legislativo y otorgar mediante esta forma de la objeción total, la única facultad de ver qué ley es conveniente o inconveniente para el Presidente de la República a su criterio demasiado subjetivo y asi paralizar las normas legales. Cuando el Presidente, la objete totalmente deberá estipularse que el Congreso o el Parlamento puede insistir... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. Debe insistir con las dos terceras partes para que esta ley pueda ser aprobada si tiene la mayoría de la aceptación popular. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Mae Montaño. ----------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. Buenos días, Asambleistas. Creo que estos son los temas más importantes del proceso de reforma politica que tanto ha esperado el país y, por tanto, en calidad de asambleísta y de parlamentaria, no solamente que cabe como en la

escuelita hacer un análisis técnico-constitucional de lo que aquí se propone, sino eminentemente una análisis político y una opinión política respecto del contenido de los artículos propuestos. De manera puntual, en el tema de la Función Legislativa, creo que uno de los temas más importantes en el debate de la reforma política durante estos años, era la necesidad de cambiar profundamente a la Función Legislativa, de fortalecer la institucionalidad y se habló mucho y hablamos muchas veces en foros diversos, en la necesidad y en la posibilidad de tener una Función Legislativa bicameral, una función bicameral en donde a través de dos cámaras se tuviera la posibilidad de aumentar y de mejorar la eficiencia del trabajo legislativo. Veo con mucha pena que no ha sido posible ni siquiera debatir en este ambiente parlamentario, las posibilidades de hacerlo, los aspectos positivos y negativos que eso podría traer como consecuencia de un cambio profundo de esta Función Legislativa. Y veo que las modificaciones, por decir, lo menos, son absolutamente tibias. Y hay una interrogante que se plantea en que estamos definiendo en este nuevo proyecto, la posibilidad de que existan distintas categorías de representantes a la Función Legislativa, y la pregunta es: ¿para qué sirven los representantes nacionales en esta nueva categoría? Será para trabajar más políticamente, será para que quienes asumimos como ahora en la Asamblea la posibilidad de ser representantes nacionales, tenemos que hacer un triple esfuerzo para conseguir una votación, o les vamos a asignar también en calidad de representantes nacionales una función y un rol específico que permita entonces, enriquecer el proceso legislativo con una visión de intereses que vayan más allá de los intereses locales. Yo creo que en ese sentido la experiencia de la Asamblea no ha abonado en eso, las representaciones nacionales en realidad no han servido para nada en ese sentido, no han tenido un rol específico, no han tenido la posibilidad de enriquecer el proceso con una visión nacional porque los

roles no fueron diferenciados. Sería bueno, entonces, pensar que si no va a haber la bicameralidad que sería el proceso necesario para que las representaciones nacionales en la formación de una Cámara Alta, como se ha llamado generalmente, tuviera un rol específico en donde esta visión y esta función nacional pudiera sentirse con mayor fuerza. Porque el mismo hecho de un trabajo político nacional, le da a ese representante una fuerza distinta no en jerarquía, que se entienda bien, no en jerarquía, pero le da políticamente una fuerza distinta a un representante local o a un representante regional. Sería bueno, entonces, pensar que si el esfuerzo no va a ser compensado, lo mejor será entonces no tener representaciones nacionales. Pero quiero concentrarme en el tema del Consejo de Estado, me preocupa sobremanera, porque si una de las intenciones es precisamente fortalecer la institucionalidad venida a menos durante todos estos años de la democracia ecuatoriana, creo que un mecanismo de fortalecimiento es preservar, preservar la independencia y la autonomía de los distintos poderes del Estado, pero oh sorpresa, creamos un Consejo de Estado que se crea como órgano superior presidido por el Presidente de la República, cuando los mismos compañeros en su análisis y en su fundamentación, dicen que la Función Legislativa es la máxima expresión de la política de un país. Cómo se entiende entonces, que los distintos poderes del Estado se subordinen al Presidente de la República que representa a una corriente y a un partido político, y la pregunta surge: ¿Qué se busca con esta subordinación de los distintos poderes? Los teóricos del derechos político cuando definen la dictadura constitucional dicen los siguiente: "La dictadura constitucional es la forma de gobierno en la que aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador, controlando éste, directa o indirectamente los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial". La pregunta es entonces,

¿será que a través de este modelo y de este Consejo de Estado, queremos conseguir, no lo que se planteó aquí, no un Estado constitucional sino una dictadura constitucional? Porque definitivamente estamos poniendo de manera subordinada los distintos poderes del Estado, al monarca de Carondelet, mi gran interrogante. En definitiva... (Vacío de grabación)... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Usted tiene buena puntería, le doy la palabra este momento. Ya le di pero... tenga la bondad, la palabra. Tome la palabra doctor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Artículo uno, por favor, dice: "La Función Legislativa es ejercida por la Asamblea, la Asamblea Nacional que está integrada por asambleístas elegidos". Esto de la Asamblea Nacional no es nuevo, como ya ha venido señalando, en algunas ocasiones ya constaba en nuestra Constitución en el año mil ochocientos cincuenta, aquí está el libro de Trabucco, que siempre lo señalo. ¿En qué artículo? En el artículo diecinueve, ¿qué decía? decía lo siguiente: "El poder legislativo se ejerce por la Asamblea Nacional que constará de una sola cámara", no es nada nuevo pues, entonces. Yo no creo que el cambio de nombre de una institución y una función del Estado, implique una transformación de la misma. En la Constitución venezolana vigente, artículo ciento ochenta y seis, aquí está la Constitución, dice: "La Asamblea Nacional". En la Constitución boliviana, aquí está la Constitución boliviana, artículo ciento cuarenta y seis, allá le llaman Asamblea Legislativa. Eso no es lo importante el nombre, lo importante son los contenidos y hacia ellos debemos nosotros referirnos. Vamos al inciso segundo por favor del mismo artículo uno, la Asamblea dice, "Nacional será unicameral y tendrá su sede en la ciudad de Quito". Yo tengo aquí, señor Presidente, las

propuestas que el Gobierno Nacional le hizo al CONESUP, bajada de Internet, el veintisiete de mayo del dos mil ocho, de la página de la Presidencia de la República, el Presidente le envió al CONESUP sus propuestas y en torno a esta Función Legislativa dijo lo siguiente: "Modificación de la estructura del Poder Legislativo para adecuarlo al nuevo modelo de desarrollo territorial. Superar la crisis de ilegitimidad del actual modelo legislativo, implica la conformación de un Parlamento Nacional, "Parlamento Nacional", constituido por dos cámaras, "por dos cámaras"; es decir, un Congreso bicameral, y yo a lo largo de la campaña, y luego de ella, concordé siempre con esta propuesta y que a lo largo de la historia del constitucionalismo ecuatoriano, ha existido congresos bicamerales, no sé cuál ha sido el objetivo de ponerle ahí "unicameral" con lo cual no estoy de acuerdo. Yo me sumo al criterio del Presidente de la República, que se señaló al CONESUP que debería ser bicameral, una cámara alta y otra cámara baja. Estoy de acuerdo, y sugiero que se ponga ahí, lo que el Presidente le sugirió al CONESUP, y que el CONESUP no le escuchó lamentablemente. Ahora, en cuanto a que la sede está en la ciudad de Quito, yo no estoy de acuerdo, porque aquí hubo un consenso y firmaron más de ochenta asambleístas para que la sede del Congreso Nacional o Asamblea Constitucional o como se le llame, sea la ciudad de Montecristi, y que esté en Manabí. Esa es mi posición al respecto y que se la tome como observación. No va a haber tiempo, mire usted, tantos artículos para tratarlos en tan corto tiempo. Pero aquí hay algo importante que ya han citado algunos asambleístas. Hay seis, ponga el seis para ser reiterativos, artículo seis. Seis, seis, por favor. La Asamblea Nacional se instalará en Quito, no estoy de acuerdo con lo dije adelante y con lo que afirmaron más de ochenta asambleístas, ahí debería decir: "La Asamblea Nacional se instalará en Montecristi, sin necesidad de convocatoria". Que viva. Comisiones, artículo nueve. Por favor, Comisiones: "Para el cumplimiento de sus

atribuciones la Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas permanentes, en las que participaran todos sus miembros, la ley determinará el número". Yo no estoy de acuerdo y algo le escuchaba a un compañero, y que se deja abierto eso, la ley determinará esto, la ley determinará este otro, estas son situaciones importantísimas en que deberian constar en la misma Constitución. Yo sugiero entonces, que en el artículo nueve exista un inciso segundo que determine el nombre de las comisiones y ¿cuáles son las atribuciones de las mismas? Sigamos más adelante. Catorce, artículo catorce, inciso uno, dos, tres, cuarto, inciso cuarto, inciso cuarto, del pueblo que está.... vea, señor Presidente, se pone el articulado y el pueblo no lo puede leer, no lo puede leer, por favor, señor director de cámara, hasta cuando pues, cuando se ponga el articulado, permítale al pueblo que lo lea. El título es: "Los y las asambleístas gozan de fuero de Corte Suprema durante el ejercicio de las funciones", y en este inciso dice: "Solo se le podrá privar de la libertad en caso de delito flagrante, -coma- llamamiento a juicio por delito reprimido con reclusión o sentencia". ¿Cómo podemos estar de acuerdo los más de cincuenta mil abogados que hay en el país? y los que tenemos pensamientos lógicos sin ser abogados porque nos hemos graduado en la universidad de la vida, de que se atente contra el principio de presunción de inocencia cómo dijo el compañero Logroño. El llamamiento a juicio es una etapa del procedimiento penal en que esas personas que es llamada a juicio está cobijada, está protegida por el principio de presunción de inocencia, si el juez viene y resuelve llamar a juicio, inmediatamente lo pueden coger preso al Asambleísta, esto es absurdo, viola los derechos humanos, viola garantías del debido proceso, viola el principio de presunción de inocencia, ahí solamente debe constar cuando exista sentencia en firme, es decir, ejecutoriada. Eso de ahí está errado, está cquivocado, y por eso es que he hablado, no ochenta y seis veces cómo se dice, ya hasta la ciento diecisiete veces

que voy hablando precisamente para que se corrijan estos absurdos jurídicos, si me quedo callado eso va a pasar y después de cuatro años habrá otra Asamblea Nacional Constituyente, para hacer una nueva Constitución y no quiero que ocurra eso, soy minoría de a uno, no soy oposición, y los que me recomendaron que sí, que me van a mandar una camionada de esparadrapos, yo estoy esperando que me los manden, porque cada vez que me impidan hablar aquí me pondré el esparadrapo o acá tengo las agujas. Y señores, se van a asombrar si me siguen impidiendo el uso de la palabra, lo que va a ocurrir con Rafael Esteves. Sigamos, con el artículo quince, ordinal segundo, dice: "Que la Asamblea tiene facultad para proceder a la destitución del Presidente, por los siguientes casos: 1. Por comisión de delito contra la seguridad del Estado. 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito". Yo ahí me permito sugerir que se agregue "y delitos de lesa humanidad". ¿Por qué nos olvidamos de esos? ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Esteves, le queda un minuto, Asambleísta le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Treinta y dos artículos...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Asambleísta, le queda un minuto, sí para que no me...----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Oiga, yo no soy sordo, tengo lentes porque tengo problemas de visión, pero no soy sordo...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siga, continúe...----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Pero para que me repite tantas

veces que tengo un minuto, me está interrumpiendo exprofesamente para que yo me desconcentre en lo que estoy hablando. Eso es todo, yo no soy sordo, señor, le estoy oyendo, no necesita tres veces interrumpirme para desconcentrarme. Delitos de lesa humanidad, tiene que agregarse allí "por la comisión de delitos de lesa humanidad y siempre y cuando ya haya una sentencia ejecutoriada", nuevamente vuelvo a referirme de lo contrario, se atenta contra el principio de presunción de inocencia de las personas. Y como ya se terminó el minuto con sus interrupciones, me quedo callado. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Abel Ávila. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ÁVILA ABEL. Muchas gracias, señor Presidente. El otrora honorable Congreso Nacional, al igual que algunas funciones del Estado, cayeron víctima de la política neoliberal en este país, en la más profunda crisis y por el despeñadero de la inmoralidad, empujados nada más y nada menos por quienes en su momento eran parte de la mayoría de derecha y ostentaban el poder político y para lo cual, compañeros asambleístas y pueblo del Ecuador, utilizaron fundamentalmente a este Congreso Nacional como la principal herramienta para desde ahí armar todo el aparato jurídico y poder someter al pueblo del Ecuador en la más profunda crisis, en la sobreexplotación, en fin, en general una serie de leyes contrarias al beneficio de los ecuatorianos. Mas bien, fue el antro de dominación de chantajes, de corrupción, de abusos de poder desde ahí. No nos olvidemos que desde ahí empezó la famosa flexibilización laboral, donde se precarizó la forma de trabajo en el Ecuador. Desde ahí se sembró la famosa base de Manta, donde ni siquiera tuvo aprobación de todo el Congreso, sino que una Comisión por Heinz Moeller mandó, y ahí tenemos a los militares norteamericanos asesinando a ecuatorianos, a

seres humanos por ejemplo en Angostura. Desde ese mismo Congreso Nacional se dio la feria del atraco petrolero, hubo algún partido alguna vez que incluso planteo el factoring petrolero, si no hubiese sido por la lucha de los pueblos, hubiéramos vendido adelantadamente nuestro petróleo. Desde ese mismo Congreso Nacional se empujó la privatización de la salud, de la educación, negándoles la posibilidad de educarse y de mantener la salud de los ecuatorianos. Desde ese otrora Congreso Nacional, los organismos de control fueron manipulados de tal suerte que hay casos por ejemplo, como el famoso alcalde Social Cristiano Eliécer Bravo de Chone que no puedo ser ajusticiado por la justicia ordinaria, más bien el pueblo tuvo que levantarse para hacer justicia de alguien que estaba atracando los fondos públicos, o que decir, el famoso feriado bancario justamente perpetrado desde ahí del otrora Congreso Nacional. Hay un evento también de funesta recordación, cuando el otrora Congreso Nacional viabilizó el despojo territorial en el famoso acuerdo de Itamaratí que después incluso el mismo Montesinos, dijo que ahí hubo lo que históricamente la derecha y los grupos de poder, hicieron de ese Congreso Nacional, es decir, comprar conciencias, el hombre del maletín y toda esa vieja práctica de la derecha del Ecuador, los neoliberales. Ese territorio que los soldados ecuatorianos defendieron a sangre y plomo, fue despojado por una votación de una mayoría de derecha con lo que Montesinos dijo en su momento. Este mismo proceso constituyente en su etapa tuvo una rabiosa oposición de la mayoría de ese Congreso Nacional. Por lo tanto, nos parece que es correcto que tomemos una decisión en normar, en reglamentar, en ir hacia una Función Legislativa que le permita redimir a los futuros representantes de nuestro pueblo, lo que necesita nuestro pueblo, es decir, un organismo de la función del Estado, donde haya representación de los designados por el pueblo a cumplir la función que el pueblo quiere decir, leyes a favor y en derecho de los trabajadores de

los pueblos de este pais, y no que obedezcan a las chequeras, a los hombres del maletin o a poder político o a poder únicamente económico como ha sido la triste historia de este país. Por eso, señor Presidente, nos parece que es correcto, incluso nos parece que hay gente que está mal utilizando cosas, como por ejemplo nada tengo en contra de Manabí, saludo a Manabí, pero Manabí en ese otrora Congreso tenía una Comisión de Asuntos Manabitas, cuántos manabas y cuántos asuntos manabitas se trataron para mejorar las condiciones de vida de los manabas, no sé de pronto hay que hacer un inventario en función de eso, porque Manabí como tal, para desarrollarse económica y socialmente no necesita una sede del Congreso Nacional o de la Función Legislativa, el desarrollo económico y social de Manabí va a depender de ¿Qué cosas se hagan en función del interés nacional y del interés de Manabi en particular? Por eso es que consideramos, señor Presidente, que no se le puede mentir a Manabí. Aquí tienen que responder aquellos manabitas que han sido representantes en el otrora Congreso e incluso miembros de esa Comisión que nada hicieron por el desarrollo económico y social de Manabí. Yo creo, señor Presidente y compañeros asambleístas, que el artículo dieciséis, en el inciso tercero, nos parece que no podemos permitir que salvemos a los ministros de Estado cuando estamos planteándonos que hayan juicio político para ministros de Estado, eso es correcto, pero junto con el juicio político debe haber no solo la censura, sino la destitución. Si estamos hablando que va a haber destitución hasta para el propio Presidente de la República y para otros organismos de control, debe haber también destitución para cualquier funcionario del Estado que se atreva a ir en contra corriente o contrario a lo que el pueblo o el Ecuador requiere, es decir, una forma de ejercer el derecho político a la fiscalización es la destitución de cualquier funcionario de este país que atente contra el interés nacional. Por eso, consideramos que ahí debe incorporarse la

destitución, previo juicio político de cualquier funcionario del Estado. Así como también nos parece correcto el tema de que el Congreso Nacional, la próxima Función legislativa y la Asamblea Nacional, no solo tenga que normar el endeudamiento público, es correcto, porque a nosotros nos anclaron en la famosa deuda inmoral e impagable a propósito del interés nacional, y solo unos pocos se aprovecharon. No solo que tenemos que fijar una política de endeudamiento desde ahí, para defender a nuestro pueblo porque ahí vamos a estar los representantes que nuestro pueblo debamos estar en la próxima Asamblea Nacional, sino que también debemos darle nuevamente a esta Función Legislativa nueva, Asamblea Nacional a la futura Asamblea Nacional la posibilidad de fijar los salarios para los trabajadores de este país, para que no quede solo a discrecionalidad de unos pocos, sino que sea el debate consciente, permanente y general de todas las fuerzas políticas que definan la política salarial en este país, señor Presidente y compañeros asambleístas. De tal suerte que, nosotros consideramos que es importante e incluso se defina, estamos de acuerdo con la bicameralidad, porque eso permite en un solo cuerpo definir las políticas y las leyes que en este país se requieran para mejorar las condiciones de vida, repito, pero además sí consideramos necesario que en su conformación quede claramente establecido para no dejar pues esto de que diputado provincial o diputado regional que es un representante de dos provincias, puedan un poco contraponerse con el espíritu que queremos darle a la futura Asamblea Nacional. Por lo demás, señor Presidente, nuestras observaciones como siempre, las haremos por escrito, pero que quede claro, que lo que estamos haciendo es desbaratar toda esa vieja práctica neoliberal que le ha hecho daño y que ha llevado, en todo caso, a la Función Legislativa por el despeñadero de la inmoralidad y que tenemos que hacer algo para salvarlo de aquello. Muchas gracias, señor Presidente y compañeros

asambleístas. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Leonardo Viteri. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. Buen día, Presidente; buen día, colegas. Yo quiero esta mañana resumir porque esta mañana se está tratando la mitad de la Constitución, la mitad de la Constitución, setenta y un artículos y muchos artículos con decenas de incisos, en un solo día, en ocho horas trataremos la parte orgánica de la Constitución en escasas ocho horas. Dictum de actum, lo repito, "el poder corrompe y el absoluto poder corrompe absolutamente". Es por esto que me voy a referir exclusivamente al tema de mi provincia. Hace años, hace muchos años, aquí cuando ustedes vienen de Manta si acá hay un policía acostado, ese lugar se llama Colorado donde venden las tarjetas, y precisamente el grito de Colorado lo dio un joven audaz y valiente que fue Eloy Alfaro, su padre después de que lo cogieron preso lo envió hacia el Perú. Don Manuel Alfaro, gran propietario, gran exportador, gran comerciante. ¿Qué diría Alfaro que tiene ahí su figura de quienes han utilizado su heroicidad, su valentía, sus triunfos, sus derrotas y no han respetado su tierra? Esto es Manabí, señores, diecinueve mil kilómetros cuadrados, del mismo porte que la República de El Salvador, que Kuwait, y más grande que Trinidad y Tobago. Eso es Manabí, con cuencas hídricas propias del Coaque, del Carrizal, del Chone. Con una historia ancestral de los Caras, eso es Manabí, con una cultura viva, gastronómica del cebiche, del troliche, del corbiche, eso es mi tierra. Ustedes y este Gobierno vino a Manabí en campaña y nos ofreció la sede aquí en Montecristi. El actual Presidente encargado de la Nación se dijo ser descendiente de Alfaro, y sacó una espada de Alfaro y hoy como cruel ponzoña nos dicen que no. Yo estoy consciente de que no va

a cambiar las vias de Manabí, la sede; estoy consciente que Manabí necesita servicios básicos, necesita vías, cómo podemos hacer turismo y producción sin vias, pero que no se nos engañen, a nosotros nos ofrecieron, aqui vino el Presidente y ochenta y cinco asambleístas firmaron un acuerdo, un acuerdo de deferencia para esta provincia, esta provincia de poetas, como los Hidrovo; esta provincia de ganaderos, como Ricardo Zambrano, cinco generaciones criando ganado. Él, de la cuna de la proclama liberal en Chone, de la tierra de los naranjos en flor, mi agradecimiento por vuestra iniciativa Ricardo. Esta tierra de la paja toquilla, dicho sea de paso, se le dice toquilla, porque las cortes europeas, las religiosas y las reinas usaban como tocas esta espina brutal del desengaño. Créanme, que si ustedes dan un paso atrás, Manabí se los reconocerá. Señores, esto acaba, esto es un tema político, mañana nos veremos en los malecones de mi tierra y nos daremos la mano. Esto acaba, el poder es transitorio, es efímero, pero si ustedes nos ayudan con la sede legislativa, yo me comprometo a grabar su nombre en el corazón y físicamente en el pueblo manabita. Esta tierra de grandes médicos, de aquellos que drenaron por primera vez, abscesos con su cuchilla del cinto: Miguel Alcívar, Alejo Lascano; esta tierra de poetas, esta tierra de música, escuché cantar a grandes voces la Tejedora Manabita, a grandes voces y se le falta el respeto a Manabí. No queremos migajas de esperanza, queremos hechos y no palabras. Cuento con su voto y cuento con vuestro apoyo ¡Viva Manabí! Cuento con ustedes, he dicho. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleista Trajano Andrade. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDRADE TRAJANO. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas: Yo quiero comenzar primero destacando un gesto caballeroso de Leonardo Viteri en la semana anterior, cuando se

planteaba, precisamente, la inclusión en el Orden del Día de este tema al que él se ha referido, para que Manabí sea sede del Poder Legislativo. Hemos estado distanciados y por la entrega de esta bandera que es un simbolo de unidad, no hay ninguna otra provincia que tenga características mayores de unidad como la nuestra, tenemos una sola canción para toda la provincia que nos identifica. Cuando salimos, ya sea fuera de nuestros linderos provinciales o internacionales y nos preguntan de dónde eres, lo primero que decimos es manabita y después el lugar en donde nacimos. Y una serie de características que nos convierten, indiscutiblcmente, en una región especial, en una cultura especial. Por eso, sin el ánimo de polemizar, quiero precisar algunas cosas, que lo que buscan es aclarar cuál es el verdadero sentimiento manabita, frente a lo que se ha iniciado, un proceso de cambio y de transformación en la República. Hemos dicho, que nunca antes en la historia como ahora, gobierno alguno se preocupó de atender a nuestra provincia, nunca antes se impulsó como lo decidió el propio Rafael Correa, siendo aún Ministro de Economía en el Gobierno de Palacio, el desarrollo del Puerto de Manta, pese a la oposición rabiosa de sectores económicos interesados en Guayaquil, fundamentalmente, encabezados por el Alcalde de esa ciudad, quien decía que no iba a luchar con el proyecto del Puerto de Manta, sino contra el proyecto del Puerto de Manta, porque la historia de esta Nación ha sido esa, un bicentralismo que a veces se ha convertido en tricentralismo, que no ha permitido que se desarrollen nuevos polos que permitan no solamente crear bienestar en sus regiones, sino que impulsen y dinamicen la economía del país. Se refirieron a que Alfaro es nuestro mayor símbolo, efectivamente, en Manabí y en el país. Pero a veces, lo que se dice o se trata de hacerlo con lo mano se lo borra con el codo. La administración del Partido Social Cristiano de la prefectura de Manabí, borró en forma antihistórica el vestigio más importante que

existía en nuestra provincia de la memoria de Eloy Alfaro, su vivienda, su casa, fue reemplazada por un mastodonte de cemento armado, un árbol que era de la época en la que, seguramente, sirvió de reflexión y de travesuras para la historia de Alfaro, fue también arrancado de su raíz, por darle paso a un edificio que ahora es sede los consejos provinciales del país. Pero en fin, quiero decir que a la provincia de Manabí no solamente la vamos a servir, porque logremos la sede de lo que será la Asamblea Nacional, nombre que es legítimo ponerlo ahora, cuántas instituciones con personería jurídica en nuestra nación, tienen como máximo organismo sus asambleas. Qué bien que se borre esa página oprobiosa que ha venido escribiendo el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, con una serie de acciones que hicieron, que como ninguna otra institución democrática en el país, recibiera el rechazo absoluto de los ecuatorianos. El último Congreso, recibió apenas, menos del cinco por ciento de aceptación de la ciudadanía ecuatoriana. Un Congreso, en el que se daban escenas similares a las que hemos visto en esta Asamblea Constituyente, pero no, y me voy a referir geográficamente hablando, no del sector de izquierda, sino del sector de la derecha. Pero más allá de esto, señores, creemos que en Manabí, los manabitas estamos conscientes de lo que significa tener el Poder Legislativo. El presidente Correa ha sido claro y ha dicho que él estaba de acuerdo con que se haga la sede, en esa línea nos embarcamos los manabitas, pero, también, se ha hecho una reflexión, el Estado ecuatoriano tiene prioridades. En este momento, significa construir un edificio, una sede para el Congreso Nacional, porque este no fue construido para una sede del Poder Legislativo, este fue construido como el más grande homenaje a la memoria de Eloy Alfaro que se haya construido en nuestra historia, este local, como centro de convenciones, de congresos, como un lugar en donde se puedan fraguar las ideas de futuro de desarrollo de nuevas generaciones, para prepararse no

solamente a nivel de provincias sino de país. Esto será un centro de convenciones, de exposiciones, de congresos a nivel nacional e internacional y también se ha hecho un museo y, por fin, un mausoleo en donde reposan parte de las cenizas de Eloy Alfaro, lo que nunca ningún Gobierno anterior se atrevió a realizar, no lo quisieron hacer, esa es la realidad. Manabí va a convertirse en un nuevo polo de desarrollo nacional e internacional del Ecuador. Con el puerto de transferencia internacional de carga, en donde va a haber una inversión de cerca de quinientos millones de dólares por parte del inversionista del socio estratégico, la primera administradora del mundo de puertos y por parte del Estado, de Autoridad Portuaria, cincuenta y cinco millones de dólares. Manabí va a tener también un aeropuerto intercontinental, vamos a tener la industria petroquímica en nuestra provincia, vamos a tener la ruta transoceánica y si nos dicen que preferimos el edificio del Congreso Nacional que costará no menos de ochenta millones de dólares a que se haga la obra del propósito múltiple Chone y todas las obras de riego que van a generar más de doscientos mil puestos de trabajo para los manabitas, para los campesinos manabitas, y esa industria petroquímica que va a generar más de treinta mil puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Yo sé que muchas personas pueden señalar sus observaciones, los manabitas no somos inconscientes y no vamos a permitir que se atropelle al ambiente, a la naturaleza. Pero qué se hubiera dicho si esta industria petroquímica estuviera construyéndose en los otros polos de desarrollo que tiene el país. Sin embargo, creemos que esta es la hora de la provincia de Manabí, cuando se decidió que la sede de la Constituyente sea Montecristi, se alzaron voces de todos los sectores, diciendo que se estaba construyendo un elefante blanco, se lo llamó irrespetuosamente palomar, lo que se construía como un homenaje al más grande de todos los ecuatorianos de nuestra historia. Y, se decía, después, que esto

será, pues, un lugar abandonado. Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para decirle que tenemos preparado ya, un Mandato que nos permita crear la Corporación Administradora del Centro Cívico "Ciudad Alfaro" y ahí vamos a convocar a todos los asambleístas manabitas, las iniciativas individuales en un momento dado quitan realmente el verdadero objetivo e intencionalidad que se tiene. Por eso, no vamos a presentar a título personal, así como presentamos el planteamiento a nombre de todos los asambleístas manabitas para que se declare a Montecristi Patrimonio histórico-cultural del Ecuador. Tenemos que enterrar, definitivamente, las viejas prácticas de la politiquería. No podemos hacer bandera de objetivos nacionales. Ahora, nuestra provincia, repito, va a impulsar el desarrollo de toda nuestra nación con proyectos que son para todos los ecuatorianos, así como vamos a impulsar la autonomía, pero una autonomía solidaria, no como la de otros que quieren hacer un Estado dentro del Estado. Vamos a impulsar una autonomía, y si es de incorporar a dos pequeñas provincias que se han creado en el norte y en el sur de la provincia de Manabí, pues bien, comenzamos a dar ejemplo los manabitas, de lo que significa la solidaridad para el desarrollo nacional. Enterremos para siempre, ciudadanos y ciudadanas asambleistas, esta vieja práctica que ha constituido una etapa de oprobio para la actividad política en el país. Desechemos y enviemos al tacho de basura de la historia, toda esta actuación, que lo único que refleja, es una acción demagógica que debe desterrarse. Comencemos en la práctica, compañero Presidente, compañeros asambleístas, a transitar por los senderos de la ética y la moral, si queremos, realmente, cambiar a nuestras naciones. Gracias, Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Fernando Burbano. ----------

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO FERNANDO. Gracias, señor Presidente. Compañeros, compañeras: La consulta popular del quince de abril del dos mil siete, otorgó a esta Asamblea Constituyente con un ochenta por ciento de aceptación, un sí; le otorgó un sí para el cambio, después de más de una década de desilusiones, desengaños, debido a la partidocracia que ha sido responsable de promover un modelo de desarrollo que privilegió al mercado y a la acumulación y que utilizó al Estado para fortalecer círculos de poder en desmedro de las mayorías. Una partidocracia responsable de deslegitimar a las instituciones y a la función pública, que manoseo inescrupulosamente a la Constitución y a la ley, bajo los argumentos de por última vez o por darle una salida política a los conflictos políticos. Esta consulta popular del quince de abril, dijo sí, pero también dijo ya no más a los contratos colectivos, mediante los cuales la derecha asfixió al Ejecutivo, ya no más las mayorías móviles que crearon cortes, tribunales, pichicortes, pichitribunales; ya no más aplanadoras legislativas, ya no más leyes troles, ya no más chantajes, hombres del maletín, presiones y boicot. Esta consulta popular del quince de abril, lo que quería es, terminar con este privilegio de unos cuantos y terminar también con la exclusión de las mayorías, terminar con la pugna de poderes. Es por eso que, la Mesa tres, tiene sus objetivos trazados, centrados en reinstitucionalizar la Función Legislativa, rescatar su legitimidad, concentrar su rol en la legislación y la fiscalización, terminar con la tentación de que en los nombramientos de jueces y magistrados inicie la corrupción. Pero este proceso de reinstitucionalizar y dar un real valor a la Función Legislativa, también está anclada a mejorar la representación política que vaya a la Función Legislativa, esto implica, también, hacer otras acciones que ya las iniciado esta Asamblea, cuando ha pedido una reinscripción de los partidos políticos, cuando le ha puesto nuevas reglas, también, a los partidos políticos, para que exista mayor

democracia, mayor participación, que dé más legitimidad a la representación en la Cámara Legislativa. La calidad de la Asamblea y de la nueva Asamblea, no está en el número de asambleístas, lógicamente, está en la calidad de los asambleístas que lleguen y en la calidad de representación que tengan estos respecto a la ciudadanía. El origen, es por eso, que esta Mesa ha garantizado que ese origen de la representación no solo sea en las provincias y a nivel nacional como actualmente, sino que sean regiones y en distritos electorales, para evitar que la mayoría de asambleístas que tiene mayor incidencia política vengan del centro o de un solo barrio de las grandes ciudades del país y representen equitativamente a los diferentes sectores del territorio. Ya lo dirá la ley y establecerá al detalle cómo se legitimará esa representación en la nueva Función Legislativa. Hay que desterrar, también, todos estos elementos que generaron las pugnas y la corrupción. Por eso es que esta Constitución ya no va a permitir más, que los políticos metan las manos en cortes, en tribunales y en otros organismos. Va a generar espacios de mayor diálogo político, no es justo que también la Función Legislativa con el plazo de diez días, presione para que el Ejecutivo conteste un proyecto de ley, ese plazo lo hemos ampliado a treinta días, para que ese pronunciamiento también esté intermediado de un diálogo, de una consulta de una socialización desde el Ejecutivo con los sectores sociales y también con la Función Legislativa. Creemos que el pueblo ecuatoriano el quince de abril le dijo, que no quiere retorno de los brujos, que sí quiere la renovación de los liderazgos, que no quiere retornar al pasado y que sí quiere avanzar hacia un cambio positivo. Es por esta razón, que esta Función Legislativa dice, claramente, en la propuesta, que es la máxima expresión de la representación política de la sociedad, no está diciendo que es la máxima función del Estado. Por eso, debemos entender, también, que las funciones del Estado no pueden ser autárquicas,

aisladas unas de otras, sin posibilidad de tener espacios institucionalizados para el entendimiento. De ahí es que se diseña la concepción del Consejo de Estado, como un espacio de diálogo, como un espacio de encuentro, como un espacio de coordinación, como ese espacio necesario para dar paso a la gobernabilidad. De hecho, en la historia los consejos dc Estado han tenido varias connotaciones. En Francia, empezó siendo un órgano de control de la legalidad. En España un órgano de consulta permanente y en Portugal, constructivo y también de control. Y en el Ecuador, como bien lo señalaba un Asambleísta, anteriormente, ya no es algo nuevo el Consejo de Estado, ha existido. Pero hoy, el Consejo de Estado de esta Asamblea Constituyente, reaparece con características diferentes, con roles distintos de otros países, así como también de otros roles distintos a los que ya tuvimos en nuestro país. Se define como una instancia de diálogo político permanente, como un espacio de consulta, de análisis, un espacio para construir consensos, para procesar disensos, una instancia que debe promover y está llamada a promover la gobernabilidad. Por lo tanto, si bien es cierto que se crea como un órgano superior de consulta y articulación, en un ningún momento dice en este articulado, que exista subordinación de las funciones del Estado al Consejo de Estado, porque está concebido como un espacio de diálogo, un espacio de corresponsabilidad de las funciones del Estado en el manejo del mismo. Sus objetivos son la consulta y la asesoría en asuntos de defensa de la soberanía y la protección pública, porque asume también los roles de lo que hoy es el Consejo de la Seguridad Nacional, pero le da a este Consejo una conducción estrictamente civil sobre los temas de defensa. La soberania involucra al conjunto de la nación y su dimensión no se circunscribe, única y exclusivamente, en el ámbito militar. Por eso, creemos que la corresponsabilidad de defensa atraviesa todas las funciones del Estado y todas las funciones del

Estado tienen que asumirlas. Este Consejo tiene que garantizar la gobernabilidad, la estabilidad democrática y cumplir con los objetivos nacionales, formular políticas públicas comunes y también presentar iniciativas legislativas. Este Consejo de Estado, no se reúne a voluntad del Presidente de la República, este Consejo de Estado se reúne por Mandato constitucional, al menos una vez cada tres meses, porque por Mandato constitucional el pueblo ecuatoriano les está dando un mensaje claro a los poderes del Estado, para que se entiendan, para que dialoguen, permanentemente, ese es el espíritu de tener un órgano superior de consulta, un órgano superior que permita la coordinación. Señor Presidente, el Ecuador está ante dos desafíos; el primero, anclarse al pasado y mantener un Estado y una situación en la cual unos pocos se han venido privilegiando; y, el segundo, es obedecer el Mandato de los ecuatorianos de abril de dos mil siete, que es avanzar hacia un cambio positivo, hacia un cambio que signifique terminar con la exclusión con mayor legitimidad. Creemos que esta nueva Función Legislativa va a favorecer ese cambio y va a permitir, que en el menor tiempo posible, una sola Cámara continúe con este proceso que ya lo inició la Asamblea Constituyente, que esta Asamblea unicameral en el menor tiempo posible, vaya construyendo y edificando de la manera participativa como lo ha hecho esta Asamblea con el pueblo ecuatoriano, las leyes orgánicas y las leyes secundarias que se necesitan para poner en marcha el cambio que necesita el país. Compañeros, señor Presidente. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Vicente Taiano. ----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. No está nuestro vicepresidente Leonardo Viteri y digo nuestro Vicepresidente, porque en todos los Congresos del mundo hay un Vicepresidente que

sirva de enlace entre las mayorías y las minorías, ese es en todos los Congresos del mundo y los Parlamentos del mundo, el segundo Vicepresidente. Nos han convocado el día de hoy, señor Presidente, compañeros asambleistas, a una verdadera maratón legislativa, créame que, me siento abrumado, porque a pesar de ser abogado en ejercicio profesional, con muchos años de experiencia, de tener alguna transitoria, experiencia parlamentaria, no me resulta fácil y lo confieso, no me resulta fácil, el poder analizar en apenas diez minutos de esta primera etapa de esta maratón, como nos corresponde, veintinueve artículos relativos a la Función Legislativa. Comenzó el boicot, ese no es ni siquiera mi teléfono, les ruego, por favor, que permita por lo menos hablar. Les decia, que me resulta tremendamente difícil hacer un análisis en apenas diez minutos, de veintinueve artículos de la Función Legislativa y de tres artículos del Consejo de Estado es, verdaderamente, complicado. No deberia, me parece que, no deberia haber hecho esto la Mesa, de mandar un gran paquete de artículos, debieron haber dividido, por lo menos, en dos o tres etapas la Función Legislativa, porque hoy día, precisamente, el día de hoy, vamos a hacer por fin, casi a los siete meses, lo que dispuso el pueblo del Ecuador en este Estatuto que para ustedes, para muchos de ustedes, conforme yo ya lo he escuchado en la sesión anterior, ya no vale nada, porque se hizo el Reglamento. Para nosotros si vale este Estatuto, porque en base a este Estatuto llegamos aquí a la Asamblea y este Estatuto, precisamente, dice, me lo ha prestado el doctor Esteves y está medio viejito, bastante utilizado como deben estar las leyes, la pregunta decia, que veniamos a Montecristi a instalar una Asamblea Constituyente que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución. Efectivamente, en estos artículos, en estos casi ochenta artículos que se van a discutir el día de hoy en una sola sesión, de ocho, de diez horas, de doce, de quince horas, no importa, pero en una

sola sesión, vamos a transformar el marco institucional del Estado, sí señores, en un sesión. Pero bueno, no nos queda otra alternativa y, seguramente, usted me dirá que ya me falta un minuto después de tres o cuatro, y alcanzaré a analizar muy pocos de los artículos de este nuevo Congreso, que lo que le están cambiando es el nombre por Asamblea Nacional y cambiándole de nombre o poniéndole otro letrero grandote, no se solucionan los problemas de la desinstitucionalización que tiene el Ecuador, sino con cambios fundamentales. Yo decía cuando se trataba el tema de la Función Ejecutiva, que aquí no habíamos visto lo que el pueblo del Ecuador quería, el pueblo del Ecuador quería que se elija un Congreso de mejor calidad, que vayan verdaderos representantes de los distintos sectores del país, a llevar la voz del pueblo, la voz de los que no tienen voz, a la primera Función del Estado, que es la Función Legislativa, eso es lo que el pueblo quiere, no actitudes demagógicas de simple maquillaje, como se está pretendiendo hacer, o sino que me digan que no. Aquí está gran parte de lo que estaba o de lo que está, en lo que es la Constitución de mil novecientos noventa y ocho, con muy pocos cambios que voy a tratar de comentar en el menor tiempo posible. Yo creo que el Ecuador aspiraba un Congreso bicameral, sí, señores; el Ecuador aspiraba un Congreso bicameral y Correa se lo ofreció y ahora, como la conveniencia política es distinta, ya no vamos al Congreso bicameral, vamos a una sola Cámara y así lo dice el numeral segundo del artículo uno, que van ustedes a aprobar, seguramente. Dice, además, que la Asamblea Nacional estará integrada por asambleístas nacionales, asambleístas por regiones, provincias y circunscripciones territoriales. Pero aquí no se establece, compañeros de la Mesa número tres, cómo se va a conformar la futura Asamblea Nacional, esa es una responsabilidad de ustedes, no podemos ser tan irresponsables y dejar a que la ley, a que treinta o cuarenta personas que obedezcan a una filiación política,

vengan a decidir por los ecuatorianos, si supuestamente aquí está la representación de todo el Ecuador y aquí habemos representantes de todas las provincias del país. Por qué no ponemos de una vez, cuál va a ser la conformación del Parlamento, cuál va a ser la conformación del Congreso, cuántos representantes nacionales van a haber, cuántos representantes van a tener cada una de las provincias del Ecuador. El Ecuador también quería que sus representantes vayan electos por circunscripciones territoriales y tampoco se está poniendo en el texto de la ley eso. Una cosa que me llama tremendamente la atención y quiero aclarar, tengo hijos adolescentes que están entre los dieciocho y veinticinco años de edad y que conozco la capacidad de los jóvenes ecuatorianos, chicos emprendedores, pero a los dieciocho años apenas están terminando el bachillerato, muchos de ellos tendrán un futuro brillante seguramente, ojalá que ellos ingresen a hacer política, pero yo debo de decirles, que cuando tenia más de cuarenta y cinco años, fui Legislador de la República, Legislador responsable, de los que estudiaban las leyes para poder proponerlas y me resultaba tremendamente difícil, tenía que estudiar mañana, tardes y noches, para proponer un texto de ley. El chico a los dieciocho años puede tener muy buena voluntad y estoy seguro que los chicos ecuatorianos la tienen, pero no tienen todavía esa capacidad de discernimiento para ir a hacer las leyes de la República del Ecuador, si no va a ser la Ley del Concejo Municipal, el Congreso Nacional va a hacer las leyes de la República. Por ello, creo que esta propuesta me suena totalmente altruista, pero demagógica, compañeros, reflexionen en eso. Denle a los chicos de dieciocho años la posibilidad de ser candidatos a concejales en su cantón, para que vayan entrando a la política del Ecuador, porque si es verdad que los jóvenes tienen que mojarse el poncho y hacer política en este país, pero no seamos demagogos y no pongamos dieciocho años para que vaya a ser Diputado de la República, a hacer

las leyes para los ecuatorianos, cuando lo que nos quejamos, señor Presidente y usted, también, seguramente se quejaba, es de la mala calidad y de la poca capacidad de los diputados en el Congreso Nacional. No es que queremos hacer un mejor Parlamento para el país, no es que queremos tener una mejor política para el Ecuador, por qué tanta irresponsabilidad de dejar esta puerta abierta, para desmejorar la calidad de Diputado, sea nacional, sea provincial, porque no se dice nada, ni siquiera se dice si el chico de dieciocho años va a poder ser representante nacional. Pero sigamos y vamos a la carrera, al atropello, al galope, al artículo tres, porque en los dos primeros artículos nos hubiéramos podido quedar debatiendo mucho tiempo. Pero en el numeral uno, se dice, que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones: "Posesionar al Presidente o Vicepresidente de la República, proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral". Está bien, pero esa Asamblea que no es de adorno, debe no solo posesionar, sino también juramentar al Presidente... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. ...al Presidente de la República. Qué pena señor Presidente, de ochenta artículos apenas estoy comenzando a analizar el artículo tres. Decía que esa Asamblea debe juramentar al futuro Presidente de la República, Presidente que lo va a posesionar; y lo más grave, en el numeral dos del artículo tres, se vuelve a repetir esta barbaridad, que ha permitido en el Ecuador, que permitió en el Ecuador el alarconato, que le permitió a un Congreso Nacional convertir a sus diputados en siquiatras, la misma cosa la ésta poniendo aquí, declarar la incapacidad mental o física del futuro Presidente de la República, o del Presidente de la República en ejercicio. Y seguimos, señor Presidente, cuando se habla en el numeral noveno del artículo

tres, de fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva, y yo me pregunto, quién va a fiscalizar a la Función Electoral, quién va a fiscalizar a la Función de Control, quién va a fiscalizar a las demás funciones del Estado.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo.----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Qué pena, señor Presidente.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. El asambleísta Tito Nilton Mendoza.----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Gracias, señor Presidente. Me parece que en este tema que es de vital importancia para el país, parecería que la bancada de mayoría no quiere opinar mucho. Nos está dando la palabra y le agradezco, señor Presidente, de todas maneras. Nos está dando la palabra a los asambleístas de oposición, siguiendo el uno al otro. Yo me voy a referir primero, señor Presidente, al tema de la sede legislativa. Aquí había un compromiso moral, formal, de más de ochenta asambleísta para con Manabí, para que la desconcentración del poder se dé en el Estado ecuatoriano, y que una de sus funciones, la Función Legislativa, pase de la ciudad de Quito, capital de la República, que concentra todo el poder, a una provincia como Manabí; que la Función Judicial vaya a la provincia del Azuay, a su capital Cuenca. Pero el Presidente de la República vino aquí a Manabí, aquí a Manabí, en nuestra propia casa y que en una sesión solemne de aniversario de la provincialización de Manabí, dijo que la sede legislativa no iba, escuché con atención las palabras del asambleísta Trajano Andrade, y veo que se ha resignado. Cuando con él estuvimos en la Asamblea Provincial de Manabí y con él fuimos parte de una Comisión que inclusive redactó una propuesta de texto constitucional para darle a

Manabí la sede legislativa. Hoy veo, no sé por qué, que han cambiado de opinión. Meda mucha pena esta situación por Manabí, porque los manabitas teníamos esta justa aspiración y que no tiene que ver solamente con lo que decía por ahí algún Asambleísta, de que a Manabi se le iba a atender de otras maneras. No, señor Presidente. En eso si tuvo razón el Presidente de la República, cuando se le pusieron como alfombra algunos funcionarios de esta provincia y prácticamente la dejaron sin dignidad. En eso si tiene razón, cuando él dijo que él venía a cumplir y tenía que cumplir porque esa era su responsabilidad como Presidente y como primer Magistrado del Estado, por supuesto que sí, esas son las funciones que deben tener todos los funcionarios públicos empezando por el Presidente de la República, cumplir para lo que han sido electos; y por eso estamos aquí en esta Asamblea nosotros también, luchando desde esta trinchera por las aspiraciones, en mi caso, por ejemplo, por la propuesta de Manabí; y porque Manabí hizo una propuesta, señor Presidente y señores asambleístas, y esa propuesta, de esa propuesta no hay absolutamente nada en éstos textos constitucionales que ahora se les está planteando en esta Asamblea, para que se aprobados ya, como definitivamente textos constitucionales. Y me voy a referir, porque es tan corto el tiempo que se nos permite hablar, para debatir como decía Vicente Taiano, más de ochenta disposiciones constitucionales fundamentales para la vida del Estado ecuatoriano. Vemos y perdóneme el término, como prácticamente se ha castrado al Congreso Nacional, se lo deja sin ninguna facultad fiscalizadora. La fiscalización es un simple saludo a la bandera, quisiera que pongan el artículo nueve o el numeral nueve perdón, numeral nueve estaba bien del artículo dos, creo que es no. Fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva y solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que consideren necesarias. No está allí la obligación de los funcionarios públicos a entregar la información

requerida so pena de destitución, qué pasa si un funcionario público le niega a la primera Función del Estado, que es la Función Legislativa, fiscalizadora por naturaleza, esa información. ¿Le pasa algo? no señor, no lo dice la Constitución, ni siquiera deja ese arbitrio a la ley, eso es gravísimo. Señor Presidente y señores asambleístas, es lamentable lo que se quiere hacer con la Legislatura. Como bien decía León Roldós, quedará como un ente eminentemente protocolario, posesionará a funcionarios, los podrá enjuiciar políticamente bajo muy severas condiciones establecidas en esta Constitución, pero eso será letra muerta, tengan ustedes por seguridad eso. Al señor Presidente de la República se le podrá autorizar su enjuiciamiento penal, solamente con el voto favorable de las dos terceras partes, que muy difícilmente, muy difícilmente se lograrán, así el Presidente de la República haga lo que le dé la gana, es decir, tiene facultad para hacer lo que le da la gana el Presidente de la República, violentar procedimientos, violentar la Constitución, hacer en definitiva lo que le dé la gana y nadie le podrá decir nada, no lo podrá fiscalizar el Congreso Nacional, será un simple saludo a la bandera. Cómo se constituye el Congreso Nacional. Es lamentable que en la Constitución no se diga, cuál va a ser el número de asambleístas de esta mal llamada Asamblea Legislativa, ahora la Legislatura. Lo lógico y lo correcto debió haber sido que en esta Constitución se determine, no en una disposición transitoria, en una disposición constitucional, cuál es la conformación del Congreso o de la Asamblea Legislativa como quieran llamarla, dejando un espacio abierto en la misma disposición constitucional, de crearse estos gobiernos regionales, que no creo que se vayan a formar, porque ese es otro tema que también por ejemplo se le negó a Manabí su capacidad de ser por sí sola, por sí sola región autónoma, y en eso ya hay asambleístas manabitas de la propia bancada oficial que han levantado su voz de protesta, como la asambleísta Hidrovo, como lo

mismo dijo el asambleísta Andrade. Entonces, debe establecerse cuál va a ser la conformación de la Asamblea Legislativa, constitucionalmente, eso no se dice aquí. Yo, con esta intervención, señor Presidente, si quiero hacer alusión a algo, porque me preocupa lo que viene sucediendo en la Asamblea Nacional Constituyente. Y, aquí se cree que somos enemigos políticos o que tenemos algún tipo de diferencias personales, no, señor Presidente, ni siquiera con usted, tenemos diferencias políticas, ideológicas y de objetivos. Pero venimos aquí y somos adversarios, no enemigos, saludo y recuerdo las frases de Norman Wray, la última ocasión que intervino, y eso es así Norman, una cosa son las cuestiones personales y otra cosa son las cuestiones políticas y aspiraciones especialmente de los pueblos que cada uno de nosotros representamos. Por eso estoy aquí luchando y peleando e invocándoles, que ustedes que tienen la mayoría, lo vuelvan a pensar y no desairen una vez más a Manabí, nos están quitando la autonomía, nos están quitando la sede legislativa y tras de eso con todo lo que está haciendo, con la política de este Gobierno, el pueblo cada día tiene menos posibilidad de acceder a una canasta básica familiar que le permita sobrevivir en condiciones más o menos decorosas, eso el pueblo no lo perdona, señor Presidente y señores asambleístas. Por eso, yo llamo una vez más a la reflexión. Y por último, porque no voy hablar más que del tema de la Asamblea Legislativa, porque no hay tiempo, señor Presidente. Con las condiciones que se les ponen a los asambleístas, se presume que los asambleístas. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Se presume, voy a terminar, señor Presidente. Se presume que los asambleístas son

delincuentes en potencia, es decir, que a la Asamblea Legislativa o al Congreso Nacional quienes llegan van a hacer negocios, van a hacer chantajes, señor Presidente, señores asambleísta, yo fui Legislador tres veces, nunca conseguí ninguna partida presupuestaria ni extrapresupuestaria y sí legisle, y le contesto al asambleísta Abel Ávila, si legisle por Manabí, por el país. Le recomiendo que vaya a los libros, a los archivos del Congreso Nacional, y vea cuántos proyectos de Ley, durante los ejercicios que estuve presenté, y cuántos de esos proyectos son leyes aprobadas en beneficio de Manabí y del país. Por supuesto que lo hice, señor Presidente y señores asambleístas, y me siento orgulloso de aquello, con mi conciencia tranquila, y por eso la ciudadanía de Manabí, cada vez que camino en cualquier calle de la provincia, de los pueblos de mi provincia.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Termino su tiempo.----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Soy bien recibido, señor Presidente. Gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Félix Alcívar.----------

EL ASAMBLEÍSTA ALCÍVAR FÉLIX. Gracias, señor Presidente. Yo quiero iniciar mi intervención, indicando que al pueblo ecuatoriano y al pueblo manabita, no hay que mentirle. Parece que, algunos sociales, que se dicen ser cristianos, no son tan cristianos y no cumplen con los mandamientos, especialmente de la Iglesia católica. En esta primera página de este medio de comunicación se dice que el día de hoy la mayoría aprobará un paquete sin mayor debate, cuando hay que decirle a este pueblo ecuatoriano, que el día de hoy inicia el debate de este capítulo de la Constitución y que hoy no vamos a votar, cómo se ésta

afirmando en este medio de comunicación. Siguen mintiendo, el social que parece que de cristiano le queda poco, que hoy se va a tratar la mitad de la Constitución en esta Asamblea, mentira, compatriota; mentira manabitas, se está tratando el capítulo de la Función Legislativa, y en este debate es la oportunidad para hacer propuestas en ese sentido, para mejorar el texto constitucional, para mejorar el debate, para reivindicar lo que la oposición ha tratado aquí de mancillar la Asamblea Constituyente. Yo me alegro porque hoy día, señor Presidente y compañeros, el debate ha sido con altura, esa es la forma como tenemos que debatir los textos constitucionales. Indudablemente que hay que cambiar el nombre de este Congreso, porque nos trae a memoria ingratas, infaustas recordaciones en la vida democrática, cómo no lo vamos a enterrar y cómo no se va a vestir de negro la partidocracia, claro que tiene que vestirse de negro, y tiene que el pueblo entonccs enarbolar la bandera blanca y la bandera verde esperanza, para poder avanzar hacia un futuro mejor. Tenemos que enterrar definitivamente este Congreso Nacional y, precisamente, crear esta Asamblea, que ya se dijo aquí, no es de ahora, que ha tenido su historia .----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le interrumpo. Doctor Estevcs, tienen un punto de orden.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. ...no se escucha. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe, por favor, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA ALCÍVAR FÉLIX. Lo felicito, compañero asambleísta, que se queda con esa camisa roja de la revolución. Así avanzamos mejor.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe.----------

EL ASAMBLEÍSTA ALCÍVAR FÉLIX. Bien. Considero entonces que ahí está la parte fundamental de lo que tiene que hacer la nueva Función Legislativa, empezando con el cambio de su nombre y que se llame lo que hoy el pueblo ecuatoriano se ha empoderado, la Asamblea Nacional. Pero hay que hacer algunas precisiones, compañero Presidente. Particularmente, como manabita, no estamos buscando una Función Legislativa que se quede en Manabí, porque esto significa o es sinónimo de desarrollo para esta provincia. Lo hacemos bajo una convicción firme que particularmente este Asambleísta lo expuso y que ahí la oposición o los compañeros de la derecha de su ubicación no dijeron nada cuando *se propuso, yo lo propuse, que el Gobierno sea no solamente* descentralizado sino que se gobierne en forma desconcentrada. Esta es una aspiración legítima que tenemos los pueblos que no hemos concentrado el poder y aquí aclaro, para los Ortiz, para los Carrión, para los Pérez, para los Jorge Rodríguez, que no estamos atentando a la capitalidad, que no es que esta Asamblea ha puesto en riesgo de que Quito sea capital de la República, al contrario, aquí hay un criterio casi unánime de que Quito sea la capital de la República y no desinformen al pueblo ecuatoriano en ese sentido. Ratificamos ese principio, pero es legítimo el derecho de aspirar a que este Estado ecuatoriano, se lo gobierne desconcentradamente. De allí la aspiración que no fue una promesa del Presidente de la República. La promesa de él es que esta Asamblea se instalará en Montecristi y funcione en Montecristi, y estamos cumpliendo con esa promesa que hizo el Presidente de la República, pese que a algunos agoreros del desastre decían que no se iba a poder funcionar aquí. Aquí estamos construyendo el nuevo Ecuador y la nueva patria, compañero Presidente. Y, finalmente, para ser muy estricto y disciplinado en el asunto, yo quiero recoger también,

porque así me lo hicieron llegar ante la imposibilidad de intervenir, el criterio de la compañera Teresa y la compañera Soledad, que es un criterio compartido con mi intervención. A la compañera Montaño, tenemos que decirle al Ecuador el contenido íntegro del artículo que crea el Consejo del Estado, porque a lo mejor se queda flotando el hecho de que éste es un súper poder dentro del Estado. "Artículo uno. Créase el Consejo como órgano superior de consulta y articulación, no del ejercicio de la administración". Esa es le verdad ecuatorianos y ustedes lo pueden ver ahí, de consulta y articulación, y abajo dice como un órgano superior de consulta y asesoramiento del Estado. Porque no entonces articular todos los representantes de las nuevas funciones del Estado y las funciones del Estado para que juntos se trabaje para un porvenir mejor. Obvio que hay algunas observaciones, compañeros, porque esto perfectible, precisamente para eso es el debate. Hay algunas inquietudes que particularmente como Asambleísta la voy hacer llegar a la Mesa Directiva conforme dice el Reglamento, a la Mesa correspondiente, porque obviamente que la fiscalización no se puede fiscalizar solamente a la Función Ejecutiva, hay que fiscalizar a las instituciones del Estado y a la Administración Pública, no solamente a la Función Ejecutiva, y eso obviamente que hay que corregirlo, como también hay que definir si es que vamos por el camino de los representantes nacionales, obvio que hay que definirle funciones, porque no pueden quedar en ese marco, y si estamos en igualdad de condiciones, para qué los asambleístas nacionales. Y otras observaciones, compañero Presidente, que en su debida oportunidad le vamos a hacer llegar a la Mesa, como un aporte para mejorar ese texto y ojalá que los compañeros hagan llegar esos aportes para mejorar el texto constitucional que es lo que nos debe preocupar. Muchas gracias, Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gilberto Guamangate.----------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE GILBERTO. Muchísimas gracias, compañero Presidente y compañeros asambleístas. Cada vez más, estoy convencido de que un debate a profundidad nos hace falta en estos momentos. Lamentablemente, el día sábado, no porque haya tenido que ir saliendo de esta sesión, tuve que ausentarme, pero en ese debate se trató un capítulo sumamente importante, los recursos naturales, lamento no haber podido participar en ese proceso. Pero bueno, quiero básicamente en este momento, participar con algunos elementos sobre todo en los artículos seis, respecto a este capitulado en el que básicamente se refiere a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en la capital de todos los ecuatorianos que, totalmente de acuerdo estamos y respaldamos, además, sea Quito. Pero no queríamos pasar por alto, al menos, nuestro movimiento, nuestro pequeño bloque que de aprobarse esta Constitución, tendríamos que, fusionarnos con algunos para poder lógicamente presentar y ser un bloque. Ahora, quiero decirles a mis compañeros ecuatorianos, convencidos estamos de que hoy más que nunca es necesario apoyar a la descentralización. Y queremos ratificar nosotros como hombres de bien, como asambleístas que dimos nuestra firma cuando los compañeros asambleístas manabitas vinieron y nos pidieron de favor que les firmemos para que la Función Legislativa esté aquí en Montecristi. Nos ratificamos, nos reafirmamos, para que esa situación pueda ser consolidada en el sentido de que la Asamblea Nacional Constituyente quede en Manabí. Por otro lado, es necesario también, decir que respecto a los recesos que se manifiesta en ese mismo articulado, el Pleno sesionará en forma ordinaria y permanente con dos recesos al año de quince días cada uno. Yo no sé si vamos a seguir todavía dando ese privilegio, para que al igual que los Congresos pasados, tengan la posibilidad de que los

asambleísta que vengan tengan quince días de vacaciones, es decir, sería un mes al año, vacancia legislativa. Nosotros aquí hemos venido y hemos demostrado al país, que no hemos descansado absolutamente un día, un solo día. Claro, entonces que venga el Congreso y tengan la vacancia de un mes, que bonito. No me parece, no me parece personalmente. Por eso nosotros les vamos hacer llegar nuestro aporte en su debido momento. En el artículo quince, se propone sobre la destitución del Presidente de la República. La Asamblea Nacional Constituyente solamente podrá hacerlo una sola vez durante el periodo de Gobierno. Significa que, si a un número determinado de asambleístas, que viendo las diferentes incongruencias que pueden estar suscitándose en el país, por parte del gobierno pertinente, lo realizan por decir en el primer año, ya no lo podrán hacer en el segundo año, porque tal vez posiblemente no tuvieron la mayoría, entonces terminará el tercero, terminará el cuarto, y no pasará absolutamente nada, cuando perfectamente sabemos, yo no lo digo por este Gobierno, compañeros asambleísta, no lo digo por este proceso de Gobierno, lo digo por los gobiernos que van a venir, y ahí cada vez más también me estoy convenciendo de quc esta Constitución no tiene que ser trabajada solamente para este Gobierno, ni para este período de Gobierno, sino que tiene que ser pensada para los futuros Gobiernos que van a venir. Y, claro, también me viene a la mente ya, cuando tengamos a un Gobierno Social Cristiano, un Gobierno del partido Sociedad Patriótica, cuando vengan con toda la réplica y comiencen también a poner en práctica, y ahí nosotros qué diremos, qué diremos. Hay que pensar muy bien. Estoy de acuerdo, compañeras y compañeros, en que para enjuiciar al Presidente de la República, que de ley tiene que ingresar en ese articulado, no tiene que ser con la cuarta parte de los miembros de la Asamblea, tiene que ser más o menos con un cincuenta por ciento que lo vamos a proponer, lo vamos a proponer, porque es necesario que

también se incluya en este proceso al Presidente de la República, no solamente a los Ministros de Estado y todo lo que se determina en el articulado pertinente. Además, hay una situación que me está preocupando sumamente y en especial, el sábado pasado habíamos discutido sobre la Función de Transparencia y Control Social, y en el artículo uno se decía, muy maravillosamente de la siguiente manera: "El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del Estado, todo ciudadano tiene derecho a participar y controlar los actos de interés público conforme a la ley." Vamos a reconocer a esta instancia sumamente importante, y no le vamos a dar la potestad entonces, en este momento, para que también esta instancia sea la que plantee la destitución de los Ministros de Estado que estén haciendo mal, que estén llevando mal adelante las políticas de la función pública en nuestro país, no me parece también y creo consiguientemente que hay que incluir a esta función sumamente importante para que también pueda ser la proponente en este caso, para que se inicie los juicios políticos y, consecuentemente, se pueda cesar en sus funciones, no solamente quedar en el simple hecho de quedar como observadores siendo una instancia sumamente importante. Así trataremos de apoyar a este proceso en el verdadero control y la transparencia social dentro de nuestro país. Compañera Presidenta encargada, compañeros asambleístas, finalmente quiero decirle al país, hay muchas cosas que se están dejando para que sea la nueva Asamblea Nacional la que tenga que hacer un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de leyes, yo pensaria que en una transitoria de esta Constitución, tiene que estar presente algún artículo que diga, la Asamblea Constituyente anualmente tendrá que evacuar una cantidad, no sé si de diez, de veinte leyes, porque no vaya a ser que pase lo mismo que ha estado sucediendo con los Congresos pasados, en donde con una ley se pasaba un año, con una ley. Aquí en esta Asamblea, ya tenemos listo, tenemos listo en este

momento tres leyes y hemos trabajado en la Mesa diez, y hay que decirle también al país, eso no hemos trabajado en el Pleno todavía, hemos trabajado en la Mesa diez, una sola se trató en el Pleno. Aquí, hay muchos sectores que le mienten al país, diciendo.----------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA AMINTA BUENAÑO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE GILBERTO. Que se ha tratado leyes, se ha tratado Mandatos, yo dije ayer en un medio de comunicación apenas, si sumamos, creo que hemos llegado a siete días para tratar, y no hemos pasado los siete meses tratando sobre leyes ni mandatos. Entonces, hay que decir la verdad al país, pero la Asamblea que venga, la Función Legislativa, tiene que realizar leyes, no vamos a dejar aquí, reitero para que pasen solamente en vacaciones y en representaciones, paseándose por todo el país, tienen que ser responsables, porque creo que el país necesita, y hoy más que nunca va a necesitar evacuar leyes que vayan en favor de los sectores más desposeídos de nuestra patria. Muchas gracias, compañera.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, asambleista Guamangate. Asambleista Fernando Salazar.----------

EL ASAMBLEÍSTA SALAZAR FERNANDO. Señora Presidenta, muchas gracias. Compañeros asambleístas: Creo que es importante en este debate sobre la Función Legislativa, clarificar algunos comentarios que se han hecho por parte de diferentes sectores. Pero antes que nada,

hacer una reflexión que me voy a permitir con su permiso leer, y que está en los considerandos que había la Mesa elaborado para la presentación del articulado pertinente. Y es la segunda fundamentación en donde decimos desde la Mesa, a la Asamblea Constituyente, que la Función Legislativa es la máxima expresión de la representación política de la sociedad, por tanto, la recuperación de su imagen va a depender fundamentalmente de un cambio profundo de actitudes y comportamientos de las organizaciones políticas y sus dirigentes, asegurando mecanismos democráticos y en base a méritos de selección de sus candidatos y mejorando la transparencia de los procesos electorales, a fin de que los ciudadanos estén en condiciones de elegir a quienes representen realmente sus intereses. Posiblemente, el articulado de la Constitución no pueda llegar en esta parte a promover eso, que sí está promoviéndose en otro articulado, en otros textos constitucionales, en donde estamos promoviendo que los partidos políticos se democraticen y donde la participación de la ciudadanía pueda ser una participación mucho más activa al interior de esas organizaciones que, luego tendrán que poner sus candidatos a consideración de los ciudadanos y ciudadanas y que de esos candidatos han de ser elegidos aquellos que han de llegar a ostentar tan altas dignidades en la Asamblea Nacional. Es evidente que esta reflexión si fuera acogida, permitiría la profundización de la democracia, porque eso es la Función Legislativa. Es el lugar, es el sitio en donde se procesa en forma diligente la conflictividad social acumulada por décadas sino por siglos, que se expresa en forma de demandas y propuestas que vienen de la sociedad y que deben transformarse en decisiones vinculantes para toda la colectividad. Por lo tanto, necesitan de una Función Legislativa con capacidades institucionales claramente normadas y que contribuye, por supuesto, a la despersonalización del ejercicio del poder político. Es importante entender que la decisión de las personas en la

sociedad no es el resultado de voluntades caprichosas, todas ellas responden a reglas preestablecidas que señalan qué institución interviene en cada decisión. La definición de objetivos y procedimientos de cada decisión tiene que reflejarse en normas jurídicas que es el procedimiento civilizado de la conversión de las demandas sociales que ingresan al sistema político en decisiones obligatorias. Estas son las leyes que alguien tiene que elaborarlas formalmente en la Función Legislativa. La capacidad de legislar, ciertamente, requiere de conocimientos, requiere que se profundice, no la cantidad sino la calidad del debate; que se profundice la calidad de las leyes, pero estas leyes no pueden, nunca podrán ser consecuencia de los intereses particulares, de grupos, que han ostentado y que, posiblemente, requieren seguir ostentando el poder. Esta voluntad de los asambleístas tiene que experimentar cambios constantes en la organización política del Estado, deben producir cambios importantes también, como estamos produciendo ahora como legisladores constituyentes, en la definición de las funciones del Estado. Ya hemos demostrado en el articulado de la Función Legislativa, que el Presidente no tiene esos súper poderes, ese híper presidencialismo que se acusó cuando se estaba preparando el articulado en la Mesa número tres. Es la Función Legislativa, ciertamente, la máxima expresión de la representación política. Por eso, hay que darle a esa representación política la representación desde el territorio, desde las regiones, que estamos en proceso de construcción y que ya ha tenido su primer debate; desde las provincias que son espacios ya construidos, desde allí tiene que darse la posibilidad de una representación auténtica del territorio y de los espacios políticos con la representación nacional, que quisiéramos y es la razón de ser de esa expresión de la representación nacional, los *mayores o los mejores representantes políticos* de cada una de las tiendas partidarias. La representación de personas que tengan la

autoridad moral desde el espacio nacional, que han de ser elegidas para ir a representar a los ciudadanos y ciudadanas. Se ha hecho mención a algunas observaciones, que queremos agradecer porque la Mesa ha trabajado silenciosa y responsablemente, tratando de construir este mandato ciudadano, el mandato de reestructurar el Estado ecuatoriano y de generar las instituciones que permitan ejecutar esas políticas, que permitan ejecutar esas acciones en beneficio de las mayorías. Creemos que es importantc cada una de las observaciones que han sido entregadas y auguramos darles el mejor tratamiento a esas representaciones. Pero no podemos, compañeros, estigmatizar en este debate algunos artículos que están hechos con el mejor espíritu, no podemos estigmatizar el espíritu del artículo uno, porque lo que se intenta es lograr una mayor y mejor representación de los espacios territoriales. Evidentemente, que es perfectible el artículo y vamos a tomar en cuenta las observaciones. Quiero, por último, decir que desde este espacio hemos procurado que el poder no nos corrompa, que el poder no llegue a esta Asamblea para mal usarlo, y no aceptamos, no compartimos la idea de reducir el debate a cuestiones emotivas, porque eso no es político, ni a cnardecer el espíritu manabita porque eso no es responsable. Nosotros queremos actuar con responsabilidad, fortaleciendo las instancias del Estado, fortaleciendo esas instancias que otrora eran parte del reparto, de la troncha, del chantaje, con la participación ciudadana. Esta Asamblea Constituyente pasará a la historia, porque la participación ciudadana no es más un enunciado; la participación ciudadana desde los espacios mínimos de organización territorial y social está siendo considerada...----------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA FERNANDO CORDERO CUEVA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.----------

SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA SALAZAR FERNANDO. Y llamamos a la reflexión, para empezar a construir esos espacios democráticos y trasladar la política a esos espacios, para que desde allí, desde esos espacios podamos trasladar a la Asamblea Nacional los debates por los verdaderos intereses de los hombres y mujeres de nuestra querida patria. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Hólger Chávez. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Señor Presidente, compañeros asambleístas, pueblo del Ecuador: Yo sí quiero sumarme a las observaciones que han hecho algunos compañeros del bloque de la oposición en lo relacionado al tiempo deficiente que significa debatir una gran cantidad de artículos de gran trascendencia para los destinos del país, ya que el análisis de cada una de las disposiciones quc, sobre todo, consideramos fundamentales demandan de su tiempo necesario y cn homenaje a aquel tiempo voy a procurar ir puntualizando las observacioncs que tengo, que he realizado en mis anotaciones, para luego proceder a presentar por escrito, porque también es importante que el país conozca en este cenáculo del debate, porque de la discusión sale la luz, puede escuchar lo que pensamos como representantes de cada una de nuestras jurisdicciones provinciales. En el artículo uno, refiriéndome al inciso segundo, le pido que se proyecte en la pantalla. "La Asamblea Nacional es unicameral, aquí yo comparto que la Asamblea Nacional sea unicameral. ¿Por qué? porque no representa una garantia para el país. Quién ha dicho que la bicameralidad, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, la una representa la inexperiencia y la otra la experiencia. Si muchas de las veces, los

jóvenes que no teniendo una edad avanzada, sin embargo reflejan mayores conocimientos que aquellos que cronológicamente están en una edad avanzada. El conocimiento no está condicionado a la edad cronológica. Entonces, yo sí creo que estas sugerencias que se han dado de la necesidad de mantener la bicameralidad, creo que es una equivocación, por lo tanto comparto con la tesis de la unicameralidad. Pero, en la parte siguiente que dice: "Tendrá su sede en la ciudad de Quito". Quiero ser muy congruente con lo que digo y con lo que hago. El país necesita la descentralización. Los órganos del ejercicio del poder político no va a afectar en nada a la ciudad de Quito, Luz de América, el símbolo y el referente de la transformación del país, por el solo hecho de que se establezca la distribución de los distintos órganos que ejercen las funciones del poder político en las distintas jurisdicciones del país. Yo sí creo, señor Presidente y pueblo del Ecuador, habiendo dado mi respaldo para que Manabí, Montecristi sea la sede de la Asamblea Nacional, pido que aquí, en lugar que se diga "Quito", se diga "Montecristi" como sede de la Asamblea Nacional, donde funcione la Función Legislativa o Asamblea Nacional, que es la denominación que le estamos dando. Si nosotros someteríamos a votación respecto a la cantidad de firmas que existen recaudadas, automáticamente Manabí estaría captando la sede de la Función Legislativa. En el artículo tres, en la parte final, me voy a referir al artículo dos, inciso segundo, acerca de los dieciocho años para ser candidato a esta dignidad de Asambleísta. En el artículo tres: "La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes: Posesionar –ahí iría seguido- de manera obligatoria al Presidente de la República..." y continúa el resto del numeral. En el numeral quinto del artículo tres: "Reformar la Constitución...", aquí se debe determinar con qué porcentaje se va a reformar la Constitución, y mi propuesta es que sea con el voto favorable de las tres cuartas partes de los asambleístas. En el numeral catorce del artículo tres: "Conceder amnistías generales

por delitos comunes de motivación política", debe ir. Porque no hay delitos políticos, hablamos de delitos, los delitos son comunes, pero la sustentación, lo que motiva al hecho, al acto, a la conducta, es un hecho de carácter político, de interés social o colectivo. Más abajo dice: "En ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos humanitarios –seguido- y de paz social". El artículo cuarto... Voy a retroceder al numeral once del artículo tercero: "Posesionar –debe incorporarse la siguiente expresión- de manera obligatoria –ahí continuaría- al Procurador General del Estado", porque dice "posesionar", debe determinarse con claridad que es obligación de la Asamblea posesionar al Procurador General del Estado y a quienes se refiere este numeral. El artículo cuatro: "La Asamblea Nacional elegirá –seguido- por votación unipersonal a un Presidente y a dos vicepresidentes de entre sus miembros", ese es el aditamento que sería, a mi criterio. Artículo cinco: "El Consejo de Administración Legislativa es el máximo órgano de administración y está integrado por el Presidente, dos vicepresidentes y por cuatro vocales, elegidos –ahí va la siguiente expresión- de manera universal por la Asamblea Nacional...", va el resto. El artículo seis: "La Asamblea Nacional se instalará en Montecristi, sin necesidad de convocatoria...", va el resto. "Los y las asambleístas gozarán de fuero...". En el artículo quince, numeral uno: "La Asamblea Nacional tiene la facultad de proceder a la destitución del Presidente de la República en los siguientes casos: Por la comisión de delitos debidamente comprobados contra la seguridad del Estado". Debe establecerse con mayor puntualización y claridad para evitar artificios en la interpretación. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. "La Asamblea Nacional tiene la

facultad de proceder al enjuiciamiento político cuando se refiera a los ministros de Estado..." Le pido de favor el penúltimo inciso. "La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo el caso de los ministros de Estado". Aquí, cuando se da la censura a los ministros de Estado debe llevar implícita la rectificación de la política del Ministro que ha sido censurado. El Ministro queda censurado, la pregunta es: ¿en qué circunstancia queda lo que motivó la censura por parte de la Asamblea, en este caso como órgano legislativo? Entonces, la función es establecer la rectificación. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo, señor Asambleísta. ------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Y el voto de los dieciocho años, con esto concluyo, señor Presidente, considero que debe ser a partir de los veinte años el derecho de los jóvenes a poder participar como candidatos a la Asamblea. He apoyado a los dieciocho años para ser elegidos a las juntas parroquiales, igualmente para concejales; pero, para esta dignidad de gran trascendencia, comparto que sea desde los veinte años en adelante. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta César Gracia. ----------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Muchas gracias, señor Presidente. El tema que estamos tratando es muy importante, es uno de los cinco poderes que vamos a tener según la nueva Constitución Política que estamos elaborando. En el artículo dos, en el inciso segundo, dice que: "Para ser asambleísta se requerirá ser ecuatoriano y tener al menos dieciocho años al momento de la inscripción de la candidatura", si mal no me equivoco, en la Mesa uno se propuso veinte años, señor Presidente y compañeros asambleístas. En el artículo respectivo

presentado por esa Mesa dice: "Para presentarse como candidatos a elecciones pluripersonales se requerirá tener al menos veinte años de edad", y me acuerdo también la propuesta de dieciocho años para Presidente de Juntas Parroquiales. Vale la pena la aclaración, para en la redacción de la nueva Constitución exista pues la sintaxis del caso. En el artículo tres, en el numeral nueve, dice: "Fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva y solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que considere necesarias". Aquí ha habido muchas quejas de todas las bancadas, en donde esa petición de información no llegó hacia los asambleístas, por lo tanto debemos darle una fortaleza coercitiva para que de esa forma la petición de información al servidor público, pucs tenga el eco del asambleísta que lo requiere. En el artículo cinco, cuando habla de que "el Consejo de Administración Legislativa es el máximo órgano de administración y está integrada por el Presidente, dos vicepresidentes y cuatro vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre los asambleístas nacionales, pertenecientes a diferentes bancadas". Yo pregunto una cosa: ¿cuál es la discriminación para los asambleístas provinciales? Si aquí vamos a trabajar, si trabajamos con conciencia nacional e igualmente en la Asamblea Nacional todos los asambleístas trabajaremos con conciencia nacional, por qué se los discrimina a los asambleístas provinciales en este artículo, y estamos hablando que estamos elaborando una Constitución Política incluyente, participativa, democrática, que vaya a cubrir todas las falencias de las constituciones políticas pasadas incluyendo la que hoy está vigente. Entonces, no entiendo por qué, los colegas de esta Mesa, discriminan a los asambleístas provinciales, si el trabajo es de la misma responsabilidad y actuamos todos con conciencia nacional. En el artículo doce, está establecido que los asambleístas actuamos todos con conciencia nacional. En el artículo catorce, en el inciso cuarto, cuando se habla de que "Solo se podrá privar de la libertad en caso de delito

flagrante, llamamiento a juicio por delito reprimido con reclusión o sentencia en firme con pena privativa de libertad". Yo creo que en el Código Penal está establecido claramente lo siguiente: "sentencia penal condenatoria ejecutoriada", suficiente que diga eso y todos los vamos a entender. Donde dice: "o sentencia en firme con pena privativa de libertad", sugiero que diga lo siguiente: "sentencia penal condenatoria ejecutoriada", suficiente y todos lo entendemos. En el artículo quince, en el numeral dos, dice: "Por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito", me acuerdo que cuando estábamos tratando la otra función del Estado que está creando esta Asamblea, cuando hablamos de la Función de Control Social y Transparencia, que solamente se puede ser parte en el caso de enriquecimiento ilícito, y propuse igual que otros asambleístas, que también se hiciera extensiva a cohecho, peculado y concusión. De esa forma, creo que estamos siendo coherentes con lo planteado el día de hoy por la Mesa. En el artículo dieciséis, en donde dice que: "La Asamblea Nacional tiene la facultad de proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, del Vicepresidente/a de la República, de los Ministros/as del Estado, del Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes, miembros del Consejo Electoral...", pero, hay otro inciso que dice, el inciso es el siguiente, el inciso cuarto dice: "La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros de Estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al Presidente de la República". Esto es una payasada, colegas asambleístas, es una pérdida de tiempo, que ya esta Constitución Política vigente lo establece, es una payasada. Si en verdad la Asamblea no va a tener la fuerza, la fortaleza para destituir, para qué va a perder el tiempo y el dinero de los ecuatorianos y ecuatorianas en un juicio. Si le vamos a dar nosotros la

facultad a que el señor Presidente de la República sea quien decide si manda a su casa o no al Ministro destituido por la Asamblea, entonces, para qué le vamos a enjuiciar políticamente. Eso es una payasada, perdónenme. Ya está inclusive en esta Constitución y tuvo los mismos efectos: ninguno. El Congreso se pasó ocupando tiempo y gastando plata en sueldos, que bien le vale para hacer leyes que le van en beneficio del pueblo, el tiempo y esa plata, para que después diga el Presidente de la República, si me da la gana, pues, acepto, sino no pasa nada. Entonces, yo creo que debemos cubrir, señor Presidente y señores asambleístas, esta falencia, porque, en verdad de nada vale enjuiciarlos si no va a ser potestad su destitución sino del Presidente de la República. Es importante, señor Presidente, todo el trabajo que las Mesas están llevando adelante y esperemos que las sugerencias planteadas por los asambleistas tengan la acogida del caso, porque con seguridad las propuestas hechas por las Mesas son propuestas de buena fe y aquí estamos los asambleístas para cubrir algunas falencias de esas propuestas. Estamos a pocos días de que la Asamblea termine su trabajo y cuando el pueblo ecuatoriano vaya a las urnas en referéndum, se habrán gastado doscientos millones de dólares en esta Constitución, que ojalá pues y como es el anhelo de todos los ciento treinta asambleístas, en verdad le vaya a dar al Ecuador un futuro de cambio, de progreso, de desarrollo, porque los doscientos millones de dólares, a lo menos alcanzarían, en caso de no ser así, alcanzarían para darles un hospital a los cantones más pequeños de esta patria. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Gracias, señor Presidente. Si no logramos nuestro cometido, quiere decir que hemos estafado al pueblo. Entonces, continuemos interpretando las propuestas,

cubriendo las falencias que hoy tiene el sistema. Este sistema tiene que acabarse, es verdad, y tenemos que legislar de esta forma, a darle al Ecuador un nuevo sistema que, en verdad, le vaya a cubrir sus necesidades, que le dé salud, educación a San Lorenzo, a Río Verde, a Muisne, a Quinindé, a Eloy Alfaro, a Atacames, a Esmeraldas, a la Concordia. De esta forma, señor Presidente, creo que vamos a salir satisfechos de aquí de la Asamblea. Gracias, señor Presidente; gracias, colegas asambleístas. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Paula Romo. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Gracias, señor Presidente. Creo que hoy que tratamos el tema de la Función Legislativa, es un gran momento para hacer memoria. ¿Cuál fue el punto de partida de este proceso constituyente? Y para poder hacer memoria no es suficiente ir a los meses previos a la consulta popular que nos trajo aquí, sino que hay que hacer memoria al menos hasta mil novecientos noventa y ocho cuando se expidió la Constitución. En ese año, en mil novecientos ochenta y ocho nos ofrecieron que la Constitución iba a ser la Constitución de la gobernabilidad e inmediatamente después vivimos los diez años más convulsionados de este último período democrático. Con la Constitución de mil novecientos noventa y ocho y su diseño institucional, el de la gobernabilidad, debemos recordar que hace diez años, ningún Presidente de la República ha podido terminar su período. Gran lección, señor Presidente. La gobernabilidad no puede ser una creación artificial y no es suficiente buscar mecanismos para los acuerdos entre los poderosos. Gobernabilidad democrática solo es posible cuando los grandes acuerdo son con y entre la mayoría de la población. En la Constitución del noventa y ocho se pensó que el Congreso era un obstáculo para el Presidente. Hoy no podemos cometer

ese error. En esa Constitución se creó un súper presidente y un mini Congreso. Ese Congreso al perder su capacidad de destituir ministros, de elegir a sus propias autoridades, porque ni siquiera podía escoger a sus vicepresidentes, eso ya estaba arreglado por la Constituyente del noventa y ocho. Ese Congreso al perder todas esas facultades, conservó para si una sola herramienta y la supo usar muy bien, señor Presidente, la herramienta del chantaje. Cuando impulsamos la convocatoria a esta Asamblea Constituyente habíamos pasado casi un año sin Corte Suprema de Justicia, sin Ministro Fiscal, un año sin Tribunal Constitucional, cinco años sin Contralor General del Estado, tres años sin Defensor del Pueblo, ocho meses sin Directorio del Banco Central. Y esa es la institucionalidad y la estabilidad que todavía hoy, algunos defienden. Eso no puede volver a repetirse, señor Presidente, y es importante entonces, tener un Congreso con todas sus facultades pero también sin la posibilidad del chantaje y la extorsión política que los últimos congresos, el último Congreso supo utilizar muy bien en este juego de poderes. Debemos entonces, crear un balance y un sistema equilibrado de pesos y contrapesos como lo ordena la teoría de la democracia, en donde los poderes no están juntos sino que se equilibran entre si y se controlan entre sí. Necesitamos un Congreso que ya sin chantaje tenga unos poderes muy claros además de las facultades propias de legislar, pues eso poderes lo reconocen como el órgano más importante de representación en las democracias. Por eso, yo quiero insistir, señor Presidente, en que se le debe otorgar al Congreso o a la Asamblea Nacional, la facultad de destituir a los ministros cuando estos son censurados. Las facultades del Congreso y de la Asamblea no solamente se discuten hoy, en primer debate en un capítulo de treinta artículos o un poco menos, no ochenta como algunos dicen. Las facultades del Congreso ya se debatieron en este Pleno cuando establecimos que a ese Congreso se le debe presentar para

conocer y debatir el Plan de Desarrollo, cuando establecimos que este Congreso apruebe el Presupuesto del Estado, cuando discutimos que el Congreso es parte de la comisión que califica antes de poder posesionar a otros cargos y a otros órganos de designación, a otros mecanismos, a otros funcionarios para el control. El Congreso si participa y el Congreso está en esos espacios. Pero insisto, señor Presidente, en que es importante revisar algunos para crear un sistema de equilibrio. Las competencias exclusivas para la reforma en materia de tributos, en materia económica o el veto total, son figuras que ya estaban en la Constitución del noventa y ocho, y por eso me sorprende la alarma de algunos colegas en este Pleno. Creo que también es importante que entre las causales de destitución del Presidente se incluya la de grave crisis política, así como se lo hizo en la figura en donde el Presidente está facultado a disolver por una única ocasión, el Congreso Nacional. Ese mecanismo el que algunos llamamos de muerte cruzada, no es un mecanismo que está diseñado para ser usado, colegas, todo lo contrario, lo que queremos es eliminar toda forma de incentivo, queremos eliminar todo incentivo para que ese mecanismo opere. De tal forma que, ninguno, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, se vea tentado a usar ese mecanismo. Así que me parece que para lograr ese equilibrio, debemos incluir esta causal también entre las que se encuentra en la destitución del Presidente, facultades del Congreso. Además, pocos han hecho referencia y me parece que es un tema muy importante en este debate, el del Consejo de Estado. Voy a insistir en lo que expresé ya en este Pleno cuando debatíamos la estructura propuesta para la Constitución, el índice de la Constitución. Me mantengo, señor Presidente y colegas, en que la relación entre los poderes en una democracia, no es una relación de armonía y cooperación. Es una relación de vigilancia. Por supuesto que de corresponsabilidad, pero también de generar factores de pesos y contrapesos. La figura del

Consejo de Estado en donde todos los poderes del Estado colaboran y cooperan cntre sí, todavía me suena muy extraña. Tiene completo sentido que el Ejecutivo y el Legislativo coordinen sus acciones, pues se establecen como colegisladores, se le da la facultad de colegislar al Ejecutivo cuando puede sancionar o vetar leyes y también cuando tienen iniciativa para presentar esas leyes. Pero más allá de eso, por ejemplo, en procura de la independencia de la Función Judicial, me parece no solo innecesario sino contraproducente que haya un mecanismo de cooperación entre csos poderes, cuya separación debe estar claramente establecida para lograr los contrapesos necesarios. Creo que hay que buscar un mecanismo institucional transparente que procese la relación Ejecutivo-legislativo que ha sido satanizada durante tantos años en el Ecuador. Lo hemos propuesto y lo vamos a insistir por escrito una figura, por ejemplo, como la de un Ministro Coordinador, puede ser una figura interesante. Pero nos parece que nos parece que es un despropósito que todos los poderes coordinen entre si, sobre todo, si se establece que ese Consejo de Estado es superior. Creo que en el peor de los casos, si la Mesa insiste en mantener la figura del Consejo de Estado, deberían eliminar eso de órgano superior de coordinación. Al menos, si es que existe este Consejo de Estado, no puede ser superior, los poderes constituyentes tienen una jerarquía igual y equivalente entre si y ningún Consejo aunque ellos lo integren, puede ser superior a esos poderes. Creo que eso es muy importante y que todavia tenemos que trabajar en lo que la Mesa hoy nos propone como el Consejo de Estado. Finalmente, señor Presidente, el diseño institucional, la ingenieria constitucional, no cambia todo por si sola. Pero al menos debemos asegurarnos de crear los incentivos correctos. De la calidad de los representantes y de escoger a los representantes correctos, se encargará la ciudadanía y debemos confiar en la ciudadanía y en la democracia. Y esa representación y la calidad de la representación,

señor Presidente, no tiene que ver con la edad y por eso celebro y felicito la decisión de la Mesa, de reconocer el derecho político de elegir y ser elegido con la mayoría de edad, porque eso es simplemente una parte de los derechos políticos. Insisto, la calidad de los representantes la va a definir la ciudadanía y si esa calidad fuera consecuencia directa de la edad, señor Presidente, otra sería nuestra historia. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Fernando Alarcón. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ALARCÓN FERNANDO. Gracias, señor Presidente. Compañeros, compañeras asambleístas: Como parte integrante de la Mesa número tres, de Estructura e Instituciones del Estado, hubiera también querido tener mayor conocimiento para debatir cada uno de los articulados propuestos refcrcntes a la Función Legislativa. Pero a diferencia de las nueve mesas que están legalmente conformadas aqui en el Pleno de la Asamblea, la nuestra, señor Presidcnte, marca una excepción. Usted cuando se posesionó, señor Presidente, si me atiende, manifestaba que va a hacer cumplir la ley, el reglamento y las disposiciones ejercidas internamente en la Asamblea. Pero, ha transcurrido el tiempo y no veo que nada de eso se ha hecho aqui, internamente. Quisiera pedirle al compañero Presidente de la Mesa número tres, a Gustavo Darquea, a sus miembros, que manifiesten aquí plenamente, aquí donde se debate, señor Presidente, cuáles fueron los mecanismos para que nos dejaran a un lado y no nos invitaron a estructurar cada uno de estos artículos en cada una de las funciones que han presentado para que en esta tarde y en este día sean conocidos por el Pleno. Se ha discutido sobre la función Legislativa, la función pública, el estado de excepción, Fuerzas Armadas, Policía Civil Nacional, carácter del Estado, el Consejo de Estado, Procuraduría

General del Estado, Consejo Nacional para la Igualdad y sobre la Corte Constitucional. Sí, señores asambleístas, en este día se van a conocer más allá de setenta y tres artículos que en tan solo tres días con puertas cerradas, sin permitirnos que los integrantes de la Mesa número tres aportemos de la manera como lo hemos hecho desde que se instalara la Asamblea. Quizá, señor Presidente, sea el motivo porque el partido al que pertenezco, entregara ya un insumo en las cuales ahí traían las propuestas que hoy día estamos debatiendo. Presidente de la Mesa número tres, ingeniero Gustavo Darquea, sí quiero pedirle de la manera más amigable, que nos invite a quienes el Pleno decidió ser parte de la Mesa, a conformar y a debatir a puertas abiertas y no invitar a los representantes del Gobierno, a que den haciendo el articulado, como sucedió con el doctor Patricio Pazmiño, Director o Presidente del Tribunal Constitucional. En todas las constituciones del mundo, en los países democráticamente organizados, se organiza pero se organiza bien, señor Presidente, todo lo relativo al funcionamiento del poder Legislativo. Contrariamente aquí existe un proyecto de articulado presentado por el Mesa número tres, en donde nosotros, los que somos parte de la minoría, hemos presentado y se ha leído por medio de Secretaría, nuestra Informe de Minoría como constantemente lo venimos presentando, señor Presidente. Se ha cambiado la denominación de la Función Legislativa, de Congreso Nacional a Asamblea Nacional, con el argumento del desprestigio, lamentablemente, alcanzado por el Congreso. A mi entender, señor Presidente, tanto o mayor desprestigio tiene en la actualidad la Asamblea Nacional que el Congreso Nacional, por una serie de anomalías que día a día, quienes somos parte de la oposición, venimos denunciando a través de los medios de comunicación y cubriendo los espacios necesarios para dejar entrever nuestra disconformidad, señor Presidente. El Congreso Nacional, en mi opinión, con la diferencia, el

primero necesitó treinta años para llegar a este estado de cosas, señor Presidente; y la Asamblea en tan poco siete meses está sumida en un desprestigio total. El pueblo ecuatoriano, todos los días nos viene juzgando. Ser honesto y actuar dentro de la honradez y la dignidad, siempre ha sido mi proceder, señor Presidente y compañeros asambleístas, porque lo demostré inicialmente con mi firma y luego con mi permanente posición que queda plasmada en el Informe de Minoría, en el que señalo que la Función Legislativa será ejercida por el Congreso Nacional, con sede en Montecristi, y en Manabí. Me ratifico plenamente, señor Presidente, en mi posición y que en el artículo número uno del proyecto, debe ser cambiado el inciso segundo, cuando se establece que la sede será Quito. Mi compromiso, mi adhesión, mi respeto para Manabí, por eso me he pronunciado que la sede sea en esta ciudad. Todavía existe tiempo, compañeros asambleístas, para rectificar criterios. Ojala todos aquellos que inicialmente tuvieron o estuvieron de acuerdo y la fortaleza para coadyuvar con su firma el respaldo y solidaridad para que en Manabí sea sede de la Asamblea, hoy en este día se arrepientan. Pero, lastimosamente, en el debate no se ha escuchado absolutamente a ningún compañero asambleísta de la oposición, rectificar o mantenerse en ese su criterio. El artículo doscientos setenta y dos de la Constitución Política del Estado, establece que "la norma jurídica prevalece sobre cualquier otra norma legal", me refiero a la Constitución Política del Estado que se encuentra en plena vigencia. Sin embargo, en varios articulados se expresa que lo dispuesto en la Constitución se aplicará de acuerdo con la ley, con lo que la Constitución pasa a la condición de subalterna respecto a las leyes secundarias. El artículo uno del Código Civil dice: "La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite". Todo en tiempo presente...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ALARCÓN FERNANDO. Gracias, señor Presidente. Que rige a la sociedad. Sin embargo, la Constitución que estamos construyendo, no recoge todas esas condiciones. Tengo observaciones en las que concuerdo con algunos de los compañeros asambleístas de este sector, que hemos construido y hemos aportado a cada uno de los articulados. En varios dc ellos estoy plenamente de acuerdo. Pero lo que más pido a usted, señor Presidente, a ustedcs compañeros asambleístas, quc se ratifiquen con que la sede de la Asamblea sea Manabí y que el artículo seis también sea cambiado con ese mismo propósito. El artículo dos del proyecto, señor Presidente, en su inciso *segundo*... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo terminó, asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ALARCÓN FERNANDO. Jamás estaré de acuerdo en que los jóvenes de dieciocho años puedan construir, hacer mejor una democracia. Gracias, compañero. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Como información para todos los asambleistas, las mesas y el Pleno tienen las mismas normas, por tanto, las sesiones se convocan con doce horas de anticipación, hay un Orden del Día, se aprueba el Orden del Día y el Orden del Dia no puede ser modificado, para información. Le doy la palabra, ya que fue aludido, al Presidente de la Mesa. Paro eso, solo dos minutos, señor Presidente. ----------

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO. Gracias, señor Presidente. Solamente un punto de información. Nuestra Mesa a través de

Secretaría, hace las convocatorias públicas a todas las reuniones y en el propio informe de la minoría está diciendo que el tema de la Función Legislativa se ha desarrollado en un total de catorce sesiones de la Mesa. Los propios señores de la minoría lo están diciendo. Así que, realmente, a confesión de parte relevo de prueba, señor Presidente. Y además, en muchas de las reuniones, a veces, la minoría solamente manda solamente a sus asesores para ver si estamos o no reunidos. Si no aportan con sus debates en este momento, realmente, nosotros no podemos recoger esos criterios. Y como prueba de eso están las actas de las sesiones que podemos entregarlas en cualquier momento, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Asambleísta Sara Paredes. ----------

LA ASAMBLEÍSTA PAREDES SARA. Gracias, señor Presidente. Qué inhumano tratar tanto y tantos artículos en esta sesión. Yo que soy miembro de la Mesa tres, me llama la atención ver tantos artículos que nos han mandado para tratar el día de hoy en una sola sesión en paquete. Me voy a referir a los primeros articulos, no sin antes invitar al señor Presidente de la Mesa número tres, que para corregir o mejorar este articulado se nos invite, que no pase lo que ya pasó, con Función Ejecutiva, que solamente fue una comisión la que mejoró el articulado. Estamos en contra del cambio de la denominación, un superficial cambio de nombre no implica una mejoría en la actividad del Congreso. Por el contrario, genera la expectativa de que se trata de un órgano diferente y en el fondo solo es lo mismo con una diferente denominación. Se dice que el nombre de Congreso está desprestigiado, pienso que el nombre de Asamblea también, señores, miren lo de fondo, lo verdaderamente de fondo. El pueblo se muere de hambre, el pueblo no tiene ya dónde vivir, el pueblo no goza de una buena salud y peor de

una buena educación. ¿Dónde están esos cuatro ingredientes que forman parte del buen vivir que ustedes tanto mencionan? De igual manera, también discrepamos del sistema unicameral, pues el bicameralismo es uno de los mecanismos de control del sistema político. Como si fuera poco, en el segundo inciso del artículo uno, dice que el Congreso se quedaría en Quito. ¿De qué descentralización estamos hablando, compañeros? Por qué se le miente a esta bella provincia, que la sede del Legislativo se va a quedar aquí. Reflexionemos, señores, yo trataré de hacer lo propio en mi Mesa, de que el Legislativo se quede aquí en Montecristi. En cuanto a los requisitos, pienso que precisamente la deficiencia de conocimientos especializados en el Congreso, es una de las causas de su pésimo funcionamiento. A los dieciocho años aún no es posible tener un título profesional, lo que origina un pésimo resultado del proceso legislativo. En cuanto a las atribuciones y deberes, en el numeral uno, estamos en contra si no se incluye la obligación del Presidente y del Vicepresidente de jurar respeto a la Constitución y a la ley. Así, el próximo Presidente que se posesione deberá jurar ante la Constitución y no como el actual que no lo hizo y por eso la irrespeta. En el numeral dos, en cuanto a lo que dice cesarle en sus funciones, señores, al Presidente no se lo cesa en sus funciones, se lo destituye del cargo. En cuanto al numeral cinco, la reforma constitucional es competente al Poder Constituyente y no a los órganos del Poder Constituido, precisamente ese fue el argumento para instalar esta Asamblea. Es casi ridículo que la revolución ciudadana sea la que proponga que la Constitución sea reformada por el Congreso y no mediante un nuevo ejercicio del Poder Constituyente. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Marcos Martínez. Asambleísta Iván Rodríguez. Asambleísta Mónica Chuji. ----------

LA ASAMBLEÍSTA CHUJI MÓNICA. Gracias, Presidente, muy buenas tardes. Tengo observaciones puntuales que realizar. En primer lugar, en lo que se refiere a la Asamblea Nacional, entiendo que así se va a llamar, ya no Congreso Nacional. Me parece que ahí, en el artículo primero debería definirse cuántos asambleístas o de cuántos asambleístas va a estar compuesta la Asamblea Nacional, de cuantas provincias, la población existente y respecto a los migrantes. Insisto, debería estar definida en uno de los primeros artículos. También deberían estar definidos los criterios; es decir, quienes no podrían ser asambleístas, pongo por ejemplo los religiosos, los militares en servicio activo, los presidentes de los bancos privados, por ejemplo, que podría creo yo que manejarse unos criterios respecto a aquello. Por otro lado, coincido con el asambleísta Abel Ávila, luego por uno de los asambleistas que manifiestan que el Congreso o que la Asamblea debe recuperar la posibilidad de la fiscalización respecto a los ministros de Estado; es decir, si es que hay un juicio político hacia un Ministro de Estado, éste debería ser destituido inmediatamente. No creo que si hasta el Presidente, como se ha dicho aquí, se le puede destituir, no pueda hacerse a un Ministro de Estado. Coincido con la asambleista Romo sobre el Consejo de Estado, creo que no se debería constitucionalizar una instancia de carácter administrativo y que tiene por finalidad una consulta y asesoramiento. No sé si se le quiere reemplazar por el COSENA, pero me parece que no debería ir en la Constitución, porque además, reafirmar que van a tener una relación armónica, lo cual no es realista, porque los poderes del Estado no se han venido desenvolviendo en ese sentido. Me parece que hay que aclarar aquello e insisto, no debería ir en la Constitución la creación de este Consejo de Estado. Con respecto a la administración pública, Presidente, yo quiero precisar una cosa. Hemos dicho, o al menos en el primer debate, se ha debatido aquí que el Ecuador va a ser un Estado

plurinacional, se reconoce a los pueblos y nacionalidades del Estado. Por tanto, creo que hay que empezar, entonces, en la reforma política que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, todo trámite en el administración pública, tenga un criterio de interculturalidad y esto, ¿qué implica aquello? que los idiomas, las costumbres e instituciones ancestrales tienen que ser respetadas. También significa el criterio, el principio de interculturalidad, significa que la información, que los trámites y las normas deben ser al menos, hechos en un idioma, es decir, en el Kichwa, porque se estaba proponiendo es en otros de los articulados. Yo creo que eso es fundamental dentro de la administración pública, porque sino una vez más queda en la teoría de que se pueda efectivizar la interculturalidad. También tengo una observación que la pasaré por escrito, respecto a la Corte Constitucional, que se le da tres atribuciones, la interpretación de la... Ah, perdón, es en la tarde. Pero bueno, tengo entonces esas tres observaciones que las haré pasar por escrito, Presidente. Gracias. -------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, asambleísta. Asambleísta César Rohón. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Gracias Presidente. Buenas tardes a todos y a todas. No hay dudad que queremos ir a galope, o mejor dicho que la mayoría quiere ir a galope para terminar esta tarea tan importante que nos dio el pueblo ecuatoriano, de hacer una nueva Constitución. Cuidado se tropieza el caballo y se cae el jinete. Cuidado terminamos aplastados en vez de terminar como se tiene que concluir un trabajo legislativo que demanda el pueblo ecuatoriano. Cuidado este sacrificar el debate por el apuro, termina con una Constitución que no resuelva los graves problemas del país y la razón principal que nos mandó el pueblo ecuatoriano, de hacer efectivamente una nueva

Constitución que permita la convivencia pacífica, política de los ecuatorianos, que permita la gobernabilidad del país. Todos favorecemos o favorecíamos antes de venir a esta Asamblea, la bicameralidad. Qué importante cambiar el sistema legislativo en el Ecuador, que haya un filtro para las leyes, para que las leyes que se hacen en el Congreso, tengan un filtro, para que las leyes de la República sean siempre mejores leyes. Y que también los legisladores tengan una vara más alta. Para que haya mayor calidad, para no sacrificar eso que demanda el pueblo ecuatoriano, calidad. Sin duda que a los dieciocho años podemos ser muy demócratas o muy participativos, como también lo somos dando el voto a los dieciséis años, pero no estamos, no estamos de ninguna manera priorizando la calidad y resulta que ahora, pues si vamos a tener esos niveles de exigencia muy bajos o muy democráticos, por decir lo menos, entonces sí tendría que dejar también mi ponencia tan importante de la bicameralidad, para decir sí, quedémonos nomás con el Congreso, con la unicameralidad, porque si vamos a elegir de esa manera un Congreso y un Senado, preferible es tener un solo Congreso que un Congreso y un Senado de esa manera y de esa estructura. Pero, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a hacer las cosas de manera diferente? Creo que esta es la oportunidad, cuando hay un proyecto del CONESUP, de una propuesta del propio Presidente de la República, que pide, que pide que se analice con seriedad la posibilidad de tener dos cámaras en la República. Y estoy de acuerdo, hay que devolverle al Congreso de la República todas sus facultades, principalmente la de la fiscalización, no puede ser el Congreso un pintado, justamente para terminar con el chantaje político que tanto daño le ha hecho al país. Está bien como se plantea, pero en lo que no estoy de acuerdo, sí estaría de acuerdo con esas juntas nominadoras para ejecutar y nombrar las ternas de superintendentes, de contralores, de procuradores, independientes de la

política y de los partidos políticos sin necesidad de crcar otra función del Estado, pero es el Congreso de la República el que tiene que nombrar a esos funcionarios y a esas ternas que vienen de los entes nominadores. Ese es un cambio fundamental que se tienc que dar en el país, justamente para la transparencia. Pero hay otros temas de fondo y cuando digo al galope tenemos que escoger dos, tres temas para poder comentar, pasaré un informe por escrito como lo suelo hacer, porque es la única manera de que nuestras propuestas queden sentadas y sean de base en este proceso constituyente. Me quiero referir a la Corte Constitucional, le vamos a cambiar de membrete únicamente...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, le hago ganar en su tiempo, eso está en la tarde, guárdese para la tarde. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. No me corte, Presidente, me quita la viada. Me reservo para la tarde. Presidente, porque ya es la hora del almuerzo y podemos terminar la reunión. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Luis Hernández. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS. Señor Presidente, voy a ser muy corto. Participo de la preocupación de realmente tratar de reducir la separación de poderes tan necesaria en una democracia y no encontrar realmente a través de eso un nuevo modelo de democracia, sino yo creo más bien una nueva forma de gobernar de acuerdo a las coyunturas y podríamos pasar del chantaje a la sumisión, lo cual sería mucho más censurable. El Legislativo no puede ser un invitado de la democracia, es parte sustancial de la democracia. Vean aquí, compañeros, como salimos a los corredores y la gente acude donde nosotros con quejas, con propuestas y es a través de nosotros, a través del Congreso.

Entonces, eso no puede ser limitado ni en su tarea legislativa y peor en su tarea fiscalizadora. Yo quisiera referirme a aspectos que ya lo han dicho, pero quisiera reforzar únicamente en cuanto a designar la cantidad de asambleistas que se necesita por cada circunscripción electoral. Igualmente, yo pediria que, recomiendo que en las atribuciones de la Asamblea esta el nombrar a los parlamentarios andinos. Los parlamentos, especialmente del Perú, me parece, designa a sus parlamentarios andinos de la Asamblea Nacional o del Congreso, eso nos evita que tengamos un excesivo gasto con parlamentarios que no están siempre en funciones y al mismo tiempo irían al Parlamento Andino, parlamentarios o asambleistas de la Asamblea que conocen la realidad politica de ese momento y al mismo tiempo vendrían con las ideas para reforzar la integración latinoamericana. En cuanto al Consejo de Estado, creo que se trata de suplantar al COSENA, pero no se logra realmente dar una función especifica y más bien como ya se ha mencionado, se subordina un poder al otro, lo cual es una contradicción con la separación de poderes, y es más, en el Consejo de Estado, por ejemplo, se pone a la cabeza de la Función Electoral, qué tiene que ver la Función Electoral si es una función que se desempeña muy periódicamente, entonces, creo que ese tema hay que repensarlo. Yo más bien creo que el Consejo de Seguridad Nacional ha sido el organismo en que se permite formular especialmente políticas de seguridad. Y los otros aspectos, realmente, no puede ser el Consejo de Estado un organismo que permita únicamente que sea una comisión de relaciones humanas, una comisión de relaciones humanas que muchas veces *ni siquiera va a poder practicarla en la realidad*, porque siempre va a haber la tensión natural entre el Legislativo y Ejecutivo, porque esa es parte de la democracia; lógicamente una tensión responsable que no salte la línea de la intolerancia. Esos eran los aspectos más importantes que tenía por expresar, señor

Presidente. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. El asambleísta Andrés Pavón. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PAVÓN ANDRÉS. Muchas gracias, señor Presidente. Creo que ha pasado mucho tiempo y ya era hora de que se nos de la palabra. Voy a comenzar y voy a ser muy puntual con respecto al artículo uno, en el cual nuevamente se ha vuelto a mentirle al país, y que pena, porque hubo un ofrecimiento de hacer un Congreso bicameral, de una Cámara Alta y una Cámara Baja que haría muy bien a nuestro país, ya que empezaríamos a tener leyes de calidad, ya que entre las dos Cámaras se empezarían a pulir y a sacar leyes debatidas profundamente, y evitaríamos de manera definitiva el conflicto que siempre ha existido entre la Función Ejecutiva y la Función Legislativa. Esperemos que se pueda rever por parte de la mayoría gobiernista en pensar en hacer dos Cámaras, una de senadores y otra de diputados. Y también para poder aprovechar estas instalaciones que tanto le ha costado al pueblo ecuatoriano. Con respecto al artículo dos, quisiera citar el tema de la edad, que existe una contradicción con un articulado que ya se debatió aquí en esta Asamblea, en el tema de los derechos civiles, donde se establecía completamente la edad, que era de veinte años para poder tener una dignidad aparte de lo que son representantes de juntas parroquiales. Entonces, no corramos en el articulado, sino que hagamos coherentemente con lo que dicen también las otras Mesas o los artículos que ya se han aprobado, para no estar manifestándoles que se sigue atropellando y que se sigue mandando en paquetes los artículos de esta nueva Carta Política. Con respecto al artículo tres, inciso primero, se debería manifestar también que el Congreso Nacional tendrá las atribuciones, aparte de posesionar al Presidente y Vicepresidente de la República, también tomarle juramento, porque

tiene que jurar tanto el Presidente como el Vicepresidente de la República que van a respetar esta nueva Carta Política, que de aprobarse, se estaría juramentando a esta nueva Constitución o sino con la Constitución que esté vigente en ese momento. También en el inciso segundo, no veo procedente y ya lo había manifestado en el anterior debate, que no se puede dar la facultad al Congreso Nacional que ellos puedan ser médicos o tener la capacidad de declarar incapaces mentales al Presidente o Vicepresidente de la República, porque para eso hay las personas respectivas, como son los médicos legistas y como son los sicólogos, que son los únicos que pueden determinar su incapacidad física o su incapacidad mental. Del mismo artículo, el inciso nueve, por favor, si le pueden poner para que el pueblo ecuatoriano pueda leer y sepa expresamente lo que se está manifestando. Aquí también aparte del tema de la fiscalización de los actos de la Función Ejecutiva, se debe dar también la capacidad de fiscalización para las otras funciones del Estado. Recordemos que en esta Carta Política se están creando otras funciones del Estado como la Función Electoral, como la Función de Control Social, que también deberían ser parte de la legislación del nuevo Congreso Nacional o nueva Asamblea Nacional. Y por cierto, no es necesario solo el hecho de cambiar el nombre del Congreso Nacional sino también es el fondo que se debe cambiar. Con respecto al inciso nueve, de posesionar al Procurador General del Estado, aquí también se debería tener en cuenta la capacidad fiscalizadora de no solo fiscalizar el tema del Congreso Nacional al Procurador General del Estado o al Contralor, se debe dar también la capacidad a las otras funciones como ya lo manifesté en el inciso nueve del mismo artículo. Con respecto al artículo cuatro, aquí deberíamos aplicar algo en lo cual ya se aplicó en esta Asamblea Nacional Constituyente, de la elección del Presidente y Vicepresidente. Si decimos que queremos cambiar la política del país,

queremos cambiar completamente las instituciones que tanto daño han hecho a nuestro Ecuador, deberíamos empezar haciendo como hizo esta Asamblea, con la designación del Presidente y Vicepresidente, porque ahí podemos darle la facultad al pueblo ecuatoriano de que elija al más votado para que sea Presidente y el segundo votado sea Vicepresidente, porque sino se seguirá haciendo como ya se ha venido dando en los anteriores congresos, de mandar las ternas o de escoger de los bloques de mayoría que conforman en ese momento y seguiremos viviendo las mismas prácticas políticas de los anteriores Congresos Nacionales. Ahora, la propuesta en sí, sería que el Asambleista Nacional más votado sea el Presidente y el segundo sea el Vicepresidente. Con respecto al artículo cinco, aquí se debería incluir la representación de las minorías que es súper importante también, para que las minorías tengan voz dentro del Congreso Nacional y sean también parte de este Consejo Administrativo de la Legislación, porque aquí no contempla en el artículo número cinco. Y, en el artículo trece, sí quisiera que la mayoría del bloque gobiernista pueda tomar en cuenta porque es súper importante y sería un bastión completamente para que ustedes puedan hacer parte en esta nueva Carta Política de este proceso de transformación. En el artículo trece se debería incluir el tema del mandato imperativo, si es que ustedes no saben cuál es el mandato imperativo; el mandato imperativo establecía en la Constitución del cuarenta y cinco, que no se podrá recibir órdenes por parte de los dueños de partidos o parte de los caciques, así como se dice que la actual Asamblea Constituyente está recibiendo órdenes del nuevo cacique del país como es el presidente Correa. Para que no exista eso, deberíamos nosotros poner como numeral ocho, no podrán someterse a mandatos imperativos, porque de esa forma estaríamos cortando completamente el caciquismo de los dueños de los partidos políticos y podrán tener los asambleístas o legisladores la facultad y potestad de

poder decidir en forma individual el destino del país. En el artículo catorce, comparto con algunos compañeros que habían manifestado, en el inciso tercero, por favor si le pueden poner en el ploter, de llamamiento a juicio por delito reprimido con reclusión, aquí no está contemplando la presunción de inocencia; entonces, se debería eliminar completamente el llamamiento a juicio por delito reprimido con reclusión, porque la presunción de inocencia es súper importante que debe establecer este artículo, así como también en la parte última que manifiesta en los casos que no se encuentran relacionados con el ejercicio de sus funciones no se requerirá autorización de la Asamblea Nacional para iniciar causa penal en su contra". Aquí no se establece quien califica o decide, por qué se deja a la libre interpretación, deberíamos definir y el bloque gobiernista debería definir completamente, quién es el que califica o quién es la persona que autoriza a la Asamblea Nacional para iniciar una causa penal en contra de cualquier Asambleísta o Legislador. Entonces, por premura del tiempo y le agradezco por haberme dado por lo menos cinco minutos, pero es muy difícil...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Ha hablado hasta este rato nueve minutos.---

EL ASAMBLEÍSTA PAVÓN ANDRÉS. Muchas gracias, señor Presidente, y con esto voy a concluir, que también por hacer al apuro los artículos se está estableciendo en la parte última del artículo dieciséis que no debería decir "juez", sino debería decir "fiscal competente". Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Ricardo Zambrano. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO RICARDO. Señor Presidente, estimados

y estimadas asambleístas, ecuatorianos, ecuatorianas: En mil ochocientos treinta, élites de familias de nuestra capital, capital de todos los ecuatorianos, lograron separar al Ecuador de Colombia y encargar el mando provisional de la nación al general Juan José Flores, quien convocó a la primera Asamblea Constituyente del país, que reunida en Riobamba expidió la primera Constitución del nuevo Estado del Ecuador el once de septiembre de mil ochocientos treinta. Cuánto tiempo y esfuerzo desde entonces nos ha costado como República el ir rompiendo esas trabas políticas consagradas en los primeros textos constitucionales y ahí radica en gran medida el porqué de tanta Constitución, porque cada una de esas Constituciones refleja estrictamente esa estructura poscolonial con que nació la República del Ecuador, *una estructura donde siguieron existiendo durante* largo tiempo, inclusive agravadas, las mismas realidades de la época colonial. No obstante, hoy en día hemos eliminado muchas de esas trabas en gran medida. Entre debates y discursos invocando a la unidad nacional por parte de quienes han estado representando nuestras provincias, se han dejado relegadas muchas aspiraciones políticas de la periferia. En Ecuador, la división de poderes del Estado en Legislativo, Ejecutivo y Judicial formulada por Montesquieu en mil setecientos cuarenta y ocho en su obra "El espíritu de las leyes", ha tenido desde su creación como República una sola ciudad como sede de los órganos públicos que los representan. No quiero provincializar el tema de la sede Legislativa, sino más bien identificar los pesos y contrapesos de mantener todos los órganos públicos que representan los poderes del Estado en una sola ciudad. Son varios los motivos o factores que justifican que la sede de estos órganos públicos no deban establecerse en una sola ciudad; sin embargo, a mi juicio, existen cuatro que fundamentan mi argumentación, estos son: Primero, factor político. En el Ecuador existe una bipolaridad política y económica que ha generado una

concentración de poder en las dos grandes urbes del país a costa de una periferia que se empobrece y que exacerba cada día más las diferencias regionales y promueve una emigración hacia dichas urbes. La nueva estructura política del Estado debe ser descentralizada hacia la periferia y vinculada a una lógica que permita generar y distribuir riqueza en diferentes ciudades del país. El cambio de los órganos públicos que representan al Estado a nuevos puntos geográficos, produce un efecto multiplicador en la cadena productiva del área que los acoja. Sin embargo, es justo reconocer que el cambio de sede de los órganos públicos que representan los poderes del Estado debe responder a una voluntad política, sociabilizada con todos los ecuatorianos. Segundo, factor de seguridad. Los futuros representantes del Congreso Nacional o Asamblea Nacional deben formular la ley y la legislación ecuatoriana en un contorno territorial seguro, que disminuya las vulnerabilidades y riesgos a que están expuestos los órganos públicos del Estado, que hoy en día están concentrados en una sola ciudad o ya olvidamos cuántos regímenes democráticos en el Ecuador han llegado a su fin, habiendo sido justificada su terminación en los levantamientos ciudadanos alrededor de los órganos públicos que representan los poderes del Estado. Tercero, factor económico. El establecimiento de los órganos públicos que representan los poderes del Estado en varias ciudades propende a distribuir el Presupuesto General del Estado de manera más equitativa y justa. El poder político directa o indirectamente genera crecimiento económico. Se calcula que alrededor de veinticinco millones de dólares ha sido el gasto realizado en el área comprendida entre Montecristi y Manta como resultado del funcionamiento de la Asamblea Constituyente en dicho territorio, asi lo dice el semanario "Líderes" de la semana anterior. Cuarto, un motivo práctico, yo le diría disuasivo si se quiere. No es novedad que muchos de los representantes de la Función Legislativa realizan un peregrinaje

por los organismos e instituciones públicas del Estado, gestionando puestos y obras para sus respectivas provincias. Si bien es cierto que esta práctica se puede realizar a través de cualquier medio, desde cualquier lugar del país, no es menos cierto, que la concentración de organismos e instituciones públicas en una sola ciudad propende a dar lugar a este tipo de actividades. Una cosa, compañeros, es que seamos apicultores y otra cosa es que nos manden a comer la miel. Es imperativo que un pacto social pero no solo de una provincia, sino de todos los ecuatorianos, reforme a fondo el Estado centralizador, ineficiente, obeso y despilfarrador, para mediante un sistema de autonomías hacer posible una auténtica participación popular, una más justa distribución de la riqueza, una real aplicación de los mandatos constitucionales de rendición de cuentas y auditoría social, una mejor prestación de los servicios públicos y en resumen, el desarrollo social y geográficamente equilibrado que ha sido permanente aspiración de todos los ecuatorianos. La sede de la actual Asamblea Constituyente "Ciudad Alfaro" en Montecristi, es un punto geográfico que sin duda marca una ruptura a este esquema centralizador de los poderes del Estado, que a ratos expone a los regímenes democráticos a las externalidades que pueda sufrir una sola ciudad y que a mi manera de ver las cosas, dicho esquema constituye una de las viejas trabas de la estructura institucional del Estado consagradas en los textos constitucionales a lo largo de la vida republicana del Ecuador. Por tal motivo, tiene sustento proponer que sea éste lugar la sede de un futuro Congreso Nacional o Asamblea Nacional, según se lo denomine, en la medida en que el pueblo ecuatoriano así lo establezca. Para concluir mi argumentación, quiero tomar como base una frase de Dante en uno de los novísimos del hombre: "déjese aquí cuanto sea recelo, mátese aquí cuanto sea vileza y recójase aquí cuanto sea beneficioso para las provincias y para mi pais". Gracias, por permitirme el uso de la

palabra, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gissel Rosado. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROSADO GISSEL. Buenas tardes. Gracias, señor Presidente. Los más pobres del país, los que no han tenido acceso a una educación tal vez no entiendan lo que es Función Legislativa porque ellos solamente ven lo que pasa alrededor de sus ojos, entonces, me quiero referir por esta ocasión a los que entienden del tema y a los que no entienden del tema. El Presidente de la República cesó el Congreso porque no lo dejaba trabajar. Yo quiero preguntarle al señor Presidente ¿si ha disminuido la pobreza en el país? no ha disminuido la pobreza en el país. Siete meses sin Congreso, ¿han creado plazas de trabajo? no se han creado plazas de trabajo. Entonces, es momento, señor Presidente, de que la culpa no es del Congreso solamente, sino también de la falta de ejecución y de la falta de que usted no ha cumplido lo que prometió en campaña. Lo que ha conseguido en este lapso de tiempo este Poder Ejecutivo es crear más burocracia, formar un buró político y ser juez y parte de todas las acciones. Como usted manifestaba, que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo y rechazo sus palabras, señor Presidente, que la minoría es un estorbo, no me considero un estorbo ni a mis compañeros tampoco les considero de esa manera, por tal cosa rechazo sus palabras. Me voy a referir al artículo número uno, voy a ser muy breve porque tengo cinco minutos. Tiene que ser bicameral la Asamblea Nacional y también tiene que ser en Montecristi porque fue una propuesta de ustedes, en la cual la mayoría de todos los que estamos presentes apoyamos. En el artículo número tres, en el inciso número nueve, me ayudan con la pantalla. "Fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva y solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que consideren necesarias". Quiero saber solamente si se

va a fiscalizar la Función Ejecutiva, quién va a fiscalizar la Función Electoral y la Función de Control. Aquí, tal vez el Presidente de la República para seguir siendo juez y parte de las cosas, que se ponga bien en claro eso. Y aparte también, debería ser atribución de la Asamblea Nacional la destitución previo juicio político a los ministros de Estado. Por otra parte, me voy a ir al artículo número cuatro, donde se establece elegir a los vicepresidentes; creo que el Segundo Vicepresidente debe formar parte de las minorías, porque al poner a alguien en la mesa directiva de las minorías, estarían reconociendo también a los más de dos millones de votos que nosotros como minoría representamos. El artículo número trece, ya había comentado mi compañero Andrés Pavón, sobre el mandato imperativo, esta doctrina de mandato imperativo. Muchas de ustedes, nos hemos dado cuenta que se han tenido que manejar bajo las decisiones de un líder o de un buró político, creo que a algunos de ustedes se les ha cortado su libertad de expresión y manifiesto de ello es Rosanna Queirolo y Diana Acosta que no se dejaron manejar por ese buró político, decidieron retirarse de su línea partidista, eso está a la vista. En el artículo catorce, en el penúltimo párrafo, quiero saber quién califica, quién dice que sí y quién dice que no en estos casos, porque ahí simplemente hablan de que la Asamblea no se requerirá de su autorización pero entonces, ¿quién lo va a hacer? De una vez que se deje claro en esta nueva Constitución. Ahora sí voy a hablarle al pueblo, al que tal vez no entiende lo que es la Función Legislativa en el artículo número quince. "Del control político y del control de la acción del Gobierno. –Dice- La Asamblea Nacional tiene la facultad de proceder a la destitución del Presidente de la República en los siguientes casos", ahí están para que los lean, se debe también poner un numeral más para que el Presidente de la República no se burle del pueblo ecuatoriano y para que el Presidente de la República empiece a cumplir con lo ofrecido y se debe

decir: "Por incumplimiento de su programa de Gobierno", también debe ser una causal para que el Presidente de la República sea destituido. Voy a completar el enunciado que propongo: "Por incumplimiento de su programa de gobierno o negligencia manifiesta, calificada por la Asamblea luego del informe anual recibido del Presidente de la República". Porque ahora el Presidente de la República si no se pone este numeral que estoy proponiendo, va a seguirle mintiendo, ¿dónde están señor Presidente, las doscientas mil viviendas que usted prometió? no se ha cumplido. ¿Dónde están las plazas de trabajo que usted prometió? no se han cumplido. Mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar el agro, incentivar el agro; ¿lo ha hecho? Sobre todo el agro, a medias; las fuentes de trabajo no ha cumplido en absoluto, las viviendas ni siquiera el cinco por ciento ha cumplido. Entonces, esto también tendría que ser causal de destitución, para que empiecen de una vez a no burlarse del pueblo ecuatoriano. Por último, en la página quince. "Organización del poder. Capítulo ocho. Consejo del Estado" No se por qué se tiene que formar un órgano superior aquí y convertir al Estado, al Ejecutivo en juez y parte de las cosas, esto está demás. Creo que nosotros necesitamos que cada una de las funciones tenga autonomía, aquí se está haciendo, porque el Presidente va a dirigir este órgano. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿más burocracia?, ¿un estado totalitario? Estoy en desacuerdo de este capítulo número ocho del Consejo del Estado. Señor Presidente, cumpla con el pueblo ecuatoriano. Y ustedes no le den tanta potestad al Presidente, porque el Presidente no es perfecto, se puede equivocar y quiénes pagan los platos rotos, el pueblo ecuatoriano. Entonces, no debe ser juez y parte. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Héctor Gómez. ----------

EL ASAMBLEÍSTA GÓMEZ HÉCTOR. Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras asambleístas: Sin lugar a dudas, la Función Ejecutiva, Electoral, Judicial, de Transparencia y de control social y la Legislativa tienen nombres importantísimos de acuerdo con el referente del contenido, aunque a veces no se lo cumple exactamente. Sin embargo, y en honor al tiempo, seré breve. Hoy se desea ponerle el nombre a la Función Legislativa de Asamblea Nacional y nada más. No estoy de acuerdo con eso, porque Asamblea Nacional no dice nada, aunque a veces el contenido no dice lo del nombre y el nombre tampoco dice lo del contenido. Pero, por lo menos nosotros, tenemos que hacer coincidir que el nombre diga mucho del contenido, si no se quiere dejarlo como Congreso Nacional, tenemos razón, muchas historias tristes nos ha dejado ese nombre, ese concepto, ese criterio. A lo mejor sería bueno poner Asamblea Nacional Legislativa, para saber de qué se trata, por lo menos. Con respecto a los criterios de descentralización y desconcentración, creo que el Estado debe dar ejemplo de esto, no solamente para los organismos seccionales, allá si se quiere desconcentrar, allá se quiere despolitizar, allá se quiere la descentralización, pero también en el Estado, por eso es que comparto la idea de que las funciones deben estar en algunas provincias importantes como Manabí y a lo mejor los ministerios también, no en vez de obras, sino a más de obras deben ir también los ministerios en forma alternada, porque con eso, las provincias relegadas tendrán más edificios, más carreteras, más turismo, más dinero. Creo que si es bueno también pensar en eso, que no solamente Quito, que se merece, por supuesto, tenga en su poder todas esas funciones, todos los ministerios y muchos organismos. Hay que darles la oportunidad a las provincias lejanas como Azuay, como Loja, como Esmeraldas, para que tengan a su haber algunas de esas instituciones. Creo que eso es muy prudente. En el párrafo dos, en el artículo dos, perdón, en el mismo

artículo uno, párrafo dos, disculpen, ya está un poco tarde. Dice la última parte, "en cualquier ciudad". No creo que la Función Legislativa o Asamblea Nacional Legislativa tenga que ir a cualquier lugar, es un poco despectivo mandarle a la Función Legislativa a cualquier lugar del país, tiene que ser a una ciudad, a cualquier ciudad donde haya los requisitos básicos para que eso funcione, caso contrario, en cualquier lugar será difícil que funcione ahí o que sesione ahí esta Función. Con respecto al artículo dos, creo que los asambleístas nacionales no tienen fijado en un reglamento, en un estatuto, en un articulado la función. Qué diferencia hace un Asambleísta Nacional con respecto a un Asambleísta Provincial, hacemos lo mismo. En el Congreso se mantenía esa cuestión para que sean como cabezas de serie para las Mesas o para algunos organismos que se requieren a lo interno de lo legislativo. Creo que con referencia al artículo doce, en donde habla que todos son asambleístas nacionales, creo que se debe eliminar esa palabra. Con respecto al artículo cuatro, dice que "la Asamblea Nacional Legislativa llenará las vacantes", acabamos de crear en otra función la Comisión Seleccionadora. A mi criterio, ésta es la que debe proporcionar por lo menos una terna para que la Función Legislativa llene esas vacantes, caso contrario, no le veo mucha funcionalidad a esta Comisión Seleccionadora. En el artículo ocho, creo que no deben haber bancadas, vamos a seguir con el mismo problema, las bancadas hacen eso, las bancadas proponen otro y etcétera, etcétera, y vienen los repartos. Por lo menos, yo creo que a los que se desafilian luego de haber sido posesionados, creo que no se les debe dar lugar en estos lugares, porque entonces, ahí se les está ratificando que pueden hacer lo que quieran, en el momento que quieran con respecto a sus creencias ideológicas en cada uno de los partidos o movimientos. En el artículo dieciséis, añadir que en caso de que los ministros sean censurados, yo diría destituidos, la acción que provocó

aquella destitución debe quedar sin efecto, porque de lo contrario, el Ministro, el Presidente con decretos o lo que sea, deja poniendo el cadáver con las secuelas y se va, mientras tanto ya ese decreto quedó para malestar de todos los ecuatorianos. El Ministro, el Presidente y sus decretos deben ser abolidos definitivamente. Para concluir, señor Presidente, una ley ordinaria no debe estar bajo una ley secundaria, por eso es que en el artículo diecinueve en vez de decir un no simple, un no tibio, debe decir "en ningún caso" o sea una prohibición total. En el articulo veinte debe fundirse, fusionarse en un solo numeral el dos y el tres, porque está hablando casi dc lo mismo y de su circunscripción. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Cierro el debate de este tema, pueden pasar durante las próximas cuarenta y ocho horas por escrito todas las recomendaciones, sugerencias, críticas al articulado, suspendo la sesión hasta las cinco y treinta que reinstalaremos el Pleno. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Invitamos a los señores asambleístas al almuerzo. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA EN RECESO A LA SESIÓN CUANDO SON LAS CATORCE HORAS VEINTE MINUTOS. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, les invitamos a verificar que sus tarjetas estén insertas en sus curules. Señor Presidente, si tenemos quórum. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS DIECISIETE HORAS TREINTA MINUTOS. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Se reinstala la sesión, han sido registrados setenta y dos asambleístas que dan el quórum, continuamos el Orden del Día, señor Secretario. ----------

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. "3. Conocimiento del Informe de Mayoría presentado por la Mesa Constituyente 3, Estructura e Instituciones del Estado para el primer debate de los textos constitucionales referentes a: Organización del Poder, en la parte correspondiente a Administración Pública, Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, estado de excepción, instituciones de protección pública, (Fuerzas Armadas y Policía Civil Nacional) y Consejos Nacionales para la Igualdad. Hasta ahí el punto del Orden del Día, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Proceda con la lectura del informe. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Informe de Mayoría. Mesa N° 3, para primer debate del Pleno. Parte III. La organización del poder. Capítulo 7. De la Administración Pública. Fundamentación. La administración pública que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos de manera eficiente y eficaz, es fundamental para alcanzar el buen vivir y, por ende, el bienestar de la comunidad. En este sentido, es importante consagrar en la Constitución su misión fundamental de servicio a la colectividad y establecer sus principios rectores. Existe una profusa dispersión normativa en materia de recursos humanos y remuneraciones del sector público, lo que genera una preocupante distorsión caracterizada por una manifiesta desigualdad entre los servidores públicos y por una injustificada situación de privilegio en un reducido número de

instituciones del Estado, que abusando del concepto de autonomía, han generado una injusta situación de anarquía remunerativa que difiere ilegítimamente de la Remuneración Mensual Unificada, conculcándose así uno de los principios medulares del derecho social: "a igual trabajo, igual remuneración"; recordemos que para corregir esta situación, la Asamblea Constituyente tuvo que emitir los Mandatos 02 y 04. Por tanto, es necesario que la Constitución disponga que la nueva Ley Orgánica del Servicio Público norme el ingreso y promoción de los servidores públicos a través de concursos de méritos y oposición, un sistema de remuneraciones e indemnizaciones justa y equitativa, y defina además un organismo superior responsable de la rectoría en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público, sin excepciones. Ante la necesidad de disponer de una administración pública tecnificada y capacitada, e integrarlas a distintas escuelas, institutos y programas de formación existentes, incluyendo a las instituciones nacionales e internacionales que operan bajo acuerdos con el Estado, consideramos conveniente que el Estado organice el Sistema Nacional de Formación y Capacitación del Servicio Público. Presentamos el texto constitucional que contiene las propuestas necesarias para hacer efectivas las aspiraciones de cambio. Propuesta de articulado. Parte III. La organización del poder. Capítulo 7. De la administración pública. Sección Primera. De las instituciones del Estado. Artículo 1. Son instituciones del Estado: 1. Los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos.

Estos organismos y entidades integran el sector público. Artículo 2. Los dignatarios, magistrados, autoridades y servidores públicos, de las entidades del Estado, de sus organismos y sus dependencias no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley; y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución de los fines del Estado. No habrá dignatarios, magistrados, autoridades y servidores públicos exentos de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones. Sección Segunda. De la administración Pública. Sus principios y accesos. Artículo 3. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, con sometimiento a la Constitución y la ley. Artículo 4. El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se realizará mediante concurso de méritos y oposición, con excepción de los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción que determine la Ley Orgánica del Servicio Público. Su inobservancia producirá la destitución de la autoridad nominadora. Los obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo. Sección Tercera. De los servidores públicos, derechos, deberes y la profesionalización. Artículo 5. Los derechos de los servidores públicos son irrenunciables. La Ley Orgánica del Servicio Público definirá el organismo superior responsable de la rectoría en materia de recursos humanos y remuneraciones para el sector público y normará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración justa y equitativa, indemnización por supresión de puestos o por retiro voluntario para acogerse al derecho de jubilación, cesación de funciones y otros aspectos. Artículo 6. En el ejercicio del servicio público se prohíbe: 1. Desempeñar más de un cargo público

simultáneamente, con excepción de la docencia universitaria y en la medida en que no afecte la continuidad en la prestación del servicio. 2. El nepotismo. 3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 4. Las demás conductas que señale la ley. La violación de estos principios se sancionará en la forma y de conformidad al procedimiento establecido por la ley. Artículo 7. Los dignatarios, magistrados, autoridades y servidores públicos, deberán presentar, al inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización para que de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración patrimonial los miembros de la Fuerza Pública a su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos y a su retiro. Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilicito. La falta de la presentación de la declaración al término de las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito. Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública. Artículo 8. No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses o representen a terceros que los tuvieren en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas. Los dignatarios, magistrados, autoridades y servidores públicos deben abstenerse de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los organismos o entidad a los que presten sus servicios. Las autoridades públicas determinadas en la ley, una vez que hayan cesado en su cargo no podrán durante los siguientes dos años formar

parte del Directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o apoderados de personas jurídicas nacionales o extranjeras que celebren contratos con el Estado, para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual o ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. Artículo 9. Los dignatarios, magistrados, autoridades, funcionarios, servidores públicos y trabajadores de los organismos e instituciones del sector público son responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Los dignatarios, magistrados, autoridades, servidores públicos, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, están sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes son imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aún en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad. Artículo 10. Para garantizar la formación continua del servidor público el Estado organizará el Sistema Nacional de Formación y Capacitación del Servidor Público que estará integrado por todas las escuelas, institutos, academias, programas de formación o capacitación del sector público; además, por aquellas instituciones, nacionales o internacionales, que operan bajo acuerdos o convenios con el Estado cuya misión es la formación de recursos humanos. La Ley Orgánica del Servicio Público regulará el funcionamiento del sistema. Parte III. La organización del poder. Capítulo III. Garantías. Capítulo 6. Corte Constitucional. 1. Diagnóstico. El Tribunal Constitucional no ha logrado convertirse en el

órgano máximo de control en esta materia, debido a su naturaleza jurídica, integración y funciones establecidas en la Carta Constitucional vigente. Actualmente padece de los siguientes problemas: Primer *problema: Falta de reconocimiento de la supremacía constitucional.* No existe una regulación normativa adecuada de las garantías constitucionales. Las acciones previstas no han permitido el ejercicio y tutela eficaz de los derechos fundamentales. El actual sistema de control constitucional es mixto: Los jueces ordinarios, tribunales contenciosos y tribunales fiscales resuelven en primera instancia las *acciones constitucionales (control difuso)* y al Tribunal Constitucional (control concreto) solo llegan las causas en apelación. Los jueces ordinarios no poseen información suficiente ni específica que garantice la idónea interpretación y administración de justicia constitucional. La normativa legal es insuficiente, particularmente la Ley Orgánica de Control Constitucional, vigente desde 1997, con la que se sustancian *las causas constitucionales, es anterior a la actual Constitución, lo que* genera profundas distorsiones e inconsistencias tanto en lo sustantivo como en lo procesal. Segundo problema: Conformación de la instancia de control constitucional. La designación de magistrados del Tribunal Constitucional se basa en un sistema de representación política y corporativa que impide la independencia e imparcialidad de las *decisiones del tribunal. En la Constitución actual, el Congreso* Nacional, además de ser la entidad nominadora de la totalidad de sus integrantes, selecciona sus representantes, con lo cual los torna proclives a la influencia partidista, lo que en definitiva afecta la independencia de sus decisiones. Esta dependencia afecta también la actividad legislativa, puesto que impide que el Tribunal actúe *efectivamente como juez del legislador, es decir, que realice un efectivo* control sobre la constitucionalidad del proceso legislativo. La mayoría de las resoluciones emitidas por este Tribunal de inconstitucionalidad

simple, esto es: se limitan a declarar si una ley es inconstitucional o no. El Tribunal no utiliza la amplia gama de tipos de sentencias que la doctrina constitucional moderna ha desarrollado. Tercer problema: Ambigua naturaleza jurídica de las decisiones y atribuciones del Tribunal Constitucional. Actualmente la justicia constitucional que se imparte a través del Tribunal no posibilita el tratamiento sistemático de los fallos, no existe un conjunto de principios que sustenten la interpretación constitucional ni precedentes jurisprudenciales, lo cual genera inseguridad jurídica y falta de predictibilidad en las decisiones del Tribunal. El Tribunal se pronuncia a través de resoluciones, no de sentencias. Esta debilidad inicial de la declaración, mina gravemente su fuerza obligatoria al momento de ejecutarla. 2. Objetivos del cambio. 1. Garantizar la supremacía de la Constitución como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia, a través de una nueva formulación de las atribuciones de la Corte Constitucional; 2. Conformar la Corte Constitucional como un sistema independiente, especializado, idóneo y probo, que garantice la tutela efectiva de los derechos fundamentales; y, 3. Establecer un sistema de designación de magistrados constitucionales con base en criterios de: méritos, idoneidad, probidad y formación. Fundamentación. El articulado da inicio a una de las partes más relevantes del texto constitucional, la supremacía constitucional, afirmación no solo valorativa, sino también material, del carácter de la Constitución como norma jurídica. Dicha supremacía se basa no solo en la formulación de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, sino que incide en el papel determinante de los derechos fundamentales, hasta el punto de que aquellos consagrados en los tratados internacionales que sean más favorables para los ciudadanos, se aplicarán con preferencia a los propios artículos constitucionales. Los artículos incorporan una relevante novedad: la necesidad de que las normas constitucionales se interpreten con la

voluntad del constituyente y su tenor literal, el resto del ordenamiento jurídico debe interpretarse de la forma que más beneficie al ciudadano. El articulado se inspira en los más importantes avances provenientes de los sistemas constitucionales comparados y que han sido desarrollados en países donde el control constitucional ha servido para mantener a la Constitución en su plena vigencia, incorporando posiciones propias e innovadoras. Entre estos elementos se encuentra la amplitud de los recursos a todas aquellas personas que, particular o colectivamente, se sientan afectadas por una norma inconstitucional; los diferentes procedimientos de apelación a la Corte Constitucional para recuperar la vigencia de una Constitución que ha sido violada; la incorporación de la consulta del juez sobre la constitucionalidad de una norma, previamente a su aplicación, en caso de que tengan dudas acerca de su constitucionalidad. Se trata de mecanismos que abren las posibilidades a todos los ciudadanos así, como a las autoridades y, en particular, a los jueces, para vigilar el cumplimiento de la Constitución, y que son propios de las sociedades más democráticas. En los artículos se desarrolla uno de los órganos constitucionales claves en el nuevo diseño del control constitucional: la Corte Constitucional, formada por nueve magistrados legitimados directamente por aquellas Funciones del Estado que han sido objeto de dicha legitimidad. Las características de la composición de esta Corte, así como de su autonomía, están destinadas a garantizar la imparcialidad a la hora de tomar sus decisiones. El máximo intérprete de la Constitución debe ser un órgano que mantenga su autoridad y tenga la máxima capacidad y preparación. Poco útil sería una Corte Constitucional preparada pero a lo que no se le confieran las funciones necesarias para cumplir su papel. A este respecto, el articulado se preocupa en incorporar un amplio elenco de funciones para la Corte Constitucional, manifestaciones todas ellas de su condición de máximo intérprete de la

Constitución: desde la declaración de inconstitucionalidad de las normas, del ordenamiento jurídico, hasta la revisión de casos de violación de derechos fundamentales, pasando por la resolución de los conflictos de competencias, positivos o negativos, de los órganos constitucionales. Se incorporan, por otro lado, los dictámenes vinculantes en los casos en que el pronunciamiento de la Corte Constitucional sea necesaria para asegurar la constitucionalidad de determinados actos, como la ratificación de los tratados internacionales o la formulación de las consultas populares. Atribuciones todas ellas destinadas, en última instancia, a garantizar la vigencia de la Constitución y su presencia permanente e inmanente en el ordenamiento jurídico que lo legitima. Propuesta de articulado. Corte Constitucional. Título III. Garantías. Supremacía de la Constitución y control constitucional. Sección Primera. Supremacía de la Constitución. Artículo 1. La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico y sobre cualquier acto del poder público. Las normas y los actos que estén en contradicción con la Constitución serán nulas y en tal virtud, carecerán de valor y eficacia jurídica. Artículo 2. Todas las personas, autoridades e instituciones estarán sujetas a la Constitución. Los tribunales, jueces y autoridades públicas aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a los establecidos en la Constitución, en los casos sometidos a su conocimiento, aunque las partes no las invoquen expresamente. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la violación de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por estos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos. Artículo 3. Las normas constitucionales se interpretarán preferentemente en el sentido que más se ajuste a la voluntad del constituyente, expresada en

sus respaldos documentales, y al tenor literal del texto. Las normas del ordenamiento jurídico se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución y que más favorezca a la plena vigencia de los derechos fundamentales, sin que ninguna autoridad pueda exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución para el ejercicio de esos derechos. Artículo 4. Cuando un juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos siempre que establezcan derechos más favorables a los estipulados en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá la consulta a la Corte Constitucional, que deberá resolver sobre la constitucionalidad de la norma en un plazo de hasta cuarenta y cinco días. Sección Segunda. Del control Constitucional. Artículo 5. La Corte Constitucional es el órgano máximo de control e interpretación constitucional, así como de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Articulo 6. La Corte Constitucional gozará de autonomía administrativa y financiera. Una Ley Orgánica determinará su organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de sus atribuciones. Los magistrados de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No serán responsables civil, ni penalmente, por los pronunciamientos y fallos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Su destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes de esta Corte. El procedimiento, los requisitos y las causas se determinarán en su ley orgánica. Artículo 7. La Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados con sus respectivos suplentes que ejercerán sus funciones en plenario y en salas, de acuerdo con la ley. Los Magistrados desempeñarán sus funciones por un periodo de nueve anos, sin reelección inmediata y

serán renovados por tercios cada tres años. Artículo 8. Para ser designado Magistrado de la Corte Constitucional se requiere: 1. Ser ecuatoriano; 2. Encontrarse en el ejercicio de los derechos políticos; 3. Tener título de Doctor en Jurisprudencia o de Abogado; y, 4. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años. Artículo 9. La designación de los magistrados que conforman la Corte Constitucional será realizada por una comisión seleccionadora que estará integrada por dos delegados designados por cada una de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y de Control Social. La selección de los magistrados se realizara con base en un concurso público de meritos y oposición, con escrutinio público y posibilidad de impugnación ciudadana, y para lo cual se procurará garantizar condiciones de equidad de género. Artículo 10. La Corte Constitucional elegirá de entre sus miembros, a un Presidente y a un Vicepresidente quienes se desempeñarán en el ejercicio de sus funciones durante tres años, y no podrán ser reelegidos inmediatamente. Artículo 11. La Corte Constitucional ejerce las siguientes atribuciones: 1. Ser el máximo intérprete de la Constitución; sus decisiones tendrán carácter vinculante; 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades de las instituciones del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la nulidad del acto normativo impugnado; 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento, encuentre que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución, con el mismo efecto previsto en el numeral precedente; 4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de

inconstitucionalidad tendrá como efecto la anulación del acto administrativo; 5. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de Protección, Cumplimiento, Habeas Corpus, Habeas Data, Acceso a la Información Pública y demás procesos constitucionales y casos seleccionados por la Corte para su revisión, de acuerdo con la ley; 6. Conocer y resolver, a petición de parte, las sentencias, los autos u otras decisiones judiciales en firme, pronunciadas por la justicia ordinaria, cuando éstas violen el debido proceso u otros derechos fundamentales en los términos establecidos en la ley; 7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre órganos constitucionales; 8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales y garantías; 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias constitucionales en los términos previstos en la ley; 10. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por omisión, y proponer las medidas y los plazos necesarios para enmendarlas; y, 11. Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y la ley. Artículo 12. La Corte Constitucional tiene la facultad para emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos: 1. De los tratados, convenios, pactos, acuerdos y declaraciones internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional; 2. De las consultas populares; 3. De las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el Presidente de la República en el proceso de formación de las leyes; y, 4. Las demás que les confieran la Constitución y la ley. El dictamen de constitucionalidad se limitará a verificar que se hayan cumplido las condiciones para el procedimiento correspondiente. Artículo 13. Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadano individual o colectivamente, afectado por el acto recurrido. Articulo 14.

Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tienen el carácter de definitivos e inapelables. Parte III. La organización del poder. Capítulo 8. La Procuraduría. 1. Diagnóstico. Los dos grandes roles fundamentales de la Procuraduría General del Estado son la defensa de los intereses del Estado en la jurisdicción nacional e internacional y el control de legalidad de los actos y contratos de la administración pública. La institución ha desarrollado experiencia en la defensa de litigios internacionales, por lo que se debe considerar el asesoramiento jurídico en los procesos contractuales y especialmente en lo referente a la competencia y procedimientos de solución de conflictos. Es fundamental que la institución ejerza un control sobre la legalidad de los actos y contratos respecto del sector público y de las instituciones privadas que manejan recursos públicos, por lo que la institución debe prestar asesoría legal oportuna, a fin de garantizar procesos contractuales transparentes y ajustados a la ley, mediante la participación activa en la claboración de los contratos nacionales e internacionales a efectos de evitar controversias y perjuicios a los intereses del Estado. En cuanto al tipo de organización, es fundamental mantener la autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, para que la institución consolide su independencia y se mantenga libre de influencia y manipulación política por presiones de grupos de poder. Respecto al proceso de la designación del Procurador General, al ser el Congreso el ente nominador a través de una terna enviada por el Presidente de la República, obligaba a que se formen acuerdos y compromisos políticos para conformar una mayoría que lo designe, por lo que dejaba de ser un proceso libre de injerencias políticas y partidistas. 2. Objetivos de cambio. 1. Patrocinar y salvaguardar los interese patrimoniales y jurisdiccionales del Estado en todos los procesos dentro y fuera del país, incluso en contratos, acuerdos y tratados internacionales. 2. Proponer una forma de designación del

Procurador General del Estado, que evite las interferencias y manipulaciones políticas. 3. Desarrollar las acciones de asesoramiento de la Procuraduría, en temas jurídicos, a las entidades del sector público. 4. Fortalecer las capacidades de control para la celebración de contratos públicos según lo establece la ley. 3. Fundamentación. Planteamos la necesidad de que la naturaleza jurídica de la Procuraduría sea de carácter autónomo en su organización administrativa, presupuestaria y financiera por cuanto para el cumplimiento de sus funciones debe actuar hacia todos los órganos del Estado. En lo que se refiere a la designación, creemos necesario plantear que se pueda equilibrar y armonizar la participación tanto de la Función de Transparencia y Control Social como del Presidente de la República, pero que responda a criterios de especialidad y meritos y sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana. La Procuraduría General del Estado debe ser fortalecida institucionalmente en sus funciones con el propósito de garantizar mejores controles sobre el desempeño de la administración pública. En esa perspectiva, sus funciones deben estar orientadas a controlar la legalidad en los contratos que suscriben las instituciones estatales y a ser orientados jurídicamente sobre la correcta aplicación de la norma legal mediante las consultas que son presentadas en Procuraduría. 4. Propuesta de texto constitucional. Parte III. La organización del poder. Capitulo 8. De la representación judicial del Estado. De la Procuraduría General del Estado. De la Naturaleza Jurídica de la Procuraduría General del Estado. Artículo 1. La Procuraduría General del Estado es un organismo técnico jurídico, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el Procurador General del Estado, designado para un período de cuatro años. Artículo 2. El Procurador General del Estado será nombrado por la Función de Transparencia y Control Social, de una terna que enviará el Presidente

de la República; la terna se conformará con criterios de especialidad y meritos y estará sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana. Quienes la conformen deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrados de la Corte Constitucional. Artículo 3. Corresponde al Procurador General del Estado: 1. Propender a la seguridad jurídica del Estado; 2. Patrocinar y representar judicialmente al Estado; 3. Brindar el asesoramiento jurídico a las consultas sobre la aplicación de la ley y legalidad de los contratos que suscriben los órganos del sector público; 4. Ejercer el control de legalidad; y, 5. Las demás funciones que determine la ley. Parte III. La organización del poder. Capítulo 3. Función Ejecutiva. Sección Quinta. Del Estado de Excepción. Fundamentación. Los estados de emergencia han sido objeto de arbitrariedades en contra de la población involucrada en ellos, generando abusos cuando se suspende sus derechos y cuando dichos estados de emergencia se prolongan injustificadamente. Por ello la denominación de "estados de excepción" no solo implica un cambio de nombre sino la definición de un marco normativo apegado a principios internacionales, con relación a necesidad, proporcionalidad, territorialidad, debiendo especificarse los derechos que se limitan y la forma cómo se los va a restringir. Se dispone que los únicos derechos que pueden restringirse son los de inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de expresión. Se establece la facultad de la Asamblea Nacional de revocar el estado de excepción y la Corte Constitucional de pronunciarse sobre su constitucionalidad. Finalmente se especifica que los funcionarios y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Propuesta de articulado. Parte III. La organización del poder. Capítulo 3. Función Ejecutiva. Sección Quinta. Del Estado de excepción. Artículo 1.

El presidente de la República tiene la facultad de decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él; en el caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, disturbio interno, grave calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpe las actividades de las Funciones del Estado. El estado de excepción deberá responder a los principios de necesidad, conexidad, proporcionalidad, temporalidad, territorialidad, razonabilidad, intangibilidad y controlabilidad; y el decreto que lo establezca contendrá la determinación de la causal y la motivación que justifica la situación excepcional, el ámbito territorial en el que se aplica, el periodo por el cual se implanta, las medidas proporcionales que autoriza, la especificación de los derechos que se limitan, la forma como se los restringe y la notificación a los órganos correspondientes. Artículo 2. Durante el estado de excepción el Presidente de la República puede adoptar disposiciones que, en estricta relación a las exigencias de la situación, suspendan o limiten el ejercicio de los siguientes derechos; Inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de expresión. La disposición precedente no autoriza disponer la expatriación ni el confinamiento de una persona fuera de las capitales de provincia o en una región distinta de aquella en que viva. Artículo 3. Declarado el estado de excepción, el Presidente de la República puede asumir las siguientes atribuciones o alguna de ellas: 1. Decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones. 2. Invertir para la defensa del Estado o para enfrentar la catástrofe, los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. 3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 4. Disponer censura previa a los medios de comunicación social con relación a los motivos del estado de excepción y la seguridad del Estado. 5. Establecer como zona de seguridad todo el

territorio nacional o parte de él, con sujeción a la ley. 6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Civil Nacional a través de los organismos correspondientes y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como de otras instituciones. 7. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, de acuerdo con la ley, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. 8. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Artículo 4. El Presidente de la República notificara la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la suscripción del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justificaren, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio de que sobre el efecto también se pronuncie la Corte Constitucional. El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. Si las causas que lo motivaron persistieren podrá ser renovado por otros treinta días, lo que será notificado a la Asamblea Nacional, y así sucesivamente. Caso contrario queda ipso jure terminado el estado de excepción. Cuando las causas que motivaron el estado de excepción hayan desaparecido, el Presidente de la República decretara su terminación y con el respectivo informe, notificara inmediatamente a la Asamblea Nacional. Los funcionarios y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. La ley regulara las facultades del Ejecutivo durante el estado de excepción y establecerá los controles y garantías para proteger los derechos de las personas. Las medidas que se adopten deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Parte III. La Organización del Poder. Capitulo 3. Función Ejecutiva. Sección sexta. De las instituciones de protección pública. Antecedentes. La Mesa Constituyente Tres de Estructura e Instituciones del Estado luego de

recabar propuestas de las instituciones involucradas, de procesar las que provinieron de la ciudadanía y demás elementos conceptuales relacionados a los temas de Fuerzas Armadas y Policía Civil Nacional, se procedió a construir los articulados respectivos. Fundamentación. Continuar considerando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como parte de la "fuerza pública" como lo establece la Constitución de 1998, privilegia la visión de un Estado represor, que asocia dos instituciones con misiones, estrategias y métodos de trabajo distintos. En el articulado sobre el carácter y elementos constitutivos del Estado, nuestra mesa propone que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar a sus habitantes el derecho a la paz y a la seguridad integral, por tanto la nueva concepción de las FFAA y la Policía Nacional debe definirse en función de este objetivo, frente a las amenazas de factores externos e internos respectivamente, en el marco del respeto a los derechos humanos. De ahí que el cambio del concepto de fuerza pública al de protección pública sea el primer paso fundamental. Es importante también redefinir la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, con el firme propósito de eliminar su rol de árbitro en los conflictos políticos, ya que no pueden ser los garantes del ordenamiento jurídico, como lo establece la Constitución de 1998, esto resulta un contrasentido para un Estado democrático cuya soberanía radica en el pueblo. Por ello se establece claramente que junto con la Policía Nacional, cumple su misión bajo la sujeción del poder civil democráticamcnte constituido y la Constitución Política del Estado. Se ha procedido a precisar el tema del fuero del personal de estas instituciones, manteniendo el concepto de la unidad jurisdiccional que ya fue definido en la Constitución del 98, aunque hasta ahora no ha podido hacerse realidad, dejando en claro que solamente las infracciones disciplinarias serán juzgadas por sus órganos competentes. Se establece también la necesidad de su democratización institucional,

garantizando su estabilidad y profesionalización, así como el acceso sin discriminación alguna de los y las jóvenes ecuatorianas a la carrera policial y militar, igualmente para efectos de promociones y ascensos tanto de la oficialidad como de la tropa. El servicio militar obligatorio se redefine como servicio "cívico-militar voluntario" que debe ir acompañado de capacitación para el trabajo y en el marco del respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Finalmente al referirse al rol de la Policía Nacional, se enfatiza en su carácter "civil", designándola como Policía Civil Nacional, como una institución técnica, profesional y altamente especializada, cuya misión fundamental es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad de las personas. Propuesta de articulado. Parte III. La organización del poder. Capítulo 3. Función Ejecutiva. Sección sexta. De las instituciones de protección pública. Artículo 1. Las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional son instituciones de protección pública. Respetan la dignidad y los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Sus miembros están formados bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos. Las autoridades de los órganos de protección pública son responsables por las órdenes que impartan; la obediencia de órdenes superiores no exime de responsabilidad a quienes las ejecutan en caso de violación de derechos garantizados en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes vigentes. Los miembros de los órganos de protección pública tienen las mismas obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, con las excepciones que establecen la Constitución y la ley. Artículo 2. Las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional son obedientes y no deliberantes; cumplen su misión bajo la sujeción del poder civil democráticamente constituido y la Constitución Política del Estado. Artículo 3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional serán juzgados por salas

especializadas de la Función Jurisdiccional en los casos de delitos cometidos dentro de su misión específica; el cometimiento de delitos comunes serán juzgados por la justicia ordinaria. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en las respectivas leyes orgánicas. Las conductas constitutivas de delitos considerados de lesa humanidad serán juzgadas por la justicia ordinaria. Artículo 4. Los y las aspirantes a la carrera militar o policial no serán discriminados para su ingreso por ninguna causa. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional están sujetos a las leyes específicas que regulan su sistema de ascensos, promociones, derechos y obligaciones, con criterios de equidad de género. Se garantiza su estabilidad y su profesionalización. No podrán ser privados de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos sino por las causas establecidas en dichas leyes; no podrán hacer uso de prerrogativas devenidas de sus grados sobre los derechos de los y las ciudadanas. Artículo 5. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la conservación de la paz, la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional. Podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo social comunitario. Las Fuerzas Armadas pueden organizar fuerzas de reserva, según las necesidades de la seguridad nacional. Artículo 6. El servicio cívico-militar es voluntario para los ecuatorianos, sin distinción de género, el mismo que es regulado por la Ley. Este se realizará en el marco del respeto a la diversidad y a los derechos humanos, acompañado de una capacitación alternativa en diversos campos ocupacionales que coadyuven al desarrollo individual y al bienestar de la sociedad. Se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso. Las personas que participan en este servicio no serán destinadas a áreas de conflicto militar o tareas de riesgo militar.

Artículo 7. La protección interna y la mantención del orden publico son funciones privativas del Estado y de responsabilidad exclusiva de la Policía Civil Nacional, institución estatal de carácter civil, técnica, profesional y altamente especializada, cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad de las personas dentro de todo el territorio nacional. Los miembros de la Policía Civil Nacional tienen una formación basada en los derechos humanos, la investigación especializada, la prevención del delito y el uso de medios de conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Civil Nacional coordinará con los diferentes niveles de gobiernos autónomos y descentralizados. Parte III. La Organización del poder. Capítulo 3. Función Ejecutiva. Sección Sexta. De los Consejos Sociales para la Igualdad. Diagnóstico: Dentro del amplio conjunto de órganos corporativos que existen actualmente en el Estado ecuatoriano, se ubican los Consejos Sociales, creados a lo largo de la década de los 90. Se trata de un conjunto de instituciones públicas encargadas de promover políticas estatales para la igualdad y la defensa de los derechos de específicos sectores sociales. Aunque la creación de los Consejos Sociales ha permitido que algunas organizaciones y movimientos puedan incidir en ciertos segmentos de la institucionalidad estatal, también han enfrentado problemas políticos y técnicos dentro de la estructura del poder ejecutivo, por ejemplo: Débil anclaje institucional y ambigüedad funcional: Pese al carácter autónomo de la gran mayoria de estos Consejos, sus líneas de coordinación con las demás agencias estatales (sobre todo ministerios) han sido difusas, no han tenido una funcionalidad específica y han duplicado funciones con otras agencias estatales (fundamentalmente ejecutores). Déficit de representatividad política de los delegados de las organizaciones sociales a sus directorios, convirtiéndose en entidades estatales cerradas a la participación de la gran mayoría de actores a

quienes dicen representar. Problemas para construir políticas universales: han tratado problemas universales (género, etnicidad, generación) como problemas particulares para sujetos específicos (mujeres, indígenas, afros, niños). No han logrado transversalizar sus enfoques en la estructura estatal, los enfoques de género, étnico, generacional no se han introducido en la agenda de políticas públicas tanto por su débil capacidad de coordinación con los Ministerios como por su poca capacidad para monitorear técnicamente las políticas públicas. Propuesta de reforma de los consejos: La propuesta de reforma de los Consejos Sociales para la Igualdad pretende mejorar el anclaje institucional de los Consejos en la estructura estatal, dotarles de una racionalidad en sus funciones y mantenerlos como órganos colegiados y cuya misión principal será la de procurar la igualdad sustantiva de las y los ecuatorianos atravesados por diferencias y discriminaciones de género, etnia, clase, discapacidad, generación y migración. Las funciones principales de los Consejos serán las de proponer, en coordinación con los ministerios, agendas de políticas públicas sobre las problemáticas a su cargo, y monitorear y dar seguimiento técnico a los avances de tales políticas en el resto de las instituciones estatales. Cada consejo estará compuesto por un directorio con, representantes del Estado y de la sociedad civil, (con tendencia paritaria), con una representación pluralista de la ciudadanía y las diversas organizaciones sociales, una dirección ejecutiva y una instancia de participación ciudadana a conformarse de acuerdo a las realidades de cada consejo. Funcionarán en directa articulación con el ente de planificación y con los Ministerios Sectoriales para la generación y la implementación de sus agendas. Consejos Nacionales para la Igualdad. Artículo 1. Los Consejos Nacionales para la Igualdad son cuerpos colegiados compuestos por representantes de la ciudadanía organizada y no

organizada y de la Función Ejecutiva; tienen por objetivo transversalizar en la agenda pública la política universal de las temáticas a su cargo: género, etario, étnico, trabajo, discapacidades y migrantes. Son parte de la Función Ejecutiva y sus funciones son las de proponer políticas públicas en la materia que le corresponda, monitorear y hacer seguimiento de sus avances. Coordinarán sus acciones con las entidades rectoras de la política pública según lo establezca la ley". Hasta ahí el articulado correspondiente e informe de mayoría correspondiente, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con las mismas características que esta mañana, hace pocos momentos integrantes de la Mesa entregaron un informe que no ha sido debatido en la Mesa. Pero, señor Secretario, para que tengamos esa otra opinión, por favor, lea el informe de minoría. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Informe de Minoría. Consejo de Estado. Sara Paredes de Villagómez, Fernando Alarcón Estupiñán, Julio Logroño Vivar y Leonardo Viteri Velasco, asambleístas integrantes de la Mesa 3, conforme a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de las Mesas Constituyentes en su artículo 20, que prescribe la forma cómo se presentará ante la Mesa un informe de minoría, indicamos lo siguiente: 1. El objeto. Los argumentos que en este documento expresamos, tienen por objeto dar a conocer nuestras observaciones a los textos constitucionales acerca del Consejo de Estado"... (Vacio de grabación)... Informamos a los señores asambleístas que el informe de minoría se refiere al Consejo de Estado. Este tema ya se lo trató en la mañana y se lo hará conocer directamente a la Mesa con las observaciones que todos ustedes tienen que presentar durante cuarenta y ocho horas después de transcurrido el primer debate. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra Germánico Ávila. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ÁVILA GERMÁNICO. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, señoras y señores asambleísta: Voy a referirme al título tercero, Garantías, al capítulo seis, Corte Constitucional. El pueblo ecuatoriano decidió transformar las estructuras caducas existentes en este país, apoyó un proyecto de transformación para construir una auténtica democracia basada en el respeto a las normas constitucionales, al orden jurídico, por eso es necesario la creación de una nueva estructura para la jurisdicción constitucional y garantizar su independencia, autonomía y plena eficacia en la realización de su función como el máximo guardián de la supremacía de la Constitución. La democracia para ser verdadera, requiere de ciertos atributos básicos, entre los cuales, el más importante es la sujeción del poder a la Constitución y al derecho. Los Estados modernos en su organización y funcionamiento, tienen un objetivo, el respeto a las normas constitucionales, por eso los controles tienen que ser eficientes y capaces de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución a fin de limitar el poder del propio Estado en beneficio de la ciudadanía y para preservar el bien común. El más trascendente de los controles del Estado es precisamente el control de la Constitucionalidad que debe ejercerla privativamente la Corte Constitucional, real y absolutamente independiente de las demás funciones del Estado. Esta particularidad responde a la evolución del Derecho Constitucional y a una exigencia de los pueblos, que miran en el control constitucional una verdadera garantía para que se respete el principio de la supremacía para fortalecer y garantizar la democracia y los derechos humanos plasmados en la Carta Política. En la actualidad, algunos sectores políticos quisieran que este control constitucional sea un control subordinado a otras funciones del Estado como la Corte

Suprema de Justicia, pero la ciudadanía, en su inmensa mayoría, al pronunciarse por la Asamblea Nacional Constituyente, se pronunció también por el cambio y lógicamente por la construcción de un nuevo Estado constitucional, democrático, con un control concentrado, autónomo, independiente, eficiente, oportuno en la administración constitucional. Este control constitucional determina la necesidad de la creación de una magistratura diferente, altamente especializada en la administración de la justicia constitucional que recurra a procedimientos propios, se la aplique de forma diversa a los procedimientos de la Función Judicial, a fin de permitir a los ciudadanos, sin discriminación de ninguna naturaleza, recurran a la justicia constitucional para reclamar la reparación o reposición de los derechos cuando han sido afectados, disminuidos o violentados por autoridad pública, por actos administrativos o actos emitidos por la Función Jurisdiccional con atribuciones para dictar sentencias vinculantes y obligatorias de última y definitiva instancia en el ejercicio de la administración de la justicia constitucional. El actual Tribunal Constitucional no ha podido transformarse en el máximo organismo de control, debido a su naturaleza jurídica, a su integración y funciones, porque la designación de magistrados se basó en un sistema de representación política y corporativa que impide la independencia e imparcialidad en sus decisiones. Porque los jueces ordinarios, los tribunales contenciosos, tribunales fiscales, conocen y resuelven en primera instancia las acciones constitucionales y al Tribunal Constitucional solo llegan las causas por apelación. En esta propuesta, la sección primera se refiere a la supremacía de la Constitución, normas que prevalecen sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y aquellas que estén en contradicción carecen de valor y eficiencia jurídica. Todas las personas, autoridades e instituciones se encuentran sujetas a la Constitución. Los tribunales, jueces y autoridades públicas

deben aplicar directamente la norma constitucional. La Corte Constitucional debe conocer las declaratorias de inaplicabilidad de normas y resolver con el carácter de general y obligatorio. La sección segunda se refiere al control constitucional. Proponemos la Corte Constitucional como el organismo máximo de control e interpretación constitucional, así como de administración de justicia con autonomía administrativa y financiera que esté integrada por nueve magistrados con sus respectivos suplentes, por nueve años sin reelección inmediata. Se establecen los requisitos para ser magistrados. La designación de los mismos se realizará por una comisión integrada por delegados de las diferentes funciones del Estado. La selección en base a un concurso público de méritos y oposición, escrutinio público y posibilidad de impugnación ciudadana y garantizar condiciones de equidad de género. Entre sus atribuciones, es importante resaltar el hecho de que tiene atribuciones y facultades, entre otras, para conocer y resolver a petición de parte las sentencias, los autos u otras decisiones judiciales en firme, pronunciados por la justicia ordinaria cuando éstas violen el debido proceso u otros derechos fundamentales. Las acciones conocidas como acciones de amparo, hoy las llamaremos acciones de protección. Estas acciones de protección pueden ser presentadas por cualquier ciudadano individual o colectivamente afectado. Las sentencias y autos de la Corte Constitucional son definitivos e inapelables. Señores y señoras asambleístas, esta propuesta que ponemos a consideración para el debate, ha sido discutida ampliamente, amplia y democráticamente por todos los miembros de la Mesa que hemos participado en las reuniones convocadas por el Presidente. Espero que esta propuesta sea apoyada, porque entre otras, es una aspiración del pueblo ecuatoriano que desea se fortalezca la democracia, garantice la eficiencia de la norma constitucional, de la justicia constitucional y aseguren los derechos fundamentales de los ciudadanos, y porque de esta manera estaremos

también respondiendo a la confianza que el pueblo ecuatoriano nos delegó en las urnas. Muchas gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, asambleísta. Asambleísta Wladimir Vargas. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VARGAS WLADIMIR. Gracias, señor Presidente. Compañeros asambleísta: Creo que, como se visualiza, es la forma correcta, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, a pesar de ser parte de la "Fuerza Pública", actualmente "instituciones de protección pública", se reconozcan misiones, estrategias y métodos de trabajo distinto, inclusive le agregaría escenarios diferentes y de ahí nace la naturaleza distinta de su razón de ser. Yo quiero hablar sobre el artículo cuatro, de instituciones de protección pública. Dice: "Los aspirantes a la carrera militar o policial no serán discriminados para su ingreso por ninguna causa", repito, "por ninguna causa". Es muy peligroso hacer este enunciado, señores. Cuando se apruebe esto, no se podrá exigir a las Fuerzas Armadas que cumplan con su deber primordial del Estado, que es justamente garantizar a sus habitantes el derecho de la paz, la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. No se puede atentar con lo que se está escribiendo y se pretende aprobar. Señores, en las Fuerzas Armadas existe un riguroso proceso de selección para garantizar que sus aspirantes y luego los profesionales militares tengan las mejores cualidades que las mismas exigencias de prepararse para la guerra existe. En el proceso de selección se exigen pasar pruebas de todo tipo, desde médicas, sicológicas, físicas, intelectuales. Apenas entre cuarenta y ciento cincuenta personas por promoción pasan las pruebas de ingreso y son seleccionados de miles de aspirantes que se presentan a las distintas fuerzas militares y Policía Nacional No estamos hablando de ser un

piloto comercial, no señores, no estamos hablando de un barco de pasajeros ni de un carro de transporte, estamos hablando de jets de combate de alta velocidad, con bombas, con misiles; estamos hablando de buques de guerra con armamento sofisticado, toneladas de municiones de toda clase, radiación de energía electromagnética por los equipos computarizados; altas presiones de calderas para alcanzar altas velocidades. Estamos hablando de tanques de guerra, de lanzamisiles y de inclusive combatir cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto le cuesta al Estado preparar un piloto, un submarinista, un artillero, etcétera? pero lo hace con hombres seleccionados para resistir ciertas exigencias quc son propias de la preparación para la guerra. Estamos viendo que, cuánto cuesta un avión al Estado, helicópteros, buques de guerra recién adquiridos. No se pueden aceptar personas que no reúnan ciertos criterios de selección necesarios, de toda índole, físicas, estatura, buena salud, buena visibilidad para los pilotos, que no tengan problemas con la columna para poder el infante de marina llevar un peso encima durante tantas horas y jornadas en condiciones extremas, etcétera, etcétera. Una persona que debe usar armamento con capacidades intelectuales para poder tomar decisiones adecuadas y para el desarrollo de una tecnología avanzada con referencia a las armas que cada día son más modernas y complicadas de operar. Se requiere de una alta moral, de condiciones físicas, sicológicas, culturales, médicas e intelectuales. El medio en que tendrá que entrenarse primero y aplicarlas después, demanda exigencias muy altas. Con este artículo no se podrá optar por esta opción o la óptima selección y peor, luego cumplir con el deber de garantizar la protección de nuestra soberanía. En este mismo artículo, en este mismo artículo cuatro: "las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que las leyes específicas regulan su sistema de ascenso, promociones, derechos y obligaciones con criterios de equidad de género". Señores, en las Fuerzas Armadas ya se ha hecho

un esfuerzo muy grande para poder aceptar mujeres, no solo en el área de servicio como relaciones públicas, finanzas, abogados, médicos, etcétera, sino en la línea de arma, en la línea de soldados entrenados para el combate; para esto se ha tenido que reconstruir, remodelar, modificar áreas y facilidades, y además cambiar muchas formas de operar en las Fuerzas Armadas, y eso lo aplaudo y lo aplauden las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y está bien y así debe ser, que se tenga la opción, aunque hubo y debe seguir adecuándose para recibir a las mujeres en el servicio, eso está perfecto. Pero ahora, una cosa es tener la opción de recibir mujeres y hombres, aunque ya sería exagerado hablar de equidad de sexo, no creo que haya unas Fuerzas Armadas con este criterio en el mundo, dar las mismas oportunidades es perfecto, pero equiparar el orgánico de las Fuerzas Armadas con números iguales de hombres y mujeres no sé si sea esto aplicable, hablo por la misma naturaleza del trabajo. Pero, señores, dejando a un lado esto, otra cosa muy diferente es aprobar equidad de género. El uso de la palabra de género como sinónimo de sexo debe evitarse. La Real Academia de la Lengua Española no recoge el significado de género como el de sexo. El género es una categoría de análisis en sociología y antropología que denota un conjunto de normas y convenciones sociales del comportamiento sexual de la persona. Son estudios de la construcción social de las diferencias sexuales, no solo la desigualdad hacia las mujeres, sino hacia la diversidad sexual, es decir, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera. Estos estudios no tienen respaldo ni en la biología ni en la genética y, por tanto, no cumplen plenamente con el método científico. De hecho, los últimos estudios científicos descartan una exclusiva construcción social y cultural de los géneros sexuales y sus roles, sugiriendo incluso que la cultura tiene bases biológicas y fisiológicas antes que meramente arbitraria. Entonces, el género como se lo ha comprendido en esta Asamblea, sería

recibir a homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales y travestis en las Fuerzas Armadas, y por lo visto, entonces, ahí sí creo que estaríamos en graves problemas, pues para la rigidez en la vida militar sería muy complejo poder recibir a estas personas, porque se destruirían ciertas normas rígidas que tendrían que, inclusive determinarlo los estudios sicológicos en el proceso de selección una vez más. Quiero aclarar que personalmente no tengo nada en contra de estas personas, pero creo que hay que estudiarlo un poco más, porque no es cuestión de a la ligera tomar este asunto. Por lo que propongo, es no mantener esta parte del articulado en la Constitución, debe ser parte de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y dejar el proceso de selección en manos de ellos para poder escoger a los mejores hombres y mujeres para este servicio. Sobre el artículo seis, aplaudo que el servicio militar sea voluntario, pero que digamos que no participarán en áreas de conflicto militar o en tareas de riesgo militar, por favor. Las Fuerzas Armadas preparan a las personas para la guerra. La esencia de esa preparación es justamente el riesgo. Empecemos a definir riesgo militar. "Son todas aquellas actividades que desarrolla la institución con ocasión de la misión encomendada y que por razones de la misma, le puede producir una lesión al personal militar. Es decir, en instrucción y entrenamiento militar, paracaidismo, vuelo, buceo por acción del enemigo, manipulación de material de guerra y explosivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más vale que no exista el servicio militar si bajo este artículo no se van a poder preparar para la guerra. No se puede hacer este tipo de señalamientos. Mientras más sudor y lágrimas se derrame en el entrenamiento, menos sangre se derramará en la guerra; y, en su entrenamiento, por supuesto que habrán riesgos. Es la esencia natural del entrenamiento para la guerra y la guerra en sí; y señores, en caso de guerra, todos debemos participar, no se diga el voluntario que ha escogido, justamente, ingresar al servicio militar.

Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Doctor Esteves. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Gracias, señor Presidente. En realidad, son tantos y tan importantes los temas que comprenden este segundo plenario, que el tiempo no nos va alcanzar para hablar de muchos... Yo si quería dejar constancia, señor Presidente, que en tanto en la página Web oficial de la Asamblea como en el zimbra, no consta hasta este momento convocatoria alguna para Pleno el día de mañana. Tengo entendido que mañana no hay Pleno, porque si aparece a las ocho de la noche una convocatoria, los articulados no vamos a alcanzar a estudiarlos y mañana vamos a venir aquí a debatir sobre cosas que no hemos tenido la oportunidad de estudiarlo adecuadamente. Bien, voy al grano. Corte Constitucional. La Corte Constitucional era un tema que le correspondia a la Mesa número ocho, pero después de que ya estábamos preparando nosotros en la Mesa, le consta aquí a Mae Montaño, a Gina Godoy, al doctor Taiano y a algunos más; de repente nos dijeron, eso no les corresponde a ustedes, eso le corresponde a otra Mesa y nos dejaron por ahí a nosotros un pedacito para que tratemos sobre ciertas cosas que no tenían mayor connotación. Entonces, nosotros nos quedamos preocupados por lo que estaba pasando y ahora tenemos articulados aquí que en realidad son materia de un debate y un fuerte debate, ojalá que nosotros tengamos el suficiente tiempo para poder analizar. Aquí tenemos, por ejemplo: Artículo ocho, Del control constitucional, Sección segunda. Por favor. Dice: "Para ser Magistrado de la Corte Constitucional se necesita: 1. Ser ecuatoriano", quisiera agregarle, como lo hemos hecho en todo, "de nacimiento"; agregarle, uno, ser ecuatoriano de nacimiento. Vamos al segundo, al ordinal dos; al tercero, perdón. Dice ahí, como exigencia. "Tener título de doctor de

jurisprudencia o de abogado". El ejercicio profesional en abogacía se hace con el título de abogado; por eso existen colegios de abogados, federación de abogados, el título académico es el doctorado. Para estos casos, lo que se debe exigir es ser abogado y el doctorado es punto en el concurso de méritos. Si es doctor, ejemplo: dos puntos. Pero no se puede decir que requisito es ser doctor o abogado, no. Tiene que ser abogado y punto y el resto, los títulos que va obteniendo, las maestrías, etcétera, son puntos en el concurso de merecimiento. Vamos al artículo nueve. Habla de la Comisión Seleccionadora. Dice que "la Comisión Seleccionadora estará formada o integrada por dos delegados designados por cada una de las funciones: Legislativa, Ejecutiva y de Control Social". Ese tribunal o esa Corte va a nacer politizada y partidizada ¿y no es eso lo que estamos tratando de evitar? Yo no estoy de acuerdo con esa forma de integración. Por escrito voy a tratar de presentar una propuesta y ojalá que se la acepte. Atribuciones, dice en el artículo once. Artículo once, ordinal sexto. Esto, seguramente, no, ya, ya ha causado una polémica a nivel de editorialistas de los distintos diarios, abogados que se están preocupando de esta situación que ya se conoció. Dice ordinal sexto: "Conocer y resolver a petición de parte, las sentencias, los autos", los autos pueden ser con el valor de sentencia; tienen un rango inferior y ahí se agrega algo terrible, "y otras decisiones judiciales". Yo estoy en contra de que un articulado como el que tratamos de hacer, una Constitución de avanzada, innovadora, tienen estos vacíos, como ese que se está señalando ahí; "y demás actuaciones o decisiones judiciales". Quiere decir que una providencia que es algo del trámite, también podría ir a ser conocida por la Corte Constitucional. Lo que es materia de conocimiento de esta Corte Constitucional debe estar taxativamente señalada en este articulado, no podemos decir "sentencias, autos y otras decisiones judiciales". Además que la posición que yo he mantenido como profesional de la abogacía,

es que no es necesario que la Corte Constitucional revise los fallos de la Corte Suprema de Justicia que es un Tribunal de Casación. Si queremos que se revisen potenciales violaciones a los derechos humanos o a las normas reguladoras del debido proceso, lo lógico es, introducir reformas a la Codificación de la Ley de Casación, para que ahí se ponga, que en la casación, la casación también se podrá disponer, solicitar por violaciones a normas del debido proceso; dos, por violaciones a los derechos humanos, y no es necesario trasladar de la Corte Suprema a la Corte Constitucional un juicio porque está atentando contra el principio de la cosa juzgada y se está dilatando el procedimiento. Sigamos que ya el tiempo se nos viene. Vamos con las instituciones de protección pública; instituciones de protección pública. En las Constituciones anteriores se decía, simplemente, la Fuerza Pública, porque la Fuerza Pública comprende a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Articulo tercero de este capitulo de la Fuerza Pública. Articulo tercero, por favor. Leamos detenidamente esto. Ojalá que nos pongan; gracias. Dice: "Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policia Civil Nacional serán juzgados por salas especializadas de la Función Jurisdiccional"; salas especializadas de la Función Jurisdiccional. Estamos hablando de salas de casación penal "en casos de delitos cometidos dentro de su misión específica como miembro de la Fuerza Armada o como miembro de la Policia Civil" y a continuación hay un punto y coma y agrega "el cometimiento de delitos comunes serán juzgados por la justicia ordinaria". Pero si lo que comprende las salas especializadas de la Función Jurisdiccional también son justicia ordinaria; es parte de la justicia ordinaria. Este articulo está confuso; y a bajo dice pues, "las infracciones disciplinarias serán juzgadas". Este artículo que está ahí se motivó, se motivo, porque en la vigésima transitoria de la Constitución del noventa y ocho y en el artículo ciento noventa y uno de ese cuerpo constitucional se establecia la unidad

jurisdiccional y transcurrieron diez años y no se cumplió con eso, de ahí que era necesario lo que siempre he venido diciendo. La inconstitucionalidad por omisión que no está adecuada ni debidamente redactada en la parte que lo han hecho y que no va a quedar el tiempo. Hubo, acuérdense ustedes; inconstitucionalidad por omisión, el estatuto de la oposición, la oralidad de los juicios y otras más que me sería largo, disposiciones que quedaron en la Constitución y decía: "La ley la regulará". Nunca se pudo hacer efectivo eso, porque no había la ley dictada por el Congreso y porque no había un órgano sancionador para el efecto, que es la norma que se llama inconstitucionalidad por omisión que en el derecho comparado está en la Constitución de Costa Rica, en la Constitución de Portugal, en la Constitución de Venezuela, en la Constitución del Brasil. Tenemos suficientes elementos para tratar; aquí está en este libro, de un autor nacional, no hay que acudir a los extranjeros, aquí creemos que los autores ecuatorianos no nos sirven...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. ...aquí está, doctor Iván Castro Patiño. ¿Tengo un minuto, señor Presidente? ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Un minuto, ya. En esto termino, porque acá hay otra cosa importantísima, que me alcance ese minuto. Artículo cinco de las mismas instituciones de protección social. "Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, conservar la paz en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial". Yo sugiero se agregue, se agregue una norma que consta como segundo inciso del

artículo ciento ochenta y ocho que contiene el proyecto de Constitución de Sociedad Patriótica que todos los asambleistas lo tenemos; porque se repartieron ciento treinta ejemplares y dice lo siguiente: Con esto termino. "El desconocer, retirar el respaldo y la seguridad de la Fuerza Pública al Presidente de la República por parte de un militar en servicio activo, -coma- configura el delito de traición a la patria". Las Fuerzas Armadas no tienen porqué ser garantes de la democracia ni vigilantes, el pueblo es el que tiene que ser el garante y el vigilante, y aquel que se alce de armas y le falte el respeto al Presidente de la República o le diga no tiene nuestros apoyo, le hacen un vacío y ese gobierno se cae. Eso no se debe permitir, y si este proyecto es presentado por uno u otra persona, no importa, si es bueno deberíamos nosotros acogerlo, el único garante de la dcmocracia tiene que ser el pueblo, y cuando la democracia está en peligro es obligación del pueblo salir a defenderle en las calles. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Diana Acosta. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ACOSTA DIANA. Gracias, señor Presidente. Señora Vicepresidenta, señor legítimo Segundo Vicepresidente Leonardo Viteri. Como son setenta y un artículos, perdón, son cuarenta y un artículos y absolutamente extensos y tengo aproximadamente veinte segundos para darle a cada uno, voy a ser muy puntual, igual he presentado mis observaciones por escrito. Solo voy a hablar de lo que peor me parece de estas calamidades. En el tema de la supremacía constitucional en el artículo primero, me parece que se establecen. Dios mío, son tantos artículos. En el artículo primero, se establece que "las normas y actos que estén en contradicción con la Constitución son nulos y sin valor". La pregunta es ¿desde cuándo? La pregunta es ¿tiene que ser aclarado por alguien? La pregunta es ¿Cuándo va a tener un valor de

inconstitucionalidad? Entonces, creo que eso tiene que estar reflejado en el artículo. Eso es necesario para saber con exactitud en qué momento, porque en qué momento vamos a decir que es inaplicable o no por la inconstitucionalidad, entonces debería constar allí. Se han eliminado en este sentido párrafos importantísimos que constan en la actual Constitución que son muy buenos y que yo ya hice una propuesta me parece a la Mesa ocho, entonces acá en este articulado no se encuentran y me parece que hay una contradicción, porque como dijo el compañero Esteves, yo creo que estos artículos ya estaban en la Mesa ocho, o al menos ya lo habían propuesto por allá. Es muy importante en este tema que se mantenga lo que dice el actual párrafo de la Constitución del noventa y ocho en el artículo dos siete dos, que justamente habla de lo que pasa cuando hay conflictos entre leyes de mayor jerarquía. Este capítulo habla sobre la supremacía de la Constitución y es aquí entonces donde tiene que estar y me parece que no cuando envié los articulados de las observaciones a la Mesa ocho. Es importante que continúe este artículo y creo que lo tienen que volver a poner, cuando dice que "si hubiere conflicto entre normas de distintas jerarquías, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior". Esto es muy necesario, creo que era un avance, creo que es acertado lo que dice la anterior Constitución, la vigente, y creo que hay que rescatarlo y hay que volverlo a poner; así mismo lo que recoge el artículo dos siete tres de la actual Constitución, y dos siete cuatro, porque explican perfectamente cuál es la supremacía de la Constitución y qué hacer en estos casos específicos cuando haya contradicción entre normas de distinta jerarquía. Así que sugiero que aquello se acoja. En el tema del control constitucional, pues, evidentemente en el artículo primero que aquí es el cinco no, me parece absolutamente inaceptable que haya la administración de justicia. ¿Qué quiere decir eso? que hay

una cuarta instancia ¿Qué quiere decir eso? que ya no hay cosa juzgada en la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir eso? que cualquier ciudadano común y corriente puede venir y puede apelar porque una de las partes incurrió en algún error o simplemente violó alguna norma constitucional, entonces se vio afectado y ¿qué es lo que va a pasar en este caso? los juicios no se van a alargar ocho años como ahora, sino que se van a alargar diez años, catorce años, seguramente quince años y vamos a tener una cuarta instancia. Quiero manifestar que este error ya se cometió en España y el Tribunal Constitucional actualmente en España está colapsado de juicios donde las partes alegan que las sentencias violaron derechos constitucionales. Entonces, nosotros no queremos colapsar el sistema, nosotros evidentemente no queremos que la justicia tarde, que la justicia se alargue. Aquí las personas ¿qué es lo que quieren? Que haya justicia rápida, que haya justicia veraz, efectiva que haya inmediación, y con esto lo único que vamos a lograr es retardar la justicia, porque tal como está aquí, si le damos competencia judicial que es una cuarta instancia y cualquiera, y cualquier abogado va a alegar que se cometieron errores en los derechos constitucionales. Entonces, es un error inaceptable no puede ser una cuarta instancia. Esta Corte Constitucional tiene que dedicarse específicamente a resolver aquellos conflictos entre leyes para que salgan o no del ordenamiento jurídico. En el artículo once, a lo que se refiere que la Corte Constitucional ejerce las siguientes atribuciones", pues en el artículo... hay algunas que están mal escritas y por supuesto falta, no consta la potestad de declaratoria de inconstitucionalidad de los actos administrativos con efecto individual. Hay actos administrativos que son muchas veces inconstitucionales y ¿quién los va a declarar que no proceden? Está bien, me parece pertinente que los declare el Tribunal Constitucional porque aquí hay muchísimo abuso por parte de las atribuciones y los actos administrativos, eso tiene que corregirse

necesariamente y tiene que eso estar especificado, algo que diga así: "que la declaratoria de inconstitucionalidad de los actos administrativos con efecto individual y también respecto de las leyes", eso también tiene que estar específicamente allí como están otros puntos. En ese mismo artículo once, en el numeral cinco, así mismo tengo esta duda como ya lo manifestó el colega que me antecedió, "potestad de seleccionar tipo de casos para ser revisados". ¿Qué tipo de casos van a ser revisados aquí? Demás procesos constitucionales, eso no puede ser así, ellos no pueden tener discrecionalidad de querer revisar absolutamente todo, porque sino atropellamos justamente los procesos judiciales, atropellamos una unidad jurisdiccional y tiene que estar eso delimitado, y decir taxativamente a qué se refiere. Eso no puede ser así, porque a qué tipos de casos se va a referir, va a ser en las sentencias, se requiere una apelación, el tribunal va actuar de oficio, ¿podrá este tribunal entonces? Tiene varias incógnitas y tiene un gran vacío legal este artículo cinco y debe ser necesariamente corregido. En el artículo once mismo, en el numeral seis, es absolutamente absurdo que esta Corte tenga competencia judicial, pues se rompe la unidad jurisdiccional de la que tanto se habría hablado, hasta donde llega la potestad judicial. Esto realmente llevaría al acabose del sistema judicial en el Ecuador. Y eso lo que no se puede omitir, porque tanto hemos luchado por eso, tanto ha sido la necesidad de la población ecuatoriana de decir, queremos justicia veraz, ágil y aquí simplemente con esto que se está implantando se va retardar, mucha gente no va a tener justicia, como aquí a ustedes les gusta la palabra, se van a basar los abogados en leguleyadas para alegar y tardar los procesos y eso no es justo para la población, eso tiene que revisarse por el bien del sistema procesal ecuatoriano. En el tema del estado de excepción, pues es un tema bastante delicado en el artículo uno, se habla de disturbio interno, yo creo que debería especificarse qué puede ser disturbio interno, porque sino se deja a la

potestad de la Función Ejecutiva, cualquiera que la ejerza, de interpretar e irse más allá de lo que se quiere. Las facultades del estado de excepción están previstas por lo general para la guerra, no para atender emergencias ni desastres naturales como se dice aquí. En este sentido, yo quisiera proponer que se agregue algo que beneficie justamente cuando estas situaciones de desastres naturales pasen. Por ejemplo, que se agregue: "En el caso de desastres naturales tales como terremotos o inundaciones, que son casos que nos están pasando en la actualidad y por el cual ha venido acá el Presidente, pues no, a pedir que se tomen medidas, yo creo que habría que darle una solución dentro del texto constitucional en algo que diga similar a esto, pues no: "En caso de desastres naturales como terremotos e inundaciones, el Presidente de la República podrá autorizar vía decreto la exoneración de impuestos a la entrada de vehículos y equipos de rescate, el ingreso de médicos socorristas y personas pertenecientes a organismos públicos y privados internacionales sin la respectiva visa, el ingreso sin el permiso sanitario de cualquier clase de cables para búsqueda de sobrevivientes, de canes para búsqueda de sobrevivientes o de cualquier o la desaduanización inmediata, sin pagos de impuestos y tasas de todo tipo de bien que llegue como ayuda internacional por vía..." ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ACOSTA DIANA. "...aérea o terrestre para los damnificados e ingresos de raciones de alimentos". Igual he presentado estas observaciones por escrito, me parece que la intención en este aspecto de incluir los desastres naturales y que se pueda hacer algo para solucionarlos, es bastante buena y bastante loable. Sin embargo, tiene que ser especificada de una manera así para que no se tomen atribuciones ni se exceda el poder porque no podemos estar en estado

de excepción por todas estas cosas sin saber a qué se va a dedicar ni cuál es el fin de aquello. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Asambleísta Amanda Arboleda. ------

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. Muy buenos días, señor Presidente, compañeros y compañeras, buenas noches. Consideramos en la Mesa tres que debemos diseñar un esquema de seguridad humana y democrática que priorice la protección de las personas por encima del patrimonio del Estado como una entelequia o responda a las políticas de los organismos internacionales, un esquema que combata las distintas aristas que causan la violencia en todos sus niveles y que tenga como objetivo primordial el derecho de las personas a convivir en paz. Y es por ello que hemos cambiado la concepción de "Fuerza Pública" por "Protección Pública", porque el fin, el objetivo fundamental de las instituciones de protección pública tiene que ser la protección de las personas, de los derechos humanos. Una cosa fundamental que hemos puesto en esta propuesta constitucional, es que las Fuerzas Armadas ya no son más garantes de la democracia ni del orden jurídico. Nunca más las Fuerzas Armadas se podrán constituir en garantes de la democracia en el Ecuador. Los conflictos de la democracia como se ha dicho en repetidas ocasiones en esta Asamblea, se deberán resolver con más democracia. El servicio cívico-militar deberá ser voluntario. Yo quiero comentarles que esta es una propuesta que ha salido justamente de la propia Policía Nacional y de las propias Fuerzas Armadas, lo que nos demuestra que hay un gran espíritu de progreso y de modernización en estas grandes instituciones. Otra cosa que es interesantísima y quisiera añadir frente a lo que ha dicho un compañero Asambleísta, que la propuesta de que las personas que hagan el servicio cívico voluntario no puedan ir a zonas de riesgo,

también es una propuesta de las propias Fuerzas Armadas, porque no se pueden poner a los jóvenes de dieciocho años que van con entusiasmo cívico a hacer el servicio voluntario a una situación de guerra por ejemplo, de conflicto armado, eso es violar los derechos humanos de los jóvenes que recién están empezando y tienen interés en servir a la nación, esto es una propuesta que también es parte de las propias Fuerzas Armadas. Otra propuesta, otra innovación que puedo resaltar en la propuesta de la Mesa tres, es la configuración de la Policía Civil Nacional, civil nacional. La visión de seguridad nacional, siempre ha sido conceptuada como la defensa de la soberanía frente al enemigo externo, como una herencia de la Ley de Seguridad Nacional, se trasladó a la Seguridad Pública (defensa del orden público-estatal que enfrenta al enemigo interno). En base a la cual, so pretexto de defensa del Estado, se ha violentado los derechos de los ciudadanos considerados enemigos del mismo. Esta concepción ha traído mucho dolor y muerte en América Latina. No nos podemos olvidar que so pretexto de defender la seguridad del Estado se declaró enemigo del Estado a Consuelo Benavides, y se la torturó y se la asesinó; a los hermanos Restrepo, a quienes se los torturó y se los amenazó. Es por eso que tenemos que cambiar esa concepción, al interior del Estado no hay enemigos, hay habitantes, hay ciudadanos, hay seres humanos que tienen que ser protegidos por el Estado. Por eso he planteado enfatizar la naturaleza civil de la Policía, cuya misión fundamental es la protección de los y las ciudadanas para el libre ejercicio de sus derechos. Con una formación basada en los derechos humanos, la prevención del delito y el uso de los medios de conciliación como alternativas al uso de la fuerza, lo que no significa que dejarán de usar armas y que tendrán que también combatir al crimen organizado, quiero dejarlo súper claro para no dar lugar a mal interpretaciones. Se eliminan los fueros militares y policiales. Consideramos, señor

Presidente, que no pueden seguir existiendo cortes policiales ni militares totalmente de acuerdo con la observación que hizo un compañero Asambleísta anteriormente, de que debemos aclarar que cuando hablamos que los militares o policías que cometan delitos que no estén ligados a la naturaleza de su misión, serán juzgados por la justicia ordinaria, creo que si tenemos que aclarar que estamos hablando que tendrán que ser juzgados por las salas de lo penal. Yo creo que eso tenemos que recoger de observación para dejar sumamente claro de lo que estamos hablando. Por otro lado, estamos y vamos a enfatizar con mucha fuerza, el libre ingreso a la carrera policial y militar, no habrá discriminación. Y yo hablo de discriminación, compañeros y compañeras, cuando los requisitos para entrar en las escuelas de oficiales esta estatura igual o superior a uno sesenta centímetros, asistir a la entrevista personal con el papá y con la mamá y con el apoderado, certificados de ingresos económicos de los padres debidamente notariado, croquis y fotografía domiciliaria, certificado de trabajo de los padres otorgado por la entidad o empresa donde labora, poseer antecedentes intachables de honorabilidad y conducta tanto personal como familiar. Y ¿si el aspirante es huérfano? Y ¿si el aspirante no tiene casa? Y ¿si el aspirante no cuenta con la autorización de sus padres? Y ¿si el aspirante no tiene dinero? Señores y señoras, de eso estamos hablando, cuando estamos hablando de que no tiene que ver ningún tipo de discriminación. No se está diciendo que no se tienen que hacer exámenes de ingreso, estamos hablando de que si hay discriminación, por supuesto que la hay. Y a mí me gustaría como a todos nos gustaría en esta sala creo yo, de que un Masaquiza pueda ser general, de que un Guamangate pueda ser general. De eso estamos hablando, de eso estamos hablando y vamos a mantenernos muy firmes en esta propuesta. Otra cuestión interesante que hemos podido plantear es en el tema de los estados de excepción. Punto de orden,

señor Presidente, o sigo en el uso de la palabra. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le doy enseguida que termine la intervención. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. En el Ecuador como en el resto de América Latina, en el tema de los estados de excepción ha habido abusos con respecto a los estados de excepción, por lo cual nosotros hemos considerado que tenemos que definir cuál es su objetivo. ¿Cuál es su objetivo fundamental? Es necesario restringir y precisar las causales. Aquí la compañera Diana Acosta hizo una observación interesante, que es ir conceptualizando en el texto constitucional las causales, yo creo que deberíamos analizar esa posibilidad y hemos establecido cuáles deben ser los principios que la rigen y establecer a los mandatarios la obligatoriedad de dar cuentas de las acciones tomadas durante este periodo especial. El objetivo fundamental del estado de excepción es regresar a la normalidad del Estado, para garantizarles a las personas el pleno goce de los derechos humanos, esa es la nueva conceptualización, compañeros y compañeras. Creemos que es importante que hayamos cambiado las causales, por ejemplo hemos establecido la causal de agresión, tomando lo de la resolución...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le interrumpo, Asambleísta. Me están pidiendo un punto de información, por favor, Asambleísta...----------

EL ASAMBLEÍSTA VARGAS WLADIMIR. Solamente para referirme a los militares que son huérfanos, hay militares que son huérfanos, ese no es el problema. Y quiero hablar sobre, por ejemplo, los iwias, son los mejores comandos que tiene el Ejército en el Oriente, y son de estatura

pequeña, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que haber es un proceso de selección y no puede estar en la Constitución el proceso de selección, tiene que estar en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, eso es todo. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. Antes de continuar con los estados de excepción, señor Presidente. Las personas también me dan seguridad y son de tropa, son de apellido Guachinga, de apellido Guamangate, si nos ponemos a ver cuáles son los apellidos de las personas de la oficialidad, estamos viendo que hay discriminación, hay discriminación y hay que combatir la discriminación desde el texto constitucional, dejémonos de eufemismos, estamos haciendo cambios profundos en la estructura del Ecuador. En cuanto al tema de los estados de excepción, compañeros y compañeras...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. Le queda un minuto. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. Dará descontando, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sí, continúe. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. En el tema del estado de excepción, hemos cambiado hemos puesto el término de agresión recogiendo la Resolución treinta y tres catorce de la Asamblea General de la ONU. Hemos propuesto el concepto conflicto armado porque engloba tanto a los conflictos internos como externos, y tenemos que

tener bien claro que tienen que estar regidos por el derecho humano internacional, el Derecho Internacional Humanitario. Recomendamos utilizar el concepto y estudios internos por grave conmoción interna como constaba en la Constitución del noventa y ocho, ya que es de suma importancia indicar que en estos casos los llamados a actuar en los casos de disturbios internos, son los miembros de la Policía Nacional y se darán el derecho...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. Ya, señor Presidente, para terminar mi intervención quiero también agregar que hemos agregado a diferencia de la Constitución del noventa y ocho, que los estados de excepción tienen que estar regidos por un conjunto de principios que también van a restringir cualquier tipo de excesos de los gobiernos de turno, y quiero también terminar mi intervención diciendo, que vamos a recoger con mucho interés todas las recomendaciones que nos ayuden a hacer más humanas, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Muchísimas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleista Gilmar Gutiérrez, tiene la palabra. Informe a la sala, señor Pavón. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PAVÓN ANDRÉS. Muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera que en primer lugar, cuando nos referimos a cualquiera de los compañeros, es primero, señor Asambleista, así como a usted, señor Presidente. Quisiera contestarle, informarle a la compañera que el tema de las Fuerzas Armadas no es tanto la discriminación por los apellidos, y yo le comento que en las Fuerzas Armadas, en el Ejército ecuatoriano hay oficiales de apellido Quishpe,

de apellido Amaguaña, que son oficiales y que podrían ser Comandantes. Podríamos decir que los indígenas no es que no puedan ser oficiales de la Policía, y ahí también viene un tema de los indígenas que tienen la trenza o que tienen guango, no es que porque no se cortan el guango no pueden ser oficiales, es porque la tradición de ellos no les permite ser, que se les corte el guango que tienen. Por eso les respetan y por eso ellos también pueden ser oficiales en las Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, si no sabe del tema esperaría que no se refiera a eso. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleístas Gutiérrez. ----------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Gracias, señor Presidente. Señoras y señores asambleístas: Una vez más y no es que la oposición sea mentirosa, escandalosa, boicoteadora, estos cuarenta y un artículos que estamos tratando este momento, son o no son un paquetazo constitucional, claro es que un paquetazo, no es que nos inventamos. Imposible como dicen algunos compañeros, tenemos aquí quince, veinte segundos por artículo, y la historia se repite todos los días, por eso protestamos, no porque estamos locos. Inclusive, señor Presidente, señoras y señores asambleístas, es un argumento fuertísimo que está fortaleciendo al no en el referéndum, estos paquetazos de todas las sesiones. Sin embargo, frente a la posibilidad de que gane el sí, por la campaña multimillonaria que está haciendo el Gobierno, una campaña nunca antes vista en la historia del país, yo creo ni en el mundo entero, y con el dinero de los ecuatorianos es que vamos a presentar nuevas propuestas...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Refiérase al tema, señor Asambleísta. Refiérase al tema, continúe...----------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. ¿Seguimos?...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sí, claro si usted está violando el artículo veintiséis. ----------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Me estoy refiriendo exactamente a los cuarenta y un artículos, me estoy refiriendo al paquetazo constitucional que nos están presentando. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Hasta ahora no se refiere al tema...----------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. Sin embargo, decía, frente a la posibilidad de que gane el sí, vamos a presentar nuestra propuesta a la forma o mejor dicho a la designación de los magistrados de la Corte Constitucional. Señoras y señores asambleístas, una de las esperanzas, uno de los principales objetivos que tenía el pueblo ecuatoriano o que esperaba de esta Asamblea, es el que tengamos una Corte o mejor dicho una Función Judicial independiente, una función Judicial libre, una función Judicial despolitizada, eso es lo que más quería el pueblo ecuatoriano. Ustedes se llenaban la boca, de que nunca más el Congreso Nacional va a elegir jueces, ¿Por qué no practican lo que predican? ¿Qué es lo que están aquí planteando en el artículo nueve? La designación de los magistrados que conforman la Corte Constitucional, si lo podemos poner... "La designación de los magistrados que conforman la Corte Constitucional será realizada por una Comisión Selcccionadora que estará integrada por dos delegados designados por cada una de las funciones Legislativa" ¿Qué es la función Legislativa? Política pues. "Dos de la Función Ejecutiva", más políticos y otro "del Control Social", igualmente politizado y confuso. Miren, estamos politizándole más que antes a la Función judicial. Estos

seis políticos que van a designar los magistrados de esta Corte Constitucional, que además es una Corte con suprapoderes, una Corte que no permite ni fiscalización ni ningún tipo de juzgamiento, es decir, igualmente no practican lo que predican, dicen que no quieren nada, que todo para la patria, sin embargo están queriendo perpetrar el poder ahí, y concentrando el poder. Se puede hacer cualquier reforma a la justicia, pero si le vamos a tener, a mantener politizada como lo están haciendo ustedes, no estamos haciendo ningún cambio, y este es otro argumento fuertísimo para el no. No a la Función Judicial politizada, no a la Corte Constitucional politizada. Señores, el no está ganando, quitenle argumentos para que gane el no, no sean necios, quítenle argumentos para que no gane el no. Sin embargo, frente a la posibilidad, como les decía, de que gane el sí, y si el señor puede darme poniendo la propuesta nuestra en la pantalla, yo le dejé ahí a la señorita que estaba, que parece que coincidencialmente se ha ido igual que la señorita que hace y transmite, parece que cortaron también la señal como siempre, cortan la señal del Estado, también la señorita se ido, dejamos ahi un archivo que decía "Colegio electoral". Pero si no está, les voy a leer, la idea ahi está. La propuesta nuestra, señor Presidente, señores y señoras asambleistas, que la entregamos al inicio de la Asamblea Constituyente que está en nuestro proyecto de Constitución, le dedicamos un título completo para la designación de magistrados de Corte Constitucional, el nombre coincidimos, y es el Título número nueve en nuestro proyecto del Colegio Electoral Nacional, el Capítulo I, vamos al Capítulo I. De la organización y funcionamiento. El artículo doscientos catorce en nuestro proyecto: "El Colegio Electoral Nacional tendrá su sede nacional en la ciudad de Quito, sus miembros durarán cuatro años, estará conformado por un delegado principal y su respectivo suplente de las siguientes organizaciones legalmente constituidas", y de ahi conformamos este colegio electoral con once

miembros, pueden ser más pueden ser menos, pero podemos ver hasta ahí nomás, podemos ver, tenemos aqui representantes de los colegios profesionales del Ecuador, de las universidades y escuelas politécnicas, de la Federación Nacional de Artesanos del Ecuador, de las organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera. Once representantes de la ciudadanía, como digo, puede ser más, pueden ser menos. En el articulo doscientos dieciséis, el siguiente por favor, doscientos quince, doscientos quince hasta ahí, dice: "Los miembros principales y suplentes no deben pertenecer a los órganos de dirección de las organizaciones nominadoras". La idea es, la idea es también, quitar la posibilidad, porque algunas de estas organizaciones también han sido acusadas de que son mafias y que solamente los... Bueno, me están diciendo que otra vez cortaron la señal como siempre, cuando intervenimos, pero no hay problema, ojalá sirva de algo o para algo esta propuesta. Les decía, que aquí la idea es, que los miembros de dirección de estas organizaciones no conformen o no sean parte de esta comisión nominadora y deberán reunir los siguientes requisitos, ahí están los requisitos, planteamos cinco, seis requisitos, para ser miembros de este Colegio Electoral Nacional. Entre estos requisitos, uno de los más importantes, es el de tener titulo de cuarto nivel para que pueda ocupar esta función de tan alta responsabilidad. En el artículo siguiente, en el doscientos dieciséis, dice así: "El Presidente del Colegio Electoral Nacional será elegido de entre sus miembros, durará cuatro años en sus funciones. El Colegio Electoral Nacional designará, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros a los siguientes funcionarios". Miren, esta comisión con representantes de la ciudadanía, donde no hay un solo representante político, no hay uno solo. Uno de los objetivos es ese, despolitizar uno de los objetivos de esta Asamblea Nacional Constituyente era ese, lograr independizar a los poderes del Estado, en esa comisión que nombramos, no hay un representante

político y se lo podría, como digo, agrandar, achicar o cambiar. La función es nombrar a los magistrados de la Corte Constitucional, como decía, coincidimos en el nombre, no en los suprapoderes que le están dando ustedes, nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, vocales del Instituto Nacional Electoral, al Contralor General del Estado...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ GILMAR. ... al Ministro Fiscal General de la Nación, a los miembros del Directorio del Banco Central, sería en el caso de ustedes, al Defensor del Pueblo y Superintendente. No avancé ni a explicar la mitad, pero bueno, hasta donde alcance y así es todos los días. Para las designaciones, tenemos el Capítulo II, las designaciones y en el Capítulo III el procedimiento para designar. En el artículo doscientos diecisiete, que es lo importante: "El Colegio Electoral Nacional sesionará, únicamente, cuando deba realizar las designaciones", es decir, solamente nombra, tampoco les controla, tampoco les juzga este colegio electoral, sino que este nombra. La idea es, que esos funcionarios tengan total independencia, total libertad, que no respondan a nadie, esa es la idea, es lo que quería el pueblo ecuatoriano, esa es una de las bases principales de la democracia, no lo que aquí se está planteando, contrario a lo que ustedes predican, que nunca más el Congreso va a nombrar. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo Asambleísta. Asambleísta Patricio Pazmiño. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PAZMIÑO PATRICIO. Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas: Como punto de partida, se debe dejar en

claro que la Corte Constitucional es un organismo ubicado fuera de la órbita de alguna de las Funciones o Poderes Clásicos del Estado. Esta Corte tiene por objeto desarrollar la tutela y promoción de los derechos constitucionales dentro de la concepción garantista y de promoción de esos derechos, que debe asumir el Estado Constitucional moderno. Esta acción tutelar de la Corte Constitucional obliga al cumplimiento de una función de máxima jerarquía de control sobre la administración de esos derechos que cumplen los poderes públicos en general, para evitar las hipertrofias de las funciones, particularmente de la Función Ejecutiva que en este tipo de Gobierno presidencial rige en nuestro país. La esencia de la organización de un Estado Constitucional de Derecho radica en la profundidad y amplitud de los controles sobre la juridicidad y la legitimidad de los actos de las Funciones que lo integran, por lo que se requiere de un eficiente sistema de corresponsabilidades para que sea capaz de limitar el Poder del Estado y de sus autoridades. Por eso, el más trascendente de los controles del Estado moderno es el denominado control de la constitucionalidad, que lo ejerce de manera privativa este órgano independiente de las demás funciones, llamado Corte Constitucional. En el informe para Primer Debate de los Miembros de la Mesa tres decimos: "Esta institucionalidad es el resultado de la evolución positiva del Derecho Constitucional, y es una respuesta a la exigencia de los pueblos que miran este control como un mecanismo efectivo que garantiza la vigencia de sus derechos consagrados en la Carta Fundamental. Para lograr este propósito, es fundamental *redefinir las funciones del órgano de control* constitucional, de modo que le permita ejercer esta fundamental tarea, con relación a la totalidad de los actos emanados de todas las Funciones que integran el Estado". Como se ve, no es un simple cambio de nombre: de Tribunal Constitucional a Corte Constitucional, sino que es una profundización y jerarquización del control constitucional sobre

todo el andamiaje estatal. Como órgano extra-poder, es decir, que no está bajo la influencia de ninguna de las Funciones del Estado, a la Corte Constitucional se le asignan competencias muy específicas, que cuantitativamente son menos extensas que las conferidas por esta Constitución a las cinco Funciones del Estado. Si se comparan las competencias de la Corte con las de las funciones, se encontrará que son menos extensas y menos expandidas, pero desde un punto de vista cualitativo, son de suprema importancia. Veamos algunas de las características, fundamentalmente, la que ha causado más conmoción, que es, precisamente, la del artículo once, numeral seis, que dice: "La Corte Constitucional debe conocer y resolver a petición de parte, las acciones de protección en contra de las sentencias, autos u otras decisiones judiciales definitivas pronunciadas por la justicia ordinaria, cuando las sentencias judiciales violen el debido proceso u otros derechos fundamentales en los términos establecidos en la ley". Como se podrá apreciar, compañeras y compañeros asambleístas, el alcance de las competencias asignadas a la Corte Constitucional, de ninguna manera vulneran las competencias que les son propias a las funciones del Estado. En el caso específico de los temores de la Función Judicial, han sido evidentes en los medios de comunicación, exclusivamente a petición de parte –dice- una vez cumplidos los requisitos que consten en la respectiva Ley Orgánica, se podrá pedir la revisión de las sentencias cuando estas resoluciones violen el debido proceso u otros derechos fundamentales. Esta revisión no significa intromisión, pues la Corte Constitucional está por fuera de las Funciones del Estado, y no significa una jerarquía superior a la autoridad máxima de la Función Judicial. No es la creación de una nueva instancia procesal, pues el control de la constitucionalidad de las sentencias se dará por excepción, toda vez que siempre los jueces deben ajustar sus dictámenes y sentencias a la Constitución, conforme ha sido práctica de larga data, lo que está

recogido en la Ley Orgánica de la Función Judicial. Es lastimoso que, por parte de algunos articulistas y comentaristas de los medios de comunicación e inclusive de algunos asambleístas, no se quiera aceptar que el proceso constituyente implica una nueva concepción de Estado, con la correspondiente reasignación de ámbitos y de competencias, para que la acción de ese mismo Estado sea un aporte efectivo al buen vivir de todos los ecuatorianos. Ya es hora de que los ecuatorianos aceptemos que no hay potestades inamovibles ni derechos adquiridos por parte de ninguna institución del Estado, y mal puede decirse que mediante el control constitucional, se está vulnerando la "majestad de la justicia" o se está disminuyendo a la Función Judicial. Estas visiones inmovilistas del Estado están siendo superadas en toda Latinoamérica por la dialéctica del cambio social, del perpetuo devenir en la construcción irreverente de la sociedad del siglo XXI, en la que está comprometida la Asamblea Constituyente. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra. ------

LA ASAMBLEÍSTA ROSADO GISSEL. Me acaba de llegar la convocatoria para el día de mañana. Yo quiero decirles, señor Presidente y compañeros asambleístas, que protestar, decir la verdad y estar en defensa de la democracia no es estorbar. Y, por ello, quiero manifestar, en el punto número dos de la sesión de mañana hay dos temas totalmente diferentes, como es el derecho a la comunicación y el derecho a la naturaleza. Quiero pedirle formalmente a usted esta noche, que por favor, los ponga en puntos aparte, porque son dos temas totalmente diferentes o ésta, tal vez, es otra de las mañas para nosotros hablar menos y coartarnos la libertad de expresión. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Si quiere que no utilice términos que no son los que dice usted, tampoco lo haga, no hay mañas aquí. Simplemente, yo tramito lo que las Mesas me envían. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROSADO GISSEL. Pero están en dos puntos diferentes en el mismo punto. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Diego Borja. ----------

EL ASAMBLEÍSTA BORJA DIEGO. Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros asambleistas: Voy a referirme a simplemente dos temas, dado que es tan largo lo que estamos tratando, que quiero *concentrar* la *discusión*. *Compañeras* y *compañeros* asambleístas, comparto las preocupaciones respecto a que debemos ir sumando una base social para que triunfe el sí, comparto esa preocupación y creo que lo estamos haciendo y de lo que se trata ahora, es de continuar en esa tarea. Por eso, me voy a referir a tres puntos en concreto y se puede poner ahí en la sección segunda De la Administración Pública, sus principios y accesos, en el artículo cuatro. Creo que es indispensable, ya se pasó en el articulado en la Mesa de Trabajo este tema y creo que aquí podemos volver a cometer el error. En el segundo párrafo del artículo cuatro, se dice: "Los obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo." Yo vuelvo a ratificarme en lo que había mencionado anteriormente, creo que debe decir "los trabajadores" y creo que esto está ligado a una concepción que está acá, en la sección *segunda*, *De la Administración Pública*, *donde* se vuelve a hacer esa distinción, que creo que nos ha llevado a los ecuatorianos a un conjunto de problemas, que esta Asamblea los trató de enmendar en la primera parte, cuando aprobábamos los mandatos dos, cuatro y ocho, que es la diferenciación entre servidores públicos y trabajadores del

Estado. Yo había propuesto, en su momento, al anterior Presidente de la Asamblea, lo había hecho en la Mesa número seis a la que me debí, que deberíamos tener un solo Código del Trabajo, señor Presidente, porque aquí lo que estamos haciendo es, nuevamente, tener dos estatutos para los trabajadores, podemos tener un solo estatuto laboral como lo tiene cualquier otro país, con dos secciones, una sección, orientada a los servidores públicos y otra a los trabajadores. Pero creo que debe ser un solo estatuto del trabajo, un solo Código del Trabajo que ojalá lo podamos reformar próximamente. Y, por eso, creo que volver a plantear acá, que solo los obreros del sector público estarán protegidos por el Código del Trabajo, es una regresividad, es una regresión constitucional y debemos impedir que esto pase. Debe señalarse aquí, que son los trabajadores del sector público y diferenciar que son trabajadores todos aquellos que no ocupan funciones directivas o de libre remoción. Esto, quiere decir, que se debe incluir como trabajadores a técnicos, a profesionales y a personal administrativo, porque como ya lo he señalado, también, en el siglo XXI difícilmente se puede establecer con claridad, una línea divisoria tan tajante, entre los que hacen trabajo manual y los que hacen trabajo intelectual. Cada vez más, los trabajadores del siglo XXI, somos trabajadores que hacemos trabajo intelectual y muchos trabajadores que mueven turbinas, que mueven instrumentos y equipos en las propias fábricas, son también trabajadores intelectuales. Esta distinción creo que hay que enmendarla. En segundo lugar, en el artículo tres, ahí mismo, se señala una serie de principios para el servicio público: eficacia, eficiencia, calidad, etcétera, con lo cual, obviamente, todos estamos de acuerdo, el pueblo ecuatoriano está de acuerdo, porque quiere tener servicios de calidad en la institución pública. Pero creo que es indispensable que señalemos aquí, quién es el responsable de hacer esto, el responsable de hacer esto es el Presidente de la República, el Presidente de la

República es el responsable de la administración pública, tiene que ser entre las funciones del Presidente de la República dicho con claridad esto, y por tanto, si es una responsabilidad del Ejecutivo, tendria que dejarse, al menos, csbozado acá, que la ley que va regir este ámbito, de quién se hace cargo de esto, tiene que ser una institución regida por ley, bajo la responsabilidad de la Presidencia de la República. En el artículo ocho, igualmente, en este acápite de la administración pública, sus principios y acceso, se prohíbe que aquellas personas que tienen intereses o representan a terceros que los tuvieren en áreas que van a ser controladas o reguladas, sean parte de los órganos de regulación y control. Mc parece indispensable, pero creo que hay que señalar una temporalidad. No se puede dejar abierto, porque puede ser, que personas que estuvieron representando o que tuvieron intereses en áreas que van a ser reguladas, han renunciado y ahora pueden volver a hacerlo. Creo que aquí debería señalarse una temporalidad respecto a cuál es el tiempo en el cual no podrían ser juez y parte, porque si hasta el día de ayer fueron representantes o tenían intereses en esos ámbitos, por qué solamente con este cumplimiento formal ya no van a tener esa vinculación. Esto yo lo estoy poniendo por escrito, pero crco que es indispensable dejarlo acá señalado en el Pleno. Y la segunda cosa que quería señalar, señor Presidente, es lo que tiene que ver con la Procuraduría General del Estado, este tema es un tema crucial y creo que a todos en esta Asamblea deberia preocuparnos en este mismo momento, lo que está sucediendo en ese ámbito que ha sido la Procuraduría General del Estado. Aquí en tres artículos se señala, básicamente, lo que se refiere a este importantísimo ente del Estado. Y hoy, en este momento que vive el país, este órgano está ante un gran dilema que puede ser o bien, resuelto a favor del Estado ecuatoriano o bien una vez más, en contra de los intereses del Estado. Sabemos que la Procuraduría General del Estado está organizando toda la defensa en

el CIADI por el caso Occidental. Cómo ustedes saben, compañeros y compañeras asambleístas, Occidental le ha demandado al Ecuador por miles de millones de dólares, por un acto absolutamente legítimo que realizó el Estado ecuatoriano, cuando fue mandarle sacando del país. Ahora, estamos en el otro ámbito, en el ámbito de la demanda *internacional y lo que ganamos legítimamente en su momento en el año* dos mil seis, lo podemos perder y lo podemos perder por una serie de formas de manejar la defensa del Estado, que no han estado debidamente garantizadas. Y ese ejemplo que puede ser un ejemplo oscuro y perverso, que estamos a punto de ver cómo se resuelve, porque tenemos para los próximos meses el plazo para realizar una adecuada defensa, podría ser que no se resuelva a favor del Estado. Y uno de los problemas que hemos tenido en esa defensa, no solamente es en el carácter del nombramiento del Procurador, sino en el carácter de la Procuraduría. En ocasiones pasadas, entre los funcionarios de la Procuraduría, se han contado personas que estaban ligadas a intereses de la defensa de las transnacionales y por eso es que el Estado ecuatoriano pierde siempre todos los juicios. Aquí en el artículo uno se está diciendo que la Procuraduría General del Estado, es un organismo técnico-jurídico con autonomía administrativa. *Creo que es restringido* señalarlo así. Hay me parece un término legal, de eso no conozco mucho, que es la administración consultiva, debería ser eso, también, la Procuraduría General del Estado y cuando se dice que se le va a fortalecer, debería verse algún mecanismo, no sé si por ley o dejarlo señalado en la Constitución, que los miembros que ejerzan la defensa, del Estado, no solamente el Procurador, hay otras personas ahí, los abogados de la sección internacional, por ejemplo, no deberían tener intereses ligados con bufets, con estudios jurídicos o con simplemente litigios, en los cuales han representado intereses que no son los del Estado. Hemos visto en el pasado que incluso los Procuradores han

estado vinculados a esos ámbitos de defensa privada de las transnacionales y luego han sido procuradores. Debería señalarse aquí a nivel constitucional, así como lo estamos señalando en los ámbitos de control, que pueden incluso tener menor jerarquía que lo que estamos hablando acá y entre los términos que debería señalarse, no solo la prohibición de que estas persona sean parte...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA BORJA DIEGO. ...de la administración de la Procuraduría, también debería contemplarse en el nivel constitucional, los derechos a la repetición a esos funcionarios que pueden estar actuando en contra de los intereses del Estado. Gracias, Presidente. ----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta León Roldós. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Señor Presidente, compañeras y compañeros. Varias preocupaciones. En el artículo dos de la parte de la Corte Constitucional, señala que los tribunales, jueces y autoridades públicas, aplicarán las normas constitucionales, lo cual está correcto, sobre otras leyes. Pero más adelante dice, "también las previstas en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, siempre que sea más favorable a los establecidos en la Constitución". De principio podemos ser teóricos y decir, correcto, el problema es, entonces, ya no hay supremacía en la Constitución. Yo creo que ese es un tema que debemos establecerlo claramente. Y pongo un caso concreto, hace unos minutos se hablaba del tema de los servidores públicos, obreros, empleados, funcionarios. La OIT, salvo la potestad exclusiva del Estado y salvo el cargo de dirección, señala que todos los demás, están sujetos a régimen laboral del Código del Trabajo. Por lo

tanto, los mandatos constituyentes y todos los instrumentos y aún la Constitución que diga lo contrario, no vale, porque nadie puede negar que el trabajo es un derecho humano. Yo creo que éste es un tema que hay que aclararlo debidamente, cuanto más, que el artículo cuatro ya no habla de la aplicación de la norma constitucional, sino que habla de que tiene que elevarse a consulta a la Corte Constitucional cualquier duda sobre la constitucionalidad y la vigencia de tratados internacionales sobre las leyes ecuatorianas. Otra preocupación. El artículo tres señala que, "las normas constitucionales se interpretarán preferentemente, en el sentido que más se ajuste a la voluntad del constituyente, expresada en sus respaldos documentales y al tenor literal del texto". Perdóneme, en derecho, el principio es exactamente lo contrario, el tenor literal es lo que está en la Constitución, luego hay una serie de formas que es lo que se llama indubio, indubio a favor del trabajador, indubio pro reo, y luego de eso, una de las fuentes de interpretación es la historia de la ley. Aquí estamos validando que la historia de la ley es la principal fuente de interpretación. Me parece que estamos haciendo no una heterodoxia jurídica, una barbaridad jurídica es lo que estamos haciendo. Un tema que ya se tocó, es lo referente al recurso constitucional de sentencia, autos y otras decisiones judiciales. Hoy día, la inconstitucionalidad se refiere a normas legales y la ley que se declara inconstitucional, rige hasta el momento de la declaratoria de inconstitucionalidad, no tiene efecto retroactivo esa interpretación. Y nulidad de actos administrativos, ahí sí, cuando la inconstitucionalidad es de actos administrativos, tiene efecto retroactivo, queda sin efecto el acto administrativo, la ley inconstitucional no queda sin efecto lo anterior, solamente para lo futuro. Y ahora se le agrega el tema de las sentencias, autos y otras decisiones judiciales en firme. ¿Qué puede hacer el Tribunal Constitucional? solo declarar la inconstitucionalidad por debido proceso o entra a juzgar la materia de fondo. En teoría,

donde hay amparo constitucional sobre fallos judiciales, es solo la parte de la inconstitucionalidad, no puede juzgar la materia principal de la causa. Esto es, no se trata de una tercera o cuarta instancia, solo dice, se violó la Constitución. Como está aquí puesto, pasa a ser un cuarta instancia. Eso no es posible, señor Presidente. Entonces, ya entra a juzgar la materia de fondo, no es posible. La nulidad de la inconstitucionalidad es respecto al procedimiento, a las pruebas, es decir, lo que violó la Constitución, pero no puede ser juzgar sobre la materia de fondo. Otras observaciones las entregaré por escrito. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Vicente Taiano. ----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. La verdad es que ya, yo no quiero resultar cansón, pero no puedo, lamentablemente, dejar de manifestar lo que pienso y lo que creo. Dicen que ya convocaron a la sesión de mañana, todavía no ha llegado la convocatoria, y dicen también que en la sesión de mañana, ahí está la convocatoria, ojalá que nos hagan llegar por lo menos los artículos para poder amanecernos revisando, porque sino no hay otra forma. Dicen que hay cincuenta artículos para mañana, señor Presidente; casi ochenta hoy día. La verdad es que usted se merece un aplauso, señor Presidente, sinceramente, porque así usted va a aprobar esta Constitución antes del quince, con toda seguridad, al galope que vamos, la vamos a aprobar antes del quince de julio con toda seguridad y así, señor Presidente, se habrá cumplido una cosa que en doctrina jurídica y constitucional se llama el Mandato imperativo, que debimos haberlo puesto en la mañana cuando tratamos y ojalá que lo ponga para bien del país, cuando tratamos el tema del Congreso. El Mandato imperativo que inclusive constaba, señor Presidente, hasta la Constitución de mil

novecientos sesenta y siete en nuestra legislación constitucional, cuando habla de la libertad de actuación, decía el artículo ciento veinte y siete de esa Constitución: "Los legisladores, como representantes de la Nación, deben actuar con sentido nacional en el ejercicio de sus funciones, no están sujetos al Mandato imperativo". Usted sí que está sujeto, señor Presidente, al Mandato imperativo del buró de Alianza País, y créame que les pedí que lo aplaudan porque está cumpliendo a raja tabla el Mandato imperativo que le ha dado el buró, de aprobar al galope y a la carrera esta Constitución. Pero vamos a lo que podamos decir, lamentablemente, al atropello y a la carrera de las disposiciones de lo que se está aprobando. Yo creo que si entramos a analizar las instituciones del Estado, no vamos a alcanzar a analizar nada. Yo veo ahí que hay dos o tres artículos, son varios, son algo así como diecisiete artículos, pero dos o tres artículos son los que deben estar en la Constitución, el resto de los artículos ya están o en la Ley de Transparencia, ya están en la Ley de Declaraciones Juramentadas, ya están en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y si van a hacer otra ley pónganlo en esa ley, pero no en la Constitución, no abundemos de artículos la Constitución. Pero es interesante aprovechar el tiempo para hablar de la Corte Constitucional. Se va a hacer de la justicia en el Ecuador un bicéfalo, va a ser de doble cabeza; acá va a estar la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, manejando la justicia ordinaria; y, acá del otro lado, va a estar la cabeza de la Corte Constitucional que ustedes están creando. De lo que veo, por lo menos, este articulado, aquí no se refiere realmente a una Corte como tal, aquí, porque no veo, pues, que haya otras instancias más allá de la Corte Constitucional Nacional o la omnipotente Corte que se va a designar. Me parece que los artículos correspondientes a la justicia ordinaria, se habla de los jueces constitucionales, debió haberse hablado en este capítulo, porque aquí estamos hablando de una Corte y una Corte no es

solamente tres salas de la Corte Suprema Constitucional, sino que es toda una institucionalidad. Aquí debió haberse hablado de los jueces constitucionales, que son quienes va a conocer, seguramente, los recursos de amparo, los recursos de habeas data y todas las acciones constitucionales que podamos poner en esta Constitución. Pero en todo caso, lo que sí está a la vista, es que aquí hay un bicéfalo en la administración de justicia del Ecuador y que hay una Corte todo poderosa, una Corte omnipotente, que la han llamado la Corte Constitucional, que no es otra cosa, que el Tribunal de Garantías Constitucionales que existía antes y el Tribunal Constitucional que existe ahora. Y hay que hacerle acuerdo al pueblo ecuatoriano, cómo este Gobierno se tomó ese Tribunal de Garantías Constitucionales a palos y a piedras, para poder mantener sumisos a esos magistrados de ese Tribunal. Pero vamos viendo el articulado. El artículo tres, me llama la atención como abogado, porque dice que "las normas constitucionales se interpretarán preferentemente, en el sentido que más se ajuste a la voluntad del constituyente". Eso es indebido, y aquí hay varios abogados en esta Asamblea. ¿Por qué es indebido? porque las normas constitucionales se deben interpretar de acuerdo a todo un contexto, porque la Constitución constituye todo un sistema político, por eso dentro de ese sistema político, la interpretación debe ser principalmente literal, es decir, debemos inclusive concatenar una sección, un capítulo constitucional que a lo mejor no lo encontramos explicación, pero si revisamos el contexto de la Constitución, la explicación debe estar en ese mismo contexto, eso es doctrina constitucional. Yo les recomiendo a los compañeros de la Mesa, que lean a Linares Quintana, sobre el Tratado de Interpretación Constitucional, para que revisen que no hay que interpretar de acuerdo al espíritu del Asambleísta, hay que interpretar literalmente la Constitución, esa es la principal fuente de interpretación constitucional.

Vamos a ir al artículo cuatro, y dice que "se suspenderá la tramitación de la causa y se remitirá la consulta a la Corte Constitucional, que deberá resolver sobre la constitucionalidad de la norma en un plazo de hasta cuarenta y cinco días". Por Dios, porque dañamos lo que está bien hecho. Yo tengo por aquí la actual Constitución, yo les pido por favor que la revisen y revisen el artículo dos siete dos, dos siete tres y dos siete cuatro de esta Constitución. Aquí está absolutamente claro la forma cómo se debe proceder cuando hay una contradicción entre normas de menor jerarquía con la Constitución. Yo creo que era mucho más importante y mucho más fácil darle la posibilidad que se le da aquí al juez, de declarar inaplicable por inconstitucional una disposición de la ley. No podemos, lamentablemente, podríamos pasarnos haciendo un verdadero análisis de ese tema, pero yo quiero llegar a tratar de correr aunque sea analizando un poco más las disposiciones. El artículo cinco, dice que "la Corte Constitucional es el órgano máximo de control interpretación constitucional". Yo les pido, compañeros y amigos, porque muchos de ustedes, con muchos de ustedes nos hemos hecho amigos en esta Asamblea, que ustedes me digan y me indiquen, en cuáles países del mundo la Corte Constitucional interpreta la Constitución. No, señores. En la mayoría de los países del mundo, quién interpreta la Constitución es el Parlamento, como se llame, la Asamblea como le vamos a llamar, no la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a revisar el espíritu que ustedes tuvieron para hacer muchas disposiciones constitucionales. Sigamos. En el artículo seis, yo me doy cuenta que se quiere hacer toda una Asamblea, perdón, una Corte absolutamente omnipotente, porque dice: "los Magistrados de la Corte Constitucional, no estarán sujetos a juicio político, ni podrán ser removidos por quienes los designen. No podrán ser responsables ni civil ni penalmente por los pronunciamientos y los fallos emitidos en el ejercicio de sus funciones, su destitución será decidida por las dos

terceras partes de sus integrantes". Que linda cosa, la Corte Constitucional que es designada políticamente, porque no nos engañemos, a quién queremos engañar, esta Corte Constitucional va a ser el non plus ultra de la politización de la justicia constitucional de este país, porqué nos engañamos, ya vamos a llegar a la conformación y verán que tengo toda la razón. Entonces, decía este artículo seis, que estos señores omnipotentes solamente ellos mismos podrán, ellos mismos podrán... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Ellos mismos van a poder destituirse. Qué pena, señor Presidente. Qué pena, que pena que no podamos analizar. Pero vamos al artículo de la designación. Cómo se designan, con dos representantes de la Función Legislativa, políticos, o es que van a mandarnos a dos curas de la Función Legislativa, para elijan a la Corte Electoral; dos representantes de la Función Ejecutiva que van a mandar a dos monjitas, no señor, van a mandar a dos políticos; y dos representantes de la Función de Control Social, que seguramente estarán controlados por la Función Ejecutiva. Hay que decirle la verdad al país, vamos a institucionalizar la politización de la justicia en el Ecuador.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Suspendo la sesión por veinte minutos, para que puedan tomar un descanso y un café.----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Les invitamos a un refrigerio a los asambleístas. Gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA EN RECESO A LA SESIÓN

CUANDO SON LAS VEINTE HORAS DOS MINUTOS. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Les invitamos a verificar que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. Gracias.----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, tenemos quórum.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS VEINTE HORAS CUARENTA Y UN MINUTOS. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Se reinstala la sesión. Tiene la palabra la asambleísta Ximena Bohórquez.----------

LA ASAMBLEÍSTA BOHÓRQUEZ XIMENA. Gracias, señor Presidente. En el capítulo tres, de las instituciones de protección pública, quiero dar fe de una experiencia que acabo de pasar, para que se den cuenta que lo que está escrito en el artículo cuatro de la equidad de género, es inaplicable. Ustedes saben que mi primera hija se gradúa este diez de agosto como Subteniente del Ejército. El año anterior convocaron a los padres de familia de los cadetes de la Escuela Superior Militar, y nos hablaron de las distintas ramas del Ejército a través de una película, luego de lo cual, pidieron que se retiren los padres de los cadetes hombres y que nos quedemos solo los representantes de las cadetes mujeres. Entonces, nos dijeron que las mujeres solo podían seguir cinco ramas; de las cinco especialidades más relegadas dentro de la Institución militar. Obviamente se generó un murmullo, y yo hablé, y dije, cómo es posible que ésta Institución que ha abierto las puertas para la población femenina, y luego de lo que ellas han pasado, muchas pruebas en lo fisico, en lo deportivo, en lo académico, ya casi cerca de finalizar su carrera, las limiten enviándoles solo a esas cinco

especialidades. El Director de la Escuela Superior Militar, me contestó, usted tiene toda la razón, pero no es posible, porque en los destacamentos en aquellos recintos militares no tenemos la infraestructura física para darles el albergue, no hay, porque deberíamos construir dormitorios para mujeres, baños para mujeres, y eso la Institución militar no posee. Por lo tanto, seamos realistas, si queremos llegar a eso, ojalá en el Presupuesto del Estado se entregué los fondos y los recursos para que también esa equidad de género que tanto anhelamos sea una realidad en la rama militar. Quiero también, dar mi criterio en lo relacionado a que las Fuerzas Armadas, han sido el factor dirimente en la crisis política. No es verdad, ya no le mientan al país, no es cierto. ¿Por qué digo esto? porque los Fuerzas Armadas no firman el abandono del cargo. Las Fuerzas Armadas no firman la demencia, no, nunca lo han hecho. Tienen que saber que los golpes de Estado, los hacen las élites, porque las élites se quedan en el poder. Por eso, el famoso documento del BID, que señala que el Ecuador vive un régimen presidencialista, también es falso. De qué presidencialismo me hablan, si tenemos golpes de Estado cada dos años; de qué presidencialismo estamos hablando si el Ecuador siempre ha practicado un parlamentarismo, con una mayoría congresil que sube y baja Presidentes, cuando le da la gana, desde el Congreso han maniobrado al Ecuador a su antojo. El último ejemplo, el veinte de abril del dos mil cinco. La mayoría compuesta por el partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, y se sumaron el Movimiento Popular Democrático y Pachakutik, aludiendo abandono del cargo; mientras tanto, el Jefe de Estado, en ese mismo momento estaba posesionando al nuevo Comandante de la Policía; y yo veía en la pantalla, cómo la abogada Cinthya Viteri, le ponía la Banda Presidencial al vicepresidente Alfredo Palacio, violando flagrantemente la Constitución, porque inclusive en el Congreso golpista, acumularon

apenas sesenta votos, cuando las dos terceras partes de cien, en cualquier parte del mundo son sesenta y siete. Aparte de otros temas, igualmente violatorios como es el de sesionar en un lugar ajeno al Congreso, tal como hacen los ladrones que buscan una cueva para repartirse el tesoro, en este caso, el tesoro era el poder, y se repartieron al viejo estilo de una política tronchista, eso es lo que tenemos que sepultar en esta Asamblea número veinte, y tenemos que crear una Constitución que realmente sea unida a ese clamor ciudadano de hacer justicia. Debemos escribir no en este capítulo, sino específicamente en la Función Ejecutiva, cuando se declara el abandono del cargo, quién es el que va a calificar el abandono del cargo, porque de lo contrario estamos dejando vacíos que la historia no nos va a perdonar. Gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta César Grefa.----------

EL ASAMBLEÍSTA GREFA CÉSAR. Buenas noches, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Gracias a la guayusita todavía estamos resistiendo. Compañeros, voy a ser puntual en cuatro aspectos: En la sección tercera de los servidores públicos, los derechos, deberes, y la profesionalización, nosotros habíamos presentado una propuesta considerando que los funcionarios públicos de la Región Amazónica, de las provincias fronterizas y de Galápagos, se encuentran en situaciones totalmente diferentes a otras provincias del país. Por lo tanto, considero interesante e importante que debe incluir un artículo más donde diga que los funcionarios públicos que presten sus servicios a la Región Amazónica, Galápagos y zonas fronterizas, se les otorgará un trato preferencial en lo económico, en razón de la situación geográfica: Por las dificultades y el alto costo para acceder al área de

trabajo, en especial en el sector rural. Compañeros, esto justifica, un profesor para trasladarse a una comunidad, tiene que caminar o tiene que contratar una avioneta para ir desde la Shell a Transcutucu, del poco sueldo que recibe el dicho profesional, él hace más gastos que antes que recibir para su bienestar familiar. Por lo tanto, situaciones de esta naturaleza, o a veces nosotros decimos nuestros profesionales tanto en la salud o educación, gracias a las boas que existen tiene que transportarse en ello. Entonces, no creo que es justo compañeros, aquí como ecuatorianos tenemos que ser conscientes para apoyar a los compañeros profesionales o funcionarios públicos. Por lo tanto, dejo en consideración de la Mesa, que los compañeros, los ciento treinta asambleístas de la República del Ecuador, nos den una mano en este sentido. Compañeros, en lo que respecta al artículo diez, para garantizar la formación continua del servidor público, se debe considerar al SECAP como pilar fundamental en la instrucción y debe fortalecerse. Porque aquí está planteando la Mesa, un sistema de capacitación, actualmente contamos ya con el servicio de capacitación profesional. Porqué no lo fortalecemos al SECAP, para que nuestros funcionarios públicos puedan constantemente mejorando su nivel de profesionalización. En lo que respecta de las instituciones de protección pública. Ha habido algunos comentarios, he escuchado a muchos asambleístas sobre este tema, que es fundamental para nosotros compañeros. En el artículo cuatro, si me pueden proyectar por favor el articulado respectivo. En el primer inciso se plantea que "los Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional, están sujetos a las leyes específicas que regulan su sistema de asensos, promociones, derechos y obligaciones con criterio de equidad de género". Hasta ahí han planteado los compañeros, "se garantizará su estabilidad y profesionalización". Considero importantísimo compañeros, muchos compañeros ya lo manifestaron, equidad de género y étnico, hemos

hablado con el compañero Luis Hernández, quién es ex miembro de las Fuerzas Armadas, que hemos coincidido, que es importante tomar en cuenta a los pueblos y nacionalidades compañeros afroecuatorianos, para que también sean considerados y, tengan los mismos derechos. Alguien decía de los Iwias, de los Arutam, de los Güilli Güilli, de los Hombres Rana, Hombres Boa, pero hasta ahí nuestros compañeros han estado en la primera línea de la frontera, y hasta ahora siguen compañeros, y, yo creo que tienen todo el derecho los compañeros para que continúen, para que puedan tener accesibilidad, decíamos que en algún momento por falta de recursos económicos, eso ha sido la parte que no ha permitido que nuestros compañeros físicamente, intelectualmente son capaces, pero la parte económica ha limitado. *Entonces, creo que es indispensable hoy considerar esto y* posteriormente en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ver, dar estas facilidades como becas para que ellos se puedan ir a formar, a profesionalizarse no solo en el país sino a nivel internacional. Porque eso va a permitir fortalecer a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y que con profesionalismo puedan ayudar a cuidar las fronteras y los territorios de la República del Ecuador. Compañeros, por último, para las nacionalidades y pueblos, considero también, de los pueblos montubios de pronto, de los pueblos, afroecuatorianos. Cuando se plantea sobre los Consejos Sociales para la Igualdad, hay argumentos donde dice que ha habido problemas para construir políticas universales, no han *logrado transversalizar sus enfoques en la* estructura, déficit de representatividad política, aquí dejan a un lado lo que es las instituciones donde se dice Consejo. Consejos para la Igualdad. Los Consejos Nacionales en el artículo uno, para la igualdad son cuerpos colegiados compuestos por representantes de la ciudadanía organizada y no organizada, y de la Función Ejecutiva, tienen por objeto transversalizar en la agenda pública, la política universal de las

temáticas a su cargo, género, etario, étnico, trabajo, discapacidades y migrantes. Son parte de la Función Ejecutiva y sus funciones son las de proponer política públicas en la materia que le corresponda. Monitorear y hacer seguimiento de sus avances, coordinarán sus acciones con las entidades rectoras de la política pública, según lo establezca la ley. Compañeros, las nacionalidades y pueblos a través dc la lucha se consiguió el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, con este artículo prácticamente estamos dejando bajo la tierra. Porque de alguna manera esta institución, aunque no habrá llegado a muchas de las comunidades, pero si se ha trabajado a través de una planificación participativa, ha sido un organismo técnico de planificación, autónoma, administrativa y financiera. Lo que los Consejos Provinciales, los Municipios o los Ministerios no han llegado a estos lugares tan lejanos de la patria, a través de estas instituciones puntuales.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA GREFA CÉSAR. De alguna manera si se ha estado cumpliendo. Si es que queremos dejar a un lado, considero que primero se tienc que hacer una evaluación de impacto, económico, social, ambiental. Compañeros, nosotros no estamos viendo a las personas, aquí la parte interna, lo que sucede en estas instituciones se debe arreglar y debe mejorar, hay que fortalecer a estas instituciones. Muchisimas gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Héctor Terán.----------

EL ASAMBLEÍSTA TERÁN HÉCTOR. Gracias, compañero Presidente. Buenas noches compañeras y compañeros asambleístas: El tema al que

me voy a referir es el relacionado con la administración pública. La administración pública debe ser moderna, tecnificada; en la administración pública se debe tomar muy en cuenta el talento humano, lo más importante en el sector público y en todo lo que tengamos que hacer en la vida cotidiana. Es necesario que la Constitución disponga que en la nueva Ley Orgánica del Servicio Público, se norme mediante un sistema único de recursos humanos y remuneraciones para todo el Sector Público sin excepción. Un compañero asambleísta dijo, y se refirió a la Función Ejecutiva, no se trata única y exclusivamente de la Función Ejecutiva, compañeras y compañeros asambleístas, es el momento histórico para que esta noche en este debate, se apruebe de una vez por todas una sola Ley Orgánica del Sector Público, para que eliminemos la serie de privilegios que históricamente los Congresos han venido otorgando a cambio de favoritismos en el resto de funciones del Estado. Es imperioso contar con una escuela de gobierno para la profesionalización y la capacitación de todo el Sector Público también, como existe este momento en algunos países, como Francia, España, Brasil, Argentina, Chile, México, entres otros. Nos preguntamos por qué en el Ecuador no crear esta escuela de capacitación. En la sección primera de las instituciones del Estado, en el artículo uno. Son Instituciones del Estado. A los organismos y dependencias constantes en el artículo ciento dieciocho de la actual Constitución, de la vigente, se incorpora ahora la función de Transparencia y Control Social. El compañero Virgilio Hernández en su intervención expuso las funciones, las competencias específicas de esta función. En el artículo dos, se han unificado los artículos ciento diecinueve y ciento veinte de la actual Constitución mejorando su texto, los dignatarios, ahora estamos incorporando también a los magistrados que no habían sido tomados en cuenta en la Constitución anterior, autoridades y servidores públicos de las entidades del Estado, de sus

organismos y dependencias, que no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley, no serán exentos de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones u omisiones. En la sección segunda de la administración pública. Sus principios y acceso. En el artículo ciento veinticuatro de la actual Constitución se ha procedido, se ha ordenado de mejor manera en tres articulados en nuestra propuesta, sobre la base y necesidad nacional, que vienen a ser los siguientes: Artículo número tres. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de, eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación y transparencia. En el artículo cuarto. El ingreso, acceso y la promoción se realizará mediante concurso de mérito y oposición y no a través de la dedocracia, como se ha venido llevando a cabo esos procesos. En la sección tercera de los servidores públicos, derechos, deberes y la profesionalización, queremos subrayar esta palabra. Artículo cinco. Los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, no puede ser que solamente los obreros, los trabajadores, sean sus derechos irrenunciables, también nosotros los servidores públicos planteamos y esta es una propuesta fundamental, para que nuestros derechos tampoco puedan ser vulnerados en los procesos, cuando hay cambios de gobierno de manera particular. La Ley Orgánica de Servicio Público, definirá el organismo superior responsable de la rectoría en materia de recursos humanos y remuneraciones para el sector público y normará el ingreso, ascenso, promoción e incentivos, régimen disciplinario obviamente, la estabilidad un sistema de remuneraciones justas y equitativas. Indemnización por supresión de puestos o retiro voluntario para acogerse a los derechos de la jubilación, para fortalecer y dejar constitucionalizado lo que se hizo con el Mandato número dos. Proponemos la creación de un organismo

superior, tiene que ser un organismo superior a la actual Secretaria Nacional de Desarrollo Humano del sector público, porque la SENRES actualmente no ha respondido a una necesidad nacional. Éste estará integrado por representantes de las diferentes funciones del Estado, que será el encargado de cumplir con rectoría, la rectoría y control en el sector público. En el articulo seis, de las prohibiciones descritas en el artículo ciento veintiuno de la Constitución actual. Se incorporará las acciones de discriminación de cualquier tipo y las demás conductas que señale la ley. En el artículo diez, para garantizar la formación continua del servidor público, el Estado organizará el Sistema Nacional de Formación y Capacitación del Servidor Público, que estará integrado por todas las escuelas e institutos y demás que señale la Ley Orgánica del Servicio Público que regule el funcionamiento del sistema. Proponemos nuevas incorporaciones que son las siguientes: Uno. Desconcentración de la administración pública hacia las diferentes instancias de sus instituciones. Debe ser de manera progresiva e integral en todos sus niveles, con autoridad, capacidad de decisión, recursos, responsabilidad, que permita un servicio directo y ahorro de recursos a los y las ecuatorianas; Dos. Apoyo a la profesionalización y capacitación a los servidores públicos, a través de la Escuela de Gobierno; Tres. Normar en materia de gestión de recursos humanos y remuneraciones al sector público, sin excepciones, mediante una Ley Orgánica del Servicio Civil, que me he referido; Cuatro. Que se cumpla con la carrera administrativa; es decir, que todo ingreso, ascenso, promoción a la administración pública, sea mediante concurso de méritos y oposición; Cinco. En la nueva Ley Orgánica de Servicio Público también deberá constar conceptos como: estabilidad, sistema de remuneración justa y equitativa, indemnización -que hice referencia- por la supresión de puestos y por renuncia para acogerse a la jubilación". El artículo ciento veinticuatro de la Constitución vigente, en el tercer inciso indica: "Las

remuneraciones de los servidores públicos serán proporcionales a sus funciones, eficiencia y responsabilidades". Por ello es necesario se agregue un inciso en el artículo cinco del proyecto que estamos debatiendo, el mismo que diga: "La remuneración de los servidores públicos será justa y equitativa, proporcional a su función, profesionalización, capacitación, responsabilidad, experiencia y situación geográfica". El compañero Grefa, un ciudadano que vive en el Oriente, ha hado como ejemplo el traslado de un maestro, el costo que eso significa que su remuneración no le alcanza para subsistir; por eso, es importantísimo, y recalco, la necesidad de que quede constitucionalizado la palabra "situación geográfica", para que gobiernos autoritarios, como el que hizo aprobar la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, a sus propios coterráneos les quitó la situación geográfica. Ahora tenemos que constitucionalizar, con el apoyo de ustedes, compañeras y compañeros asambleístas. Ese es el planteamiento que me permito hacer, señor Presidente. Pasaré por escrito al compañero Presidente de la Mesa. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Pablo Lucio-Paredes. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LUCIO-PAREDES PABLO. Gracias. Voy a ser breve. Esta mañana no hablé para tratar de colaborar con el espíritu de un mejor uso del tiempo y, además, porque es importante oír y aprender de la gente que sabe, y porque era importante entender si es que, realmente, la propuesta de la Función Legislativa de hoy, realmente, equilibraba o no equilibraba a la propuesta de la Función Ejecutiva que discutimos hace dos o tres días. Y que cuando muchos criticamos una serie de aspectos de la redacción de la Función Ejecutiva, se nos dijo que había que ser pacientes, que había que esperar los textos de la Función Legislativa para ver cómo se equilibraban, realmente, en esta

propuesta las dos funciones del Estado. Y como decía, he venido hoy a aprender de los demás, y me ha sorprendido oír a los especialistas, a León Roldós, a Julio Logroño, a Vicente, a otras personas, que han expresado que ese equilibrio entre la Función Legislativa y la Ejecutiva no se da en estos textos. *León Roldós lo calificó de manera tajante, este* es un sistema monárquico, ni siquiera monárquico-constitucional, sino simplemente monárquico. Y eso es extremadamente peligroso, y solamente podemos tener dos interpretaciones ante toda la argumentación que se dio, ante todos los elementos muy claros, artículo por artículo. La una es la de buena fe y creer que, simplemente, son errores, falta de profundidad en el análisis de la Mesa, y que, obviamente, todas estas observaciones serán corregidas para el segundo debate. La otra es de creer, y ojalá no sea eso, que realmente la visión que se tiene en la mayoría y en la Mesa respectiva es, realmente, una visión de querer hacer un sistema monárquico y de darle, en consecuencia, al Presidente de la República monarca todos los poderes en relación a los otros poderes del Estado. Ojalá vayamos por el camino de la buena interpretación. En todo caso, he entregado un extenso informe que está en sus manos desde la tarde, en el cual planteo tres elementos: Uno, una propuesta diferente del Consejo de Estado. Aquí se ha criticado mucho la propuesta del Consejo de Estado, una simple especie de reunión amistosa, que no puede ser. He hecho una propuesta diferente de un Consejo de Estado con otro concepto, estoy seguro mucho mejor. En segundo lugar, estoy haciendo propuestas concretas sobre el tema de la defensa y he recogido, simplemente, un largo informe que me ha enviado la doctora Bertha García, que es en el ámbito de la sociedad civil ecuatoriana, sin lugar a dudas, una persona más conocedora de las relaciones entre la sociedad civil y la sociedad militar, y que ha enviado un extenso informe para que sea leído y ojalá, realmente, sea leído con profundidad. Bertha lo ha preparado con la

mejor buena fe y le he pedido a Bertha porque ella está así, aparte de mi lista, era la alterna número dos de nuestra lista; espero que sea leído eso con profundidad. Y, simplemente, quiero terminar deseándonos a todos una feliz mañana de trabajo el dia martes, primero de julio, porque con la mezcla que tenemos en el primero punto o en el segundo punto, de los derechos de la naturaleza y los derechos de la comunicación, lo único que podemos tener es una discusión limitada y poco seria, pero una discusión muy mezclada. Como decia Martha Roldós, o vamos a tener que comunicar a la naturaleza o vamos a tener que naturalizar a la comunicación o vamos a tener que hacer cualquier tipo de mezcla. Pero, no es serio, por favor, presentar en un mismo punto los derechos de la naturaleza y los derechos de la comunicación. He planteado ya con la firma de los asambleístas respectivos que haya un cambio en el Orden del Día de mañana para separar esos dos temas en dos puntos. Espero, no habiendo tenido éxito esta mañana y no habiendo tenido éxito en tantas otras oportunidades, espero que mañana prime el sentido común y que la mayoria apoye este cambio en el Orden del Dia que es lo mínimo que podemos esperar para separar dos temas tan diferentes, como la naturaleza y la comunicación. Si no lo hacemos tendremos una sesión poco responsable, pero divertida. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Logroño.----------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Muchas gracias, señor Presidente. Realmente, ha sido un debate constructivo, se han escuchado criterios importantes respecto de los temas que se han incluido en el Orden del Día, motivo por el que, comedidamente, señor Presidente, con el nivel de altura que se ha debatido esta tarde, le pido que no se vuelva a

incluir un Orden del Día tan mezclado y con tantos temas en un solo punto esencial del Orden, porque existen temas de gran trascendencia que merecen análisis profundo, como el caso de la Procuraduría General del Estado, nada más, como un órgano máximo de control jurídico, merece un análisis, al menos, de un debate solo; igual, la Corte Constitucional es el máximo tribunal de justicia constitucional y garante de derechos que no puede ser tomado a la ligera y, realmente, no da la oportunidad con tantos temas de hablar con solvencia y de debatir a profundidad cada uno de ellos. Sin embargo, señor Presidente, rápidamente y en medida de lo que alcance en el tiempo, me permito hacer las siguientes observaciones sobre el tema del articulado relacionado con la Corte Constitucional. Entiendo que el objetivo de la instalación de la Asamblea y el de la nueva Constitución es tratar de despolitizar los órganos de justicia, es tratar de conseguir un equilibrio de poderes; y, sobre todo, al crear una Corte Constitucional, entiendo que el propósito esencial es que la garantía de derechos fundamentales tenga una justicia al mismo nivel que el órgano de justicia ordinaria. Pero, por garantizar derechos sustanciales, que es la parte esencial del trabajo de un Estado, no se puede malinterpretar este propósito y poner a una Corte Constitucional sobre una Corte de Justicia ordinaria, porque tienen que ser paralelos y autónomos. Los fallos del un tribunal máximo de justicia no pueden ser revisados por el otro y, obviamente, viceversa; pues los mecanismos de la justicia ordinaria para garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas y del debido proceso, ya constan dentro del procedimiento específico de juzgamiento en cada uno de estos temas, porque existen, señor Presidente, permítame recordarle, recursos de nulidad, recursos de apelación, recursos de casación, recursos de revisión, inclusive dentro de los cuales antes de resolver, en primer término, se cita el respeto y el cumplimiento de las normas de los derechos fundamentales

y del debido proceso. En el artículo uno, debe especificarse que serán nulos los actos jurídicos de cualquier órgano público, cuya declaratoria será de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. La declaratoria de nulidad no opera per se ni tampoco se produce de pleno derecho, sino que debe especificarse que dicha declaratoria de nulidad o de inconstitucionalidad producida por un acto contrario a la norma suprema debe tener el procedimiento especificado. En el artículo cuatro, señor Presidente, sugiero se elimine la posibilidad de que se remitan a la Corte Constitucional los procesos en cuyos trámites se considere involucrada una norma inconstitucional, pues esto lo único que haría es retardar los procesos y obstruir los procesos, ya que tendrían la posibilidad las partes litigantes de poner a consideración de la Corte Constitucional cualquier tema, cualquier providencia, cualquier decreto o cualquier auto dentro de un proceso ordinario. Esta facultad ya está especificada, como bien indicó el doctor Taiano, con la facultad de los jueces y funcionarios de la administración pública, de solicitar la declaratoria de inaplicabilidad de determinada norma, cuando la encuentre contraria a la norma constitucional. En el artículo cinco, no podemos permitir que la Corte Constitucional sea la encargada de interpretar las normas constitucionales o de interpretar el espíritu de la norma constitucional, pues esto ha sido facultad en todo el mundo que respeta un procedimiento democrático y un proceso republicano de administración, única y exclusivamente por el Parlamento, se llame Asamblea, se llame Congreso o se llame como se le quiera llamar en un futuro. Esta es una facultad natural y exclusiva de los legisladores y no de los juzgadores, por más juzgadores constituyentes o constitucionales que sean. Falta designar en el artículo seis la representación de la Corte Constitucional, como se lo hace muy bien en el articulado correspondiente a la Procuraduría General del Estado. Deberá decir que ejerce la representación el Presidente de la Corte Constitucional. En el

artículo ocho, para garantizar que la Corte Constitucional sea especializada y sea de calidad, tratándose de que aquí se le da una jerarquía incluso superior a la Corte Suprema de Justicia, deben exigirse requisitos fundamentales para los magistrados de dicha Corte, como por ejemplo que tengan al menos título de cuarto nivel y especialización en materias constitucionales y, por lo menos, que no hayan pertenecido en los últimos diez años a partidos o movimientos políticos, esto es una garantía de que aquellos no tienen convicciones políticas y que, por lo menos, podrán actuar de forma independiente, si es que el tema es despolitizar definitivamente la Corte Constitucional. Por otro lado, para completar este mismo criterio, en el artículo nueve no podría establecerse jamás este método de designación de los magistrados, sino, más bien, que se elijan por concurso de merecimientos y oposición público, absolutamente transparente y calificado de forma matemática, para que los primeros que hayan logrado la calificación más alta, automáticamente, sean designados como magistrados de la Corte y no se pretenda de esta manera meter la mano a la Corte Constitucional. Si es que pretendemos designar de esta manera, en donde existe una politización profunda de quienes designarán a los magistrados, estamos aceptando que volvemos a tener injerencia en la designación de la Corte, que para colmo será la encargada de revisar los fallos como una cuarta instancia de la Corte Suprema de Justicia, lo cual es absolutamente inaceptable. Señor Presidente, para colmo, existe una transitoria que no está en discusión en el Pleno, pero que estaba en la Mesa tres, mediante la cual la Asamblea Constituyente dejará designados a los nueve magistrados de la Corte Constitucional, lo cual es absolutamente ilógico si pretendemos despolitizar a esta Corte. Eso sería, señor Presidente, una aberración a los principios de la independencia jurídica, cuando este órgano pretenda designar a los señores magistrados de la Corte Suprema o de

la Corte Constitucional por nueve años, y para colmo que empiece recién la revisión y el cambio de la tercera parte que se cstablece dentro de la asignación a partir del tercer año de nominación. Cuidado, señor Presidente, con que estas normas pretendan pasar como transitorias en la nueva Constitución Política sometida a referéndum. Otra parte esencial, señor Presidente, es que en el numeral cinco del artículo once se establece como facultad de la Corte expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante. La jurisprudencia, señor Presidente, se entiende que son fallos de triple reiteración sobre el mismo tema, que, obviamente, por la doctrina, para quienes algo conocemos de derecho, se vuelve de aplicación obligatoria para los jueces inferiores sobre este tema. Esta jurisprudencia no hace falta que conste como un numeral, que luego pueda ser reformado, esto ya es un principio jurídico que los fallos de triple reiteración serán aplicados de forma *obligatoria por todos los jueces. Señor* Presidente, en el numeral nueve, a más de conocer y sancionar las sentencias constitucionales, debe específicamente dársele la facultad de que la Corte Constitucional pueda ejecutar las sentencias, como tienen las facultades los jueces inferiores para proceder a la ejecución de los fallos. Si es que no le damos la facultad de ejecutar...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. Si no le damos la facultad a la Corte de ejecutar las sentencias constitucionales, nada habremos logrado con otorgarle las facultades, que se le están otorgando aqui. Quedarán, simplemente, como letra muerta, como tantas cosas se han quedado en este momento en la Corte Constitucional. El último minuto que me queda abordaré para la Procuraduria General del Estado, simplemente para solicitarle, señor

Presidente, que dentro de las atribuciones en el artículo tres, debe especificarse que el asesoramiento jurídico debe ser de carácter vinculante; caso contrario, las entidades consultantes no harán caso alguno al criterio del señor Procurador General del Estado. La vinculación de las consultas y de la absolución de estas consultas del Procurador, es lo único que garantiza un respeto al criterio del supremo. Y, por otro lado, debe otorgársele la facultad de emitir los informes previos en contratación pública, que garantizará que los procesos de contratación sean transparentes y pegados a la ley, para que después podamos evitar el control posterior. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Creo que es importante una pequeña precisión, y disculpen que haga este comentario, pero me parece que por la importante intervención que acabamos de escuchar, creo que la Mesa será suficientemente permeable a la calidad del debate y las recomendaciones. Pero, algo que no podría dejar pasar es que la Corte Constitucional es una propuesta y una transitoria no puede intervenir en una propuesta; por tanto, si es que alguna vez alguien escribió eso, habrá estado despistado, no creo que la Asamblea vaya a aprobar jamás una cosa de esa naturaleza. Lenin Hurtado. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros asambleístas: El control de la constitucionalidad es un tema de extraordinaria importancia, habida cuenta de que se trata de que los ciudadanos y las ciudadanas hagan efectivo los derechos que la Constitución les otorga. Es por eso que es importante que el artículo uno de la Sección primera, señale la supremacía de la Constitución, reitere lo que es un principio universal, que es que las normas constitucionales prevalecen sobre cualquier otra.

Y establece consecuencias de que se apruebe una norma en contra de lo que dice expresamente la Constitución. El articulo dos señala qué ocurre en el evento de que haya contradicciones, choques entre una norma secundaria y la Constitución, y hace la excepción correcta, a mi juicio, de que en el evento dc que hayan derechos que se otorguen en tratados o convenios internacionales que no son otorgados por la Constitución expresamente, los ciudadanos y las ciudadanas pueden invocar esos derechos dentro de nuestro país. Y eso ya aprobamos nosotros, a propósito de los derechos civiles, cuando deciamos que en materia de derechos fundamentales se aplica el principio de cláusula abierta. No tenemos por qué asustarnos cuando se señala eso, porque además es correcto; porque los derechos fundamentales, como aqui se ha *dicho en alguna ocasión, son* derechos humanos constitucionalizados, me parece absolutamente válido que se establezca quc en ese evento, en el evento de que la Constitución no contemple esos derechos, pues se puede invocarlos de todas maneras. Siendo tan importante el ejercicio de los derechos constitucionales, también debe haber mecanismos para su efectivo ejercicio. El control difuso de la constitucionalidad en el país ha tenido dos facetas, a mi entender: la primera, favorable en la medida que los ciudadanos y las ciudadanas pueden hacer efectivo más rápidamente, con mayor facilidad el ejercicio de sus derechos. Pero ese mecanismo de control de la constitucionalidad, también ha hecho que la dispersión de los fallos diluya el ejercicio de esos derechos. De suerte que, es correcta la conformación de un Tribunal Constitucional que, entre otras cosas, y la función en general que incluye jueces de primera instancia, que permitan ejercer los derechos ante jueces especializados. Porque lo que ha pasado ahora es que jueces de lo Civil, lo Penal, tribunales, han permitido defender o al menos eso se pretende: defender los derechos fundamentales *violados de cualquier* forma. Si tenemos jueces,

tribunales, cortes constitucionales especializadas, por supuesto que los fallos que ya serán sentencias, no resoluciones, como el actual Tribunal Constitucional emite y por eso es que, actualmente, no hay jurisprudencia en materia constitucional, no existe eso; porque, insisto, lo que el Tribunal Constitucional actual hace o emite son resoluciones. Entonces, con las sentencias de triple reiteración, solamente entonces se originaría la jurisprudencia de obligatoria aplicación, como aquí también se ha señalado. También el Tribunal Constitucional debe interpretar la norma constitucional, a pesar de que el artículo tres que establece normas de interpretación, tarea, por cierto, que se le ha dado a la Mesa diez de Legislación y Fiscalización, interpretación y reformas constitucionales; por lo tanto, realmente no sé qué hace esta norma aquí, cuando hay un trabajo de la Mesa diez, que aún no ha sido presentado y que hace relación exactamente a interpretación constitucional. *La Corte Constitucional en su conformación se ha dicho*, se ha objetado el mecanismo de selección de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, objeciones que yo comparto, pero no por las razones que se han dicho aquí, se ha dicho que hay que despolitizar, despolitizar la Corte Constitucional. Y un tema grave, que hay que hablar con claridad y con propiedad. Despolitizar la Corte Constitucional no es posible, porque resulta que son seres humanos los que estarían en la Corte Constitucional, y los seres humanos, decía el filósofo Aristóteles, los seres humanos somos animales políticos, esencialmente, y sociales; y quien no es político o es un Dios o una bestia, decía Aristóteles. Yo no veo aquí ningún altar, así que hay que tener cuidado cuando nos calificamos de apolíticos o pretendemos hacer de la Corte Constitucional apolítica. Tener cuidado con eso, porque no habiendo altares sería lo otro, y sería gravísimo que haya ese tipo de integrantes en la Corte Constitucional. Pero, evidentemente, insisto, a lo mejor no es la mejor alternativa la que se plantea en el

texto que analizamos. A nuestro entender, y ha sido una propuesta nuestra en el Movimiento Popular Democrático, debería ser lo ideal que los ciudadanos y las ciudadanas elijamos no solamente a los ministros de la Corte Constitucional, sino a la Corte Suprema y todos los organismos de justicia y de control de este país. Eso sería lo ideal, hacia allá tendríamos que ir; pero, la propuesta es esa y estamos debatiendo para buscar una alternativa que permita despartidizar la Corte Constitucional; despartidizarla, insisto, no despolitizarla. Y otro aspecto también que es importante señalar, es que se dice que los magistrados de esa Corte no serán objeto de fiscalización, de interpelación, de control ni de nada, no son civil ni penalmente responsables. ¿Quién les controla, entonces, en el evento que sus fallos en lugar de corregir un error lo profundicen o creen otra aberración? Entonces, necesitamos articular mecanismos de control también, del controlador de la constitucionalidad, para que siempre preserve el objetivo fundamental de su creación, que es cuidar de la constitucionalidad en el país. En otro orden, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas, en cuanto a los órganos de la protección ciudadana, protección pública, y aquí algo se está sugiriendo en el tema del fuero especial, que la sola idea que repugna, realmente, a mí me repugna la sola idea del fuero especial, cuando se dice que salas especializadas serán las encargadas del juzgamiento de las infracciones que cometan los miembros de la protección pública, en el ejercicio de sus funciones. Y eso ha sido en el pasado reciente interpretado de suerte tal de avanzar hacia la impunidad. Entonces, yo creo que...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta.------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. ... como aquí se hablado también de la unificación de organismos juzgadores, debemos tener cuidado con

eso, y la idea es aclarar que en primer lugar las salas especializadas, no estamos hablando de fuero ahí, deben haber juzgados que se encarguen justamente de resolver los asuntos en que los elementos de la Fuerza Pública, la protección ciudadana como se la denomina, cometa. No permitamos que este fuero especial siga siendo como ha sido hasta ahora, mecanismo de impunidad. Que es necesario especializar sí a las personas que juzguen actitudes de los elementos de la Fuerza Pública, pero no permitamos que el fuero especial siga siendo un elemento de impunidad en este país. Muchas gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. El asambleísta Tito Nilton Mendoza. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Gracias, señor Presidente. Yo creo que sobre este tema y a pesar de la hora y de lo cansado de la jornada de hoy, no se puede dejar de mencionar ciertos temas que tienen que ser tratados especialmente por la Mesa, para que sean incluidos para el segundo debate. Esta Corte Constitucional, que es como decía León Roldós, crear una cuarta instancia dentro de la justicia ordinaria, porque dentro de las atribuciones que va a tener esta Corte Constitucional, van a estar las de también pronunciarse, en el numeral seis del artículo once, señor Presidente: "Conocer y resolver a petición de parte la sentencia, los autos u otras decisiones judiciales en firme". Es decir, cuando una sentencia, no cuando un auto que no es sentencia, sino cuando una sentencia esté en firme, significa que es una sentencia ejecutoriada. Si está en firme la sentencia y ejecutoriada, ¿cómo puede ser revisada la sentencia? Se crea una cuarta instancia, y como bien lo decía Julio Logroño, la Corte Constitucional estaría por sobre la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia de la justicia ordinaria. Y la Corte Constitucional no está para esas cosas. Y me he enterado que en la Mesa ocho que es la Mesa de Justicia, se está

hablando también sobre este tema y va a haber al final un informe contradictorio con el tema o con el informe que estamos tratando hoy, de la Mesa tres que habla de la estructura y de las funciones del Estado. Si se creaba una Corte Constitucional como máxima instancia constitucional, solamente debió referirse a ello esta Mesa y no especificar o determinar sus atribuciones. Pues esto le tendría que corresponder a la Mesa ocho. Solo falta, señor Presidente, como leía por ahí en algún editorial de un periódico de Guayaquil, que se cree una corte celestial, que a alguien iluminado de aquí, un cerebro con bastante materialismo, se le ocurra crear una corte celestial y de una vez, como decía ese editorial, se nos juzgue en vida, para que ustedes los iluminados que inventan todas estas cosas, sean absueltos por esa corte celestial y vayan a la otra vida absueltos de sus pecados y nosotros condenados. Solo faltaría aquello, señor Presidente. Me refiero también el artículo cuatro, que es contradictorio, confuso y por sobre todo, se contrapone a lo sí está bien establecido en la actual Constitución. Ya lo decía Vicente Taiano, la jerarquización de la justicia está en el artículo doscientos setenta y dos al doscientos setenta y cuatro. Y el artículo doscientos setenta y cuatro establece una disposición constitucional que es la adecuada, porque una cosa es que se trate que los jueces apliquen la Constitución y dejen de aplicar la ley cuando ésta es contradictoria a la Constitución, y otra cosa es que se cree una Corte Constitucional para controlar que estos jueces apliquen la Constitución y no la ley por encima de ella. Son dos cosas muy distintas. Y una cosa es la justicia constitucional y otra cosa es la justicia ordinaria y ambas tienen que convivir paralelamente. Por eso el doscientos setenta y cuatro de la Constitución actual establece que cuando un juez lo considerare inaplicable o que está en contradicción una ley o una norma legal o de menor jerarquía que la Constitución, con la Constitución, puede declarar la inaplicabilidad de esa norma

legal, reglamentaria, cstatutaria, como se llame, porque está en contradicción con la Constitución. Y tiene que ir obligatoriamente al Tribunal Constitucional ahora, para que éste se pronuncie sobre esto. Y si el Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad o de la inaplicabilidad de esa norma legal, entonces es normativa general. De lo contrario, solamente se aplica al proceso, en donde el juez ha dispuesto aplicar esta norma. Eso es lo que conviene al país, pero con esta norma de la manera como está propuesta en este texto constitucional, se crearía una especie de caos. ¿Por qué? Porque se crearía una instancia superior que sería la Corte Constitucional al máximo organismo de la justicia ordinaria que sería la Corte Suprema de Justicia. Me quiero referir también, señor Presidente, a los requisitos cada vez menos rigurosos para escoger a los magistrados de esta Corte Constitucional. Igual como se ha hecho con todos los funcionarios que van a ejercer especialmente funciones de control, Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, miembros del Consejo Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes ya no se les va a exigir, por ejemplo, que tengan ciertos años de servicio o en la Función Judicial mismo o en el ejercicio de su profesión de abogado o un título de cuarto nivel, como se pretendía en la actual Constitución, en la propia Ley Orgánica de la Función Judicial, y más bien se pretende con estos nuevos textos constitucionales, que esos niveles de preparación y de experiencia y de solvencia que deban tener quienes accedan a tan altas magistraturas, vayan teniéndolos cada vez menos. Eso significa que la calidad y que el servicio que deben prestar como funcionarios públicos, todos, como magistrados especialmente y como controladores de la constitucionalidad en el país, se vea cada vez mermada más. Por lo tanto, señor Presidente, yo creo y lo voy a hacer por escrito respecto de este tema y del tema que hablamos esta mañana, voy a hacer ciertas

puntualizaciones que espero la Mesa, al menos si no lo recoge, sean tratados. He pasado algunas observaciones, por escrito, especialmente en lo que tiene que ver en otros temas como el tema de las autonomías, en la Mesa cuatro de la que usted también es parte, señor Presidente. Todavía no ha llegado el informe para segundo debate, pero al menos que se conozcan estas observaciones, para hacer de este debate más fructífero, para enriquecer la calidad del debate. Estos son temas profundos, jurídicos, que deben ser tratados debidamente, señor Presidente, no a la ligera. Sé que usted está expuesto a una maratón de trabajo, por el apuro que les lleva aprobar esta Constitución, pero es preferible, señor Presidente, trabajar como lo estamos haciendo... ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. ...desde horas de la mañana hasta horas de la noche y no importa sacrificar esos días, pero siga con el debate. Un consejo prudente, es preferible, señor Presidente, trabajar más largas las jornadas en el día, pero deje que el debate sea enriquecedor por el bien de la patria. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, asambleísta. Asambleísta Fernando Vega. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. Señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas: Es difícil para quien no es un especialista en Derecho Constitucional ni abogado, tratar temas como el correspondiente. Pero como ciudadano quiero expresar algunas cuestiones que me parecen importantes. Este conocido especialista en derecho, famoso en América Latina, Eugenio Raúl Zaffaroni, en una conferencia en Guayaquil decía que, el escaso desarrollo teórico del

Derecho Constitucional en América Latina, es una de las causas del retraso constitucional del que adolecen nuestros países. Que la falta de profundización en los temas del Derecho Constitucional, producen mucha confusión, incluso entre profesionales de larga experiencia. Que la discusión acerca de la naturaleza y del control constitucional, es entendible pero que no autoriza sostener la innecesidad y la inviabilidad de un mecanismo de control constitucional, de las leyes y de otros actos por medio de un cuerpo independiente. Dice este especialista, sin control constitucional de las leyes, la Constitución alcanza el máximo de flexibilidad que se identifica con su desaparición. No es admisible invocar ciertos argumentos para descalificar la necesidad de una corte constitucional. Pero si atendemos a la historia ecuatoriana y ahí me alegro de palabras como las de la compañera asambleísta Ximena Bohórquez, de que parecería que cuando hablamos aquí de esos temas, todo funciona maravillosamente y que ahora vamos a introducir los problemas. ¿Qué control constitucional ha habido en el Ecuador, señor Presidente? El Presidente ha acusado al Congreso de violar la Constitución, el Congreso ha acusado al Presidente y al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, todo el mundo se ha constituido en Tribunal Constitucional en este país, todo el mundo acusa a todo el mundo de violar la Constitución. Todo el mundo viola la Constitución. Perdón, señor Presidente, pero la Constitución en el Ecuador ha sido siempre papel higiénico y por eso el Ecuador no es un Estado de derecho. Por eso necesitamos un acuerdo nacional para constituir un Estado de derecho, para que el acuerdo constitucional de esta Constituyente, sea ir hacia un Estado constitucional de derecho, donde exista una Norma Suprema a la que todos nos sometemos. Una Norma Suprema que tiene como expresión del único supremo que es el pueblo ecuatoriano, pero que ha expresado su voluntad este pacto político-social de vivir en comunidad, bajo una norma que es aceptada,

respetada y acatada por todos. Si no somos capaces de sentar las bases de una cultura constitucional, de una cultura de obediencia a las leyes, señor Presidente, todos los mecanismos que aquí podamos diseñar, no servirán de nada. Podemos trazar una cancha que sea la mejor para que los actores políticos del futuro puedan hacer y construir un nuevo Ecuador, pero no podemos garantizar que esos actores políticos lo hagan. Creo que una Corte Constitucional, señor Presidente, tiene que estar conformada por los ecuatorianos más sabios, más patriotas y que más amen a este país. Que no vayan a las cortes como hoy ocurre, como fruto de la troncha política, para seguir haciendo lo que hasta ahora se ha hecho en la justicia ecuatoriana, liberar y crear cortinas de humo para favorecer a los sinvergüenzas y a los pillos, para perseguir políticamente a los que no son de la misma ideología y para sepultar en las cárceles a los pobres. Eso no puede seguir sucediendo en este país, señor Presidente. Por eso yo creo que sea como sea, como quede esta institución, fortalecida de un Tribunal Constitucional elevado a la categoría de corte, que no está por encima de la Corte de Justicia, porque la Corte de Justicia hace control de la legalidad, mientras que la Corte Constitucional hace control constitucional. Y bueno, ¿cómo nos rasgamos las vestiduras de que un fallo de un juez sea examinado por la Corte Constitucional? Aquí me han dicho que la justicia... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Vega, le interrumpo. Un punto de información. ----------

EL ASMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Con todo respeto al padre. Todos los jueces tienen que aplicar la Constitución y el principio de constitucionalidad está por sobre el principio de legalidad. Entonces, todos los jueces deben aplicar la Constitución. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. Efectivamente, algo he aprendido sobre el control difuso, compañero asambleísta, y que todos los jueces tienen que aplicar la Constitución. Pero si eso ocurriera, entonces, otro país tendríamos, no es cierto. Decía una compañera, una *compañera* Asambleísta, que la justicia se va a dilatar diez, quince, veinte años. Bueno, eso es mejor que no, que nunca llegue la justicia. Es decir, ¿qué pasa con aquellas personas que después de haber pasado por todas las instancias, siguen siendo negadas en sus derechos constitucionales? Entonces, ¿tendrán que recurrir todos ellos al Tribunal de La Haya? Porque aquí en este país no hay la voluntad política de hacer que los jueces apliquen la Constitución en todos los procesos y procedimientos con los que juzgan. Necesitamos que nos enrumbemos en una jurisprudencia constitucional, que creemos Derecho Constitucional, que no quede al arbitrio de cada juez en cada caso y en cada situación, el decidir en sentencias contradictorias con la de otros jueces y otros tribunales. Creo, señor Presidente, que es importante que pongamos atención al sistema de selección, porque es verdad que este va a ser el tribunal, uno de los tribunales más importantes de la estructura que estamos creando en esta Constitución. Y por eso hay que garantizar que a esa Constitución *vayan los mejores y vayan de manera despolitizada*. Quiero referirme solo a dos cosas de otros textos. La una es en el artículo dos, segundo inciso, me parece que está repetida y duplicada con el primer inciso del artículo nueve. Quiero transmitir también, aquí a la Asamblea, un pedido que se me ha hecho desde la ciudadanía. Cuando se habla de la obligatoriedad de todos los funcionarios, magistrados, etcétera, de presentar declaración patrimonial juramentada, se pide que además de la declaración juramentada, se exija también el historial económico de las personas. Porque ahí está el problema, no solo en que yo tenga tales o cuales bienes...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO... cómo les he adquirido, señor Presidente. Eso es muy importante, porque yo puedo haber lavado dinero de muchas maneras y llegar, no es cierto, con un capital, con un patrimonio que declaro y que durante el trabajo que he realizado no lo he incrementado. Pero, ¿cómo he llegado a obtener ese capital, ese patrimonio? Es importante también, ojala pudiera cada ciudadano ecuatoriano, tener un historial de cómo hizo fortuna, dc cómo se incrementó su patrimonio, para que "las cuentas sean claras y el chocolate sea espeso". Señor Presidente, muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Catalina Ayala. ----------

LA ASAMBLEÍSTA AYALA CATALINA. Muchísimas gracias. Aparte dc los comentarios que ya han hecho mis compañeros, aquí, por ejemplo en el artículo dos, en la parte que tiene relación con las instituciones del Estado, se menciona que no habrá dignatarios, magistrados ni autoridades ni servidores públicos exentos de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Pero eso se contradice con el artículo seis, en la parte del control constitucional, puesto que aquí se establece que "los magistrados de la Corte Constitucional, no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen y no serán responsables civil ni penalmente por los pronunciamientos emitidos durante el ejercicio de sus funciones". Entonces si lo vamos a dejar así, por lo menos establecer en este artículo, "salvo las excepciones que se establecen en esta misma Constitución", para que no exista esta contradicción. En el artículo cuatro y en los demás artículos se menciona la Ley Orgánica de Servicio Público, esta ley no está dentro del ordenamiento jurídico, es la Ley de

Servicio Civil y Carrera Administrativa la que debería estar mencionada. Además, en el artículo nueve se dice que los dignatarios, magistrados, autoridades, servidores públicos, están sujetos a las sanciones establecidas por los delitos de peculado, cohecho, concusión, y que las acciones para perseguirlos y que las pena son imprescriptibles. No creo que esto sea correcto, porque se puede prestar para abusos y para persecuciones políticas, hasta cuanto tiempo después, una persona que ha ejercido un cargo público, debe estar expuesto a que se le siga un juicio, con razón o sin razón. Debe por lo menos, establecerse un plazo, cinco años, seis años, pero no que sean imprescriptibles. ¿Qué pasa si diez años más tarde, veinte años más tarde, se le ocurre a alguien enjuiciarlo por peculado, cohecho o concusión, a lo mejor ni siquiera tiene ya en su poder los documentos que le permitan tener pruebas de descargo contra las acusaciones que se le están haciendo? Esto crea inseguridad jurídica nuevamente, por perseguir o convertirse en causal para perseguir a las personas, por parte de los gobiernos de turno o que en un momento determinado ejerza la función de Fiscal de la nación. Creo que debe limitarse el tiempo. Con respecto a la Corte Constitucional, mucho se ha dicho, concuerdo con Diana Acosta, en que debe decirse que debe declararse la inconstitucionalidad de la ley para que sea, la inconstitucionalidad de las normas, para que sean declaradas nulas. Además, tanto se ha hablado y tanto se ha criticado en esta Asamblea Nacional, la auto depuración y es precisamente a eso a lo que llegamos en el artículo seis, en la parte del control constitucional, cuando se dice que la destitución de los magistrados de esta Corte, se decidirá por las dos tercera partes de los integrantes de esta Corte. Llegamos a lo mismo, a la autodepuración que tanto hemos criticado, de la Corte Suprema de Justicia. Estoy de acuerdo con que además, los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional deben ser más estrictos, porque si lo que pretendemos es que sean

personas especializadas en Derecho Constitucional, los que vayan a esta Corte, debe establecérselo así en esta Constitución como requisito. Que sean personas que tengan una maestría o una especialidad en Derecho Constitucional. Además, nuevamente el artículo nueve, la equidad de género, si es un concurso público de merecimientos y oposición, deben ser los mejores los que lleguen a los puestos, independientemente si son hombres o mujeres. Aquí no se califica por el género si es hombre o es mujer, sino por las virtudes, las cualidades y los puntajes que tengan en base a la carrera que han llevado, los estudios que han realizado. No creo conveniente seguir poniendo el tema de la equidad de género en toda la Constitución. No en todo se aplica este tema. En el numeral quinto del artículo once, dentro de las funciones, dice que debe expedirse sentencia que constituya jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección. Estas acciones no las hemos contemplado en la Constitución. Me imagino que se refiere a la Acción de Amparo o de Tutela, pero en todo caso, si hemos definido que se llamará Acción de Amparo, debe decir aquí, Acción de Amparo. Por otro lado, en el mismo artículo cinco, dice que los casos seleccionados por la Corte para la revisión. ¿De acuerdo a qué criterios y en base a qué revisa la Corte los fallos? Nuevamente y concuerdo con la mayoria de este bloque, en que no debe prestarse la Corte Constitucional para que se revisen sentencias en firme. Si lo que buscamos aquí es revisar los procesos, ¿por qué crear una cuarta instancia? Ya pasan los suficientes filtros cuando va a la apelación y a la casación, por encima una cuarta instancia que se pronuncia sobre el debido proceso y otros derechos fundamentales, esa Corte estará repleta de trabajo, porque seguramente quienes pierdan las causas aducirán que se ha violado el debido proceso o los derechos fundamentales. Además, ni siquiera se establece el plazo para interponer el recurso, esto de aquí crea inseguridad jurídica. En el tema

de la Procuraduría General del Estado, en el artículo dos, la forma de designación, ¿para qué se la cambia? Si la función de transparencia y control social, al final en la forma que está determinada, estará controlada por el Ejecutivo. Dejemos a la Asamblea Nacional que nombre el Procurador. ¿Para qué estamos cambiando? Para que sea el Ejecutivo, de una misma terna enviada por él, quien designe al Procurador. Que sea el Ejecutivo. Perdón. Yo creo que todos merecemos atención. ¿No le parece? Aunque seamos mujeres, tanto hablamos de la equidad de género, por favor. El artículo tres en el numeral dos, debe decir, patrocinada y representada al Estado, judicialmente al Estado dentro y fuera del territorio nacional, porque esa es su función. En el artículo uno, del estado de excepción, se menciona la grave calamidad pública. Esto es subjetivo, ¿qué significa calamidad pública? Debe estar claramente establecido cuándo se puede decretar el estado de excepción. Además, cuidado con el artículo dos, si tenemos por tres meses una dictadura, cuando no tenemos derecho a la libertad de expresión, cuando se quitan nuestros derechos a la inviolabilidad de la correspondencia. ¿Para qué? Hay que mirar qué libertades se restringen en estos estados de excepción y por qué se hacen. Y por último, quisiera. Bueno, antes del último. Quisiera comentar que si bien es cierto no he formado parte de las Fuerzas Armadas, pero creo que por sentido común, no todas las personas pueden ejercer determinadas funciones. Si alguien que no tiene la estatura requerida, tiene que cargar un fusil que es más grande que él, ¿cómo lo va a hacer? Y aún si alguien tiene que pilotear un avión, tiene que tener un mínimo requerimiento de visión, eso por normas internacionales y de seguridad. Además, aquí dice que los ascensos se harán con criterio de equidad de género. Nuevamente los ascensos se hacen en base a merecimientos, antigüedades como lo dicen en términos militares. No es por género, es por merecimientos, es porque ha llevado una carrera de una

determinada manera que lo ha hecho acreedor a merecer ascensos. Y por último, quisiera referirme al Consejo Nacional para la Igualdad. Honestamente, no entiendo el fin de crear otro ente burocrático y dice que serán cuerpos colegiados compuestos por representantes de la ciudadanía organizada y no organizada. ¿Cuáles son los representantes de la ciudadanía no organizada? ¿Cómo se los escoge? Y de la función Ejecutiva, con el objetivo de transversalizar la agenda pública. Las temáticas a su cargo, el género... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

LA ASAMBLEÍSTA AYALA CATALINA... el género, etcétera. No creemos funciones burocráticas, no creemos organismos burocráticos, que lo que necesitamos es alivianar la carga estatal, para que esos recursos se utilicen en educación y salud, no en pagar a la burocracia dorada, no creo que eso sea lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Lamentablemente en esta Constitución seguimos creando entes burocráticos y repitiendo funciones. Al final, con tanto ente burocrático y con tanto organismo, todos se lavarán las manos y ninguno será responsable de nada. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Augusta Calle. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siga. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Gracias. Con los Consejos Sociales para la Igualad no estamos creando ningún nuevo organismo burocrático, ya existen esos consejos, lo que se trata es de normarlos y establecer políticas comunes para todos ellos. No vamos a crear nada nuevo. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Augusta Calle. ----------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. Gracias, señor Presidente. Yo quisiera empezar recordado a los colegas asambleistas, que el primero de julio, es decir, el día de mañana, después de cincuenta y ocho años de inactividad, la Cuarta Flota del poderoso Comando Sur de los Estados Unidos, comenzará a patrullar nuevamente aguas latinoamericanas. Esta vez, bajo el comando del contralmirante Joseph Kernan, este señor es Jefe del Comando de Tácticas Especiales de Guerra Naval, pertenece al grupo SEAL, un comando de elite con hombres entrenados para las operaciones de más alto riesgo y más difíciles. Este comando operó en Vietnam, en Camboya, en Laos. La Cuarta Flota supervisará barcos y aviones, incluyendo los civiles y comerciales que naveguen al sur de los Estados Unidos. Y por el momento no tendrá nuevas unidades, se iniciará con once buques y un portaviones. Los objetivos declarados del Pentágono, son interactuar y entrenar a otras armadas para luchar contra tráficos ilícitos... Se refiere al tema, señor, un ratito, estoy dando una declaración del Pentágono, no es nada grave ni bajos canales, es una declaración del Pentágono. ¿Sí? El señor James Stravridis, quien es el actual Jefe del Comando Sur, agregó que al tema del narcotráfico, se le suma la lucha contra el terrorismo y la posibilidad de responder a la migración masiva de refugiados hacia los Estados Unidos. Aparentemente, esto no tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero para mí, es de vital importancia. Pues si tenemos esta realidad geopolítica de un lado, que como repito, no lo digo yo, ha sido una declaración hecha por el Comando Sur. Mañana se lanza al mar y va a haber fiesta y tenemos de este otro lado un país que ha sido declarado territorio de paz. Tenemos entonces que redimensionar el rol que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir, podríamos decir que vamos a entrar en una carrera

armamentista para poder hacer un contrapeso al Ejército más grande del mundo. No, imposible, todo el presupuesto del Ecuador no avanzaria para sostener un día de guerra con los Estados Unidos ni ese es el objetivo, obviamente, somos un territorio de paz. Entonces, creo que es fundamental que en el articulado que estamos discutiendo ahora se discuta, se proponga y se reflexione sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sobre el nuevo rol que las Fuerzas Armadas deben cumplir en un territorio de paz y en una época de paz que es la que todos ansiamos, en un territorio de paz que es la única garantía para que no seamos invadidos, en un territorio donde los únicos actores armados que existan en este país sean las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía Civil Nacional, eso significa que revisemos los roles que estamos adjudicando, y en esos roles que estamos adjudicando a mí me preocupa, por ejemplo, el artículo cinco, el relacionado con las Fuerzas Armadas, cuando dice que "las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la conservación de la paz", creo que las Fuerzas Armadas como el resto de actores políticos ecuatorianos tienen que tener como misión fundamental la construcción de la paz, porque de lo contrario les ponemos a las Fuerzas Armadas de guardianes de un orden, de un establecimiento en el que supuestamente hay paz y la paz no es solamente una ausencia de violencia o una ausencia de guerra; la paz es una posibilidad de vivir bien, del "buen vivir", y el buen vivir está acompañado por el ejercicio del desarrollo; es entonces, cuando creo que es fundamental también en el segundo inciso del mismo artículo, revisar la última parte que dice que "podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo social comunitario", y aquí me parece que estamos desvirtuando uno de los grandes aportes que ha tenido Fuerzas Armadas al país y que creo que es necesario potencializar, revisar, reconocer el apoyo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas pueden darnos en telemedicina, en investigaciones sobre el fondo

marino, en estudios del espectro electromagnético, en emergencias viales, es decir en una serie de otras actividades que han desarrollado especificamente determinadas áreas de las Fuerzas Armadas, ese artículo creo que debe ser revisado dentro de este nuevo contexto. Creo que debe haber unos dos primeros artículos o un primer artículo donde se ponga un principio general de esta nueva percepción, de este nuevo concepto de lo que debe significar la seguridad y la defensa. Creo también, que sustituir el término de "Fuerza Pública" por el de "protección pública" no creo que aporta a que se haga un tratamiento separado entre la Policía y las Fuerzas Armadas como según entiendo es el objetivo de los compañeros que han propuesto el articulado, si bien es importante las responsabilidades de la seguridad interna y externa, creo que es fundamental entender que debe haber una correlación tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía y que no se las puede tratar de manera separada, como que no tuvieran nada que ver. Creo que aqui es súper importante y yo recomiendo realmente el texto propuesto por Bertha García a través de Pablo Lucio-Paredes, es un excelente trabajo que creo que debemos revisarle, leerle y recoger para aportes. También, quisiera decir que no entiendo mucho en la parte ésta del estado de excepción. Si, hay cosas que no entiendo, por ejemplo, no sé si es que cuando dice que "el estado de excepción debe responder a los principios de necesidad", no sé si es pertinente la conexidad, la intangibilidad y la controlabilidad. Creo que eso, y aqui hay juristas de primera línea, deberian revisar porque no creo que es pertinente utilizar esos principios para determinar un estado de excepción. Creo que sería interesante también que se revisen a partir del aporte de Pablo Lucio-Paredes sobre si es pertinente dividir entre estado de excepción y estado de sitio cuando se trata de agresión externa. Y para terminar, señor Presidente, quisiera decir que la Policía Nacional, que el hecho de poner Policía Civil Nacional, que

aparentemente es una simple denominación tiene una implicación muy profunda y que creo que esta nueva denominación que están proponiendo antes de presentarles para la votación en el Plenario, debería ser revisada con los actores directos que son la Policía Nacional. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Lupera. ---

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Gracias, señor Presidente, colegas asambleísta. Son muchisimos los temas que podríamos tratar, en mi caso especial como doctor en Administración Pública que soy y como doctor en Jurisprudencia, me habría encantado tratar varios temas pero el poco tiempo que tenemos para intervenir me impide hacer un análisis más detenido de cada uno de los puntos, en especial sobre la administración pública. Pero hay un asunto que me trae desde hace rato tratando de entender algo que quisiera y con su venia, señor Presidente, que se ponga el artículo primero de los Consejos Nacionales para la Igualdad, porque quiero consultar a través suyo a la Mesa número tres, que se sirvan explicarme porque no sé si es por la Ley de los Rendimientos Decrecientes, a esta hora haber agotado tantos temas, quizá sea yo solamente el que no entienda, pero creo que muchísimos de aquí no entendemos ese artículo primero. Si es tan gentil, señor Presidente, voy a dar lectura de esto y que alguien me explique, porque la verdad es que no entiendo, y quisiera aportar y hablar sobre este particular. Dice así, con su venía, señor Presidente, puedo leer: "Los Consejos Nacionales para la Igualdad son cuerpos colegiados compuestos por representantes de la ciudadanía organizada y no organizada y de la Función Ejecutiva, tiene por objetivo transversalizar en la agenda pública la política universal de las temáticas a su cargo, género, etario, étnico, trabajo, discapacidad y migrantes". Señor

Presidente, no entiendo realmente, no sé si es mala redacción o falta alguna explicación, algo sucede y después continúa, "son parte de la Función Ejecutiva y sus funciones son las de proponer políticas públicas en la materia que le corresponda monitorear y hacer seguimiento de sus avances, coordinarán sus acciones con las entidades rectoras de la política pública según lo establezca la ley". Señor Presidente, le ruego, si alguien de la Mesa tres me puede explicar este, qué quieren decir con este asunto para ver si hago algún aporte con relación a esto y después continuar con lo que quiero analizar tanto de la administración pública como de la Función Judicial. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Presidente de la Mesa, por favor, infórmele al asambleísta Lupera. ----------

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO. Sí, señor Presidente. Creo que es importante que se pueda conocer adecuadamente la fundamentación previa y el diagnóstico que se está poniendo en el tema de los Consejos Sociales para la igualdad, evidentemente esta es una institucionalidad existente, creada en la década de los noventa, donde existe el Consejo Nacional de la Mujer, existe el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, existe el Consejo de las Mujeres, el CONAMU, existe el Consejo de, me parece, los Montubios, existe el Consejo de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, el CODEMPE, el Consejo de las Discapacidades. Bueno, existe una gama bastante amplia de consejos que están integrados en la forma como dice el artículo, es decir, formados en parte por representantes de la sociedad civil y por representantes de la Función Ejecutiva y que han tenido a cargo dos tareas aparentemente. La una, la de formulación de políticas específicas para esos sectores porque han sido sectores marginados, han sido sectores obviamente que no han estado

integrados normalmente a la sociedad y además han sido ejecutores de esa política a través de programas que normalmente se han financiado con deuda externa. Pero, ha habido como decimos en todo el diagnóstico, tremendas limitaciones a los dos campos, o sea, normalmente no han podido ejecutar políticas adecuadamente y tampoco han podido ejecutar programas, ¿por qué? porque el resto del aparato del Estado no se ha sentido responsable, no se ha sentido vinculado a esas políticas. Entonces, ¿qué es lo que tratamos aquí? lo que tratamos es de establecer una normativa básica, fundamental para que básicamente sean consejos de política, como dice el artículo correspondiente. Justamente su objetivo debe ser transversalizar en la agenda pública la política universal de cada uno de los temas, esto quiere decir que fundamentalmente su función debe ser esa y no ejecutar obras, no ejecutar programas y cuál es el propósito, de adscribirlos a la Función Ejecutiva para que de esa manera pueda el conjunto de los ministerios, de las instituciones, de las secretarías a su cargo, sentirse obligadas a ejecutar esas políticas y no simplemente que serán recomendaciones que den el Consejo de las Mujeres, que den el Consejo de los Montubios o el Consejo de la Niñez y la Adolescencia y los Ministerios no se sienten responsables de eso, es decir, es un nuevo esquema de la institucionalidad de integrar a todos esos espacios a una ejecución real de la política pública. Básicamente de eso se trata señor Presidente y compañero Lupera. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Lupera, continúe en el uso de la palabra. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. Gracias, señor Presidente. Creo que debe ser las trece horas que llevamos ya en sesión, que lo entendí a medias pero en todo caso, no creo que este debe ser un tema para

ponerle como un artículo de la Constitución, la explicación es válida pero no para que esté dentro de la Constitución. En cuanto a los temas de la administración pública, en el artículo diez al cual doy muchísima importancia porque la capacitación, la formación, la carrera en administración pública es fundamental para tener una administración *totalmente solvente*. Considero que debe existir una escuela de capacitación como hay en otros paises, no es novedad, existe paises desarrollados, subdesarrollados pero que es fundamental que nosotros tengamos una administración pública totalmente como dice aquí, eficiente y eficaz y para eso es importante tener una escuela de capacitación con diferentes mandos, mandos medios y mandos superiores y que exista en cada provincia una Escuela de Servicio Público de la provincia tal, para que así nosotros tengamos la verdadera carrera y que cada uno de los escalones que van dentro de la administración pública sea en función de su capacitación, en función de su preparación y por supuesto tener también una escuela superior de administración pública, el caso de Francia, la ENA, la École National de Administración, que es la escuela de los Presidentes, como se llama ya, que van alcanzando ya un grado de preparación e información para los niveles altos de ministros y presidentes de la República. De manera que debemos dar una gran prioridad a la capacitación en administración pública, donde tengamos el reclutamiento, selección, capacitación, etcétera y el plan salarial; y podamos de esa forma sí tener una verdadera gestión pública en la administración. Y para esto quisiera sugerir una transitoria, que por una sola vez se haga una reforma administrativa total del país, hay entidades que duplican funciones, existen funcionarios de primera y de segunda y deberíamos mantener aquel dictamen que dice que a igual trabajo igual remuneración, pero existe entidades que en el mismo nivel de secretariado, de secretarias en otra entidad la diferencia es grande. Y

para esto entonces es fundamental tener una reforma administrativa global, como lo hizo México hace veinte años y como lo hizo Brasil, hace veinticinco años. Mejora totalmente el momento en que nosotros tengamos un cuerpo colegiado de gente especializada de afuera, de dentro del Ecuador, que hay gente preparada para esto, hacer una verdadera reforma administrativa, en donde se analice todos los aspectos de la administración pública. Después quiero, rápidamente por el tiempo, hablar sobre el control constitucional. Yo quisiera, nosotros tenemos, digo nosotros, Sociedad Patriótica, la Constitución que hemos presentado en el mes de enero, el quince de enero, y aquí está perfectamente bien delimitado, cuáles serían las funciones de esta Corte Constitucional, no las voy a leer pero quiero recomendarles, que *creo que todos ustedes tienen este texto* y evitar lo que aquí tenemos entre uno de los artículos; dentro del artículo once, el que más me ha llamado la atención, en el ordinal seis. Conocer y resolver la petición de parte de la sentencia de los autos. Ya les he escuchado a algunos de mis colegas Julio Logroño, el doctor Esteves sobre este particular. Esta es una herejía jurídica que no podemos permitir que exista una cuarta instancia. De manera que, no paso a hacer mayor análisis porque ya el resto de colegas abogados lo hicieron también. *Pero quisiera hablar* también, señor Presidente, sobre el artículo nueve. Es importante que exista una verdadera carrera judicial, así como tiene la Ley de Servicio Exterior la carrera para el servicio diplomático, debería también existir una carrera para la Función Judicial, en donde todo sea en base a méritos para pasar de amanuenses, auxiliares, secretarios, de jueces, a jueces de la Corte Superior y de la Corte Suprema, y deberíamos permitir que exista dentro de ellos mismo en función de su capacitación, el ascenso a cada una de estas posiciones pero, no tener injerencia política de ninguna naturaleza, podríamos hacer que de los jueces civiles, penales, del trabajo en función de los

méritos pasen a ocupar luego más tarde las funciones en la Corte Superior y los jueces de la Corte Superior pasen a ocupar en función de su capacitación, en función de su preparación y de su idoneidad en el trabajo a ser ministros de la Corte Suprema, con esto estaríamos respetando una verdadera carrera judicial. De manera que, señor Presidente, como es la primera discusión, voy a pasar por escrito estas sugerencias y hacerle llegar lo que nosotros como partido Sociedad Patriótica hemos presentado en nuestra Constitución y que veo que muchas de las cosas que hablan sobre la Corte Constitucional es y coinciden en algunas cosas con la Constitución presentada por nosotros y felicitarle al padre Fernando Vega, que ha reconocido que efectivamente no existe en el *momento* un Estado de derecho sino un Estado de hecho. Gracias, señor Presidente. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. Aclaratoria. No es, creo que mis palabras, no han sido ese el sentido en el cual he dicho. El Ecuador entero, me he referido más al tema de las leyes y que no hay un verdadero respeto a la Constitución, esta es desgraciadamente una tradición muy mala en el Ecuador, también en la época de todos los presidentes pasados, compañero Lupera, recuerde como el presidente Gutiérrez metió la mano en la Corte Suprema de Justicia. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, Luis Hernández. Señor Secretario, infórmeles a qué hora distribuyeron los textos del día de mañana. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento le revisamos, señor Presidente. *Están en el email*. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Ya le van a informar. Continúe. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS. Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas: Voy a ser un poco corto pero quiero indicarles mi preocupación en la forma como está articulado el tema de la defensa...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, le interrumpo, solamente para informarles a todos, a las diecinueve y cuarenta minutos les llegaron en todos los correos electrónicos los textos que fueron previamente colocados en la pâgina WEB. Continúe, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS. Entonces, me permito recomendar que este articulado se lo revise integralmente inclusive en la organización. El tema de la seguridad es un tema que no puede ser tratado sin un debate apropiado y por favor si creen que puedo ser útil en la Mesa, para de alguna manera darles una recomendación que ustedes están en todo el derecho de tomarla o no, para que realmente sirva a los propósitos de la Asamblea Constituyente. Sería penoso que de la Asamblea salga un articulado que dé cabida para decir que a partir de ese articulado realmente se debilitó la seguridad nacional. Estimo que se trata de ser innovadores pero hay aspectos que ya son claros y que no necesitan innovación sino reforzamiento y ver cómo a través de las reformas que son necesarias en las Fuerzas Armadas les profesionalizamos, les hacemos amantes de la ley y democráticas. Por ejemplo, en el primer artículo se habla que los fundamentos de las Fuerzas Armadas están formados bajo los fundamentos de la democracia. Las Fuerzas Armadas por su propia característica están formadas en la base de la disciplina, en las Fuerzas Armadas no hay

democracia por eso no son deliberantes, están basadas en la disciplina, esa es la esencia de las Fuerzas Armadas y están basadas en la jerarquización. Entonces, creo que tenemos que tener muy claro esos aspectos, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que ser promocionados, ascendidos en base a lo que decía la compañera Catalina Ayala, en base al mérito. Entonces, recomiendo que aquí se incluya que los ascensos tienen que ser en base a la meritocracia, hay muchas quejas en cortes administrativas, Tribunales de lo Contencioso y Tribunal Constitucional sobre ascensos, en los cuales han primado las subjetividades, las envidias muchas veces, esos defectos humanos que se producen cuando los organismos califican en base a cónclaves que no pueden ser bajo ningún punto de vista permitidos en la democracia. También se había mencionado aquí, que las personas que participan en el servicio militar, que debe ser voluntario. Yo creo que debe ser voluntario, no pueden ser empleadas en áreas de conflicto militar o tareas de riesgo militar, esto es una contradicción con el entrenamiento. Yo creo, respetando la opinión de la compañera, que habló de que había personal de las Fuerzas Armadas que había recomendado este articulado en este tema específico, creo que habrá que revisarlo y sí me gustaría saber entonces cuál es la misión que se les da a los que hacen el servicio militar obligatorio para que tengan el entrenamiento. Yo tengo el honor y el privilegio de haber comandado conscriptos en la guerra y haber sido gente que entregó toda su pasión, su amor por la patria y se entrenaron para eso. Entonces, creo que este párrafo tiene que ser revisado. También creo que todos los soldados, todos somos soldados de la patria y aquí estimo yo, sobra el patriotismo. Es por eso que estimo que se debe tratar de instaurar un servicio civil que puede ser cumplido entre los dieciocho y los veintitrés años, un servicio civil que no dure más de unos dos meses,

de manera que el joven o la joven escojan en qué momento de su vida en ese intervalo de tiempo puede hacer ese servicio civil. ¿Por qué? porque ese servicio civil va a permitir que la persona que esté en condiciones de hacer el servicio civil pueda compartir una tarea de servicio a la nación con todo el grupo de la sociedad ecuatoriana. Un afroecuatoriano con una persona de la Costa, con una persona que se ha educado en un colegio de grandes recursos económicos para llegar con otra persona que es de un colegio público y juntamente en una tarca de servicio al Ecuador, que puede ser por ejemplo la reforestación, que puede ser trabajar en un hospital de voluntario para sacar a los minusválidos o a las personas discapacitadas o de capacidades especiales a que tomen el sol, que atienda en el asilo de ancianos a las personas que pueden necesitar la ayuda de un joven; ese es un servicio civil que ya existe en Europa, que es obligatorio en Francia, en Alemania, en España de manera que en un momento de su vida todos están haciendo algo por su país; creo que esto debe ser considerado y voy a presentar la propuesta del caso. Voy a presentar por escrito mis recomendaciones de un articulado diferente que lo someto a que sea discutido, ojalá que pueda ser discutido y si creen en la Mesa que puede ser útil en esta mi experiencia, en las Fuerzas Armadas, estoy a su servicio. En la parte de la Corte Constitucional, quiero dar una pequeña recomendación. Creo que debe considerarse la necesidad o no de tener suplentes, esto se presta para corrupción. Yo les puedo decir por experiencia propia, en el Tribunal Constitucional a veces el principal ya indica la intención de su voto pero de pronto llegan los intereses, llegan las presiones, llega la corrupción y como ya de alguna manera dio la intención de su voto ya no vota más y le manda a votar al alterno con un voto totalmente diferente al que tuvo la intención el principal. Nosotros vemos como la Corte Suprema

de Justicia de los Estados Unidos que da dictámenes también constitucionales no tiene alternos y de esa forma también ha recogido la Mesa que trata la justicia, había dos cortes de lo penal que daban dictámenes totalmente diferentes sobre un mismo caso, esa es una fuente de corrupción que con la viveza criolla puede ser explotada para tal vez destruir una idea buena que se puede tener de una Corte Constitucional. Eso es todo, muchas gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Pilamunga. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PILAMUNGA CARLOS. Buenas noches, Presidente y compañeros asambleístas. En honor al tiempo voy a ser muy específico en tratar estas temáticas. En la mañana hablamos sobre la Función Legislativa, hoy estamos hablando sobre la administración pública, las garantías, la Corte Constitucional; y me viene a la mente los problemas que vivimos en Bolívar, por ejemplo, con los cantones de Chillanes y Las Naves por este problema de las concesiones mineras. El problema entre el alcalde y los concejales y el pueblo en sí, donde no ha podido resolver el Poder Ejecutivo ni el Judicial ni el Legislativo, aparecen ahora dos poderes más como el Electoral y el Control Social; y la pregunta es: Cómo resolvemos esos problemas que tenemos, hoy mismo por ejemplo en Yacuambi, ¿será tal vez con la Corte Constitucional? me hago esa pregunta. Comparto mucho con el padre Fernando Vega, todo lo que él dijo tiene relación a lo que estamos viviendo en la actualidad y creo que solamente podemos avanzar, transparentar cuando desde nosotros también vayamos siendo más transparentes en lo que nosotros estamos diciendo y haciendo en este proceso constituyente. En la sección segunda del control constitucional, se habla que este es un órgano máximo de control, de interpretación constitucional. Quizá la pregunta

que les puse puede ser una respuesta pero nosotros estamos convencidos de que tiene que ser el Legislativo quien interprete, incluso quien dé las orientaciones para resolver muchos problemas que tenemos; sin embargo, eso no se ha hecho. Y abogamos por el derecho o abogamos por la justicia, y en eso no hacemos ninguno de los dos. Igualmente, se ha topado que los magistrados no serán enjuiciados, no van a ser movidos por quien los designe, que tendrán nueve años en sus funciones, o sea, van a tener un poder, o sea que nadie les tope; entonces cómo hacemos una justicia, mejor dicho, cómo hacemos una democracia participativa, armónica, equilibrada con estos cinco poderes, sería también importantísimo aclarar. Para concluir, porque dije que no voy a hablar en kichwa también, en honor al tiempo. Si vamos a decir y dejar constancia que no queremos que desaparezcan los Consejos Sociales habida cuenta de que todos tienen que ser iguales, iguales en los derechos yo si estoy de acuerdo; pero que no signifique homogenizar o desaparecer, en eso no estamos de acuerdo. Ahí tenemos al CONAMU, CONADIS, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CODEMOP, CODEMPE, CODAIE, todos ellos nos han dejado, al menos en la Mesa uno, cómo deben ser fortalecidas estas organizaciones que han venido luchando día a día para visibilizar dentro de la estructura del Estado y también para ejercer su derecho. Y cuando vemos que quieren desaparecer, yo sí llamo a la reflexión y propongo también hacer más democráticos todos los derechos que ellos venido ejerciendo, no han sido dádiva de ningún Gobierno, sino un proceso de lucha y en eso se han adquirido estos derechos. Yo digo que van a desaparecer porque pierden la autonomía administrativa, financiera y quedaría simplemente como una institución técnica, que haría de pasa papeles, le han de hacer gestionador y le han de hacer coordinador, nada más. Pero quien toma las decisiones, quizá con este Gobierno puede ser que haya el apoyo para estas organizaciones, pero

qué pasa si no tenemos un Gobierno progresista, si no tenemos un Gobierno que esté sintonizado con el pueblo, ¿qué va a suceder? Es otra pregunta, compañeros. Por eso, no quisiéramos nosotros confundir, cuando hablan de ambigüedad, de funciones duplicadas, será por eso que este Presidente también creó la Secretaría de los Pueblos. Compañeros, eso vamos a dejar constancia, de que nosotros no queremos ya clientelismo político, peor electoral. No queremos facilismo, no queremos nosotros dependencia, sino cómo hacemos desarrollo desde esas diversidades, cómo hacemos desarrollo desde esas diversidades, como hacemos desarrollo respetando ese proceso organizativo institucional que ellos han venido haciendo. Pero sí también, exigiendo al Estado y al Gobierno que hagamos un proceso de participación en la planificación, en la ejecución y en la evaluación de todos los programas y proyectos. Eso no está sucediendo en la actualidad ni con la SENPLADES. Por eso es nuestra preocupación. Y, sobre todo, nosotros creemos que estos procesos participativos deben ser más reales, más dinámicos, constructivos, donde vayan tomando decisiones viendo su destino y cómo apoyar a nuestro país, el Ecuador. Y todos sometiéndonos a rendir cuentas de lo que hacemos, compañero Presidente y compañeros asambleístas. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Jaime Eduardo Alcívar, con usted terminamos. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ALCÍVAR JAIME EDUARDO. Muchas gracias, compañero Presidente. Compañeras y compañeros asambleístas: estando de acuerdo en lo fundamental con el articulado presentado por la Mesa tres en lo que respecta a la administración pública, no puedo dejar de señalar y veo con complacencia también, como

representante de los trabajadores, que se establece en el artículo cinco de que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables. Y claro que recoge bien esta irrenunciabilidad de los derechos de los servidores públicos, trabajadores públicos o mejor todavía, como los llaman en los convenios internacionales de la OIT a los que siempre me he referido acá, en esta Asamblea, como empleados públicos. Y, solamente quiero referirme en honor al tiempo, compañero Presidente, compañeros asambleístas, al artículo uno del Convenio ciento cincuenta y uno, que dice en dos líneas: "El presente Convenio debe aplicarse a todas las personas empleadas por la Administración Pública en la medida en que no le sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales de trabajo". Es decir que es amplísima la posibilidad de que los trabajadores encuentren y tengan mayores derechos que los que este mismo Convenio establece. Pero también en el numeral dos del artículo uno, establece lo siguiente: "La legislación nacional debe determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados de alto nivel, que por sus funciones se considera normalmente que posee poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados, cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial". Entonces, vemos con claridad cómo por un lado se amplía este artículo, numeral uno, se amplía los trabajadores. En el numeral dos, en cambio, se restringe, porque sabemos, todos conocemos que en la Administración Pública hay empleados de libre remoción, que hay empleados también de confianza y, consecuentemente, tiene que haber una diferenciación con el resto de los trabajadores, con aquellos que protege la ley, que protege la Constitución y que protege también los convenios internacionales. Concretamente, compañero Presidente, en lo que si estoy en desacuerdo es que

se siga utilizando la palabra "los obreros del sector público", como está previsto en el articulo cuatro en su inciso segundo de la propuesta que se ha presentado. Y en esto me uno también a la petición que ha formulado el asambleísta compañero Diego Borja, para que se corrija, para que se enmienda y se establezca con claridad meridiana que los trabajadores del sector público son los que estarán sujetos al Código del Trabajo y en consecuencia, aquellos que son funcionarios de libre remoción, aquellos que tienen niveles de confianza, en consecuencia estén sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Muchas gracias, compañero Presidente. Muy amables, compañeros asambleístas. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Una información importante y una sugerencia y recomendación. Tengo en mis manos una solicitud de cambio de Orden del Día para mañana, están proponiendo que al tema primero de la mañana, luego del Himno Nacional se le fraccione en dos puntos, en dos temas. Se trata del informe dc la Mesa uno, que corresponde a Derechos de la comunicación y Derechos de la naturaleza. Las sesiones están programadas para hacerlas en cuatro horas, empezando mañana a las ocho y media. Luego suspenderemos para que las Mesas puedan seguir elaborando sus informes para segundo debate y reiniciaremos a las cinco de la tarde. Yo les dejo la inquietud a que la mediten, la piensen, si es que logramos ese acuerdo sería muy bueno, que sin cambiar el Orden del Día, sin desmembrar lo que está ordenado, porque este orden tiene coherencia para los segundos debates, podamos aumentar una hora en el debate de la mañana, en vez de ser cuatro podrían ser cinco y que podamos tratar ordenadamente el Orden del Día, es decir, primero el debate se abre y simplemente se limitan en los tiempos de intervención, no en el número de intervenciones; en el tiempo de

intervención hablan en vez de diez minutos que les da el Reglamento, hablan cinco minutos sobre la comunicación y los que quieran repetir después sobre la naturaleza pues hablan los otros cinco minutos. Es nada más que una sugerencia, no está en el Reglamento, piensen y si es que creen que tiene lógica, pues ayúdenme a que esta sesión sea ordenada y no desordena. Muchas gracias, hasta mañana. ----------

VII

El señor Presidente clausura la sesión cuando son las veintidós horas cuarenta y seis minutos.----------

FERNANDO CORDERO CUEVA
Presidente de la Asamblea Constituyente

FRANCISCO VERGARA ORTIZ
Secretario de la Asamblea Constituyente

LRG/